

MILITARISMO Y CRISIS AMBIENTAL. UNA REFLEXIÓN NECESARIA

Coordinación: Chloé Meulewaeter · Pere Brunet
Autoría: Gemma Amorós · Xavier Bohigas · Teresa de Fortuny
Anna Montull · Albert Orta Mascaró · Pere Ortega
Ainhoa Ruiz Benedicto · Quique Sánchez Ochoa



Publicado por:



Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Carrer Erasme de Janer 8, entresol, despatx 9

08001 Barcelona

T. 93 441 19 47

www.centredelas.org

info@centredelas.org

Coordinación: Chloé Meulewaeter, Pere Brunet

Autoría: Gemma Amorós, Xavier Bohigas, Teresa de Fortuny, Anna Montull,

Albert Orta Mascaró, Pere Ortega, Ainhoa Ruiz Benedicto, Quique Sánchez Ochoa

Barcelona, enero 2021

Diseño y maquetación: Esteva&Estêvão

Foto de portada: Bill Huntington/ClimateVisuals; p. 5: Stringer; p. 9: Adam Stevenson;

p. 13: Steve Gozzo, USN; p. 32: soyuzmash.ru; p. 44: Iurii Bakhmat; p. 57: Centre Delàs; p. 71: Tommi Boom

D.L.: B-19744-2010

ISSN: 2013-8032

ISBN: 978-84-09-26021-8



ÍNDICE

Resumen ejecutivo	5
Introducción	9
1. Privilegios, depredación de recursos y el sistema dominante basado en el poder militarista	13
1.1 Privilegios, militarismo y calentamiento.....	13
1.2 Crisis ambiental y conflictos armados.....	18
1.3 El discurso político: el cambio climático como amenaza a la seguridad	24
2. Las emisiones del sistema militar y el calentamiento global ...	32
2.1 ¿Qué hacemos con el elefante en la habitación? Análisis de los impactos medioambientales militares	32
2.2 Emisiones de gases de efecto invernadero de las fuerzas armadas de los EE. UU.	37
3. La vulneración de los derechos de las personas	44
3.1 Refugiados climáticos y muros militarizados	44
3.2 Defensoras del medio ambiente y respuesta represiva y militarizada de las autoridades públicas y brazo privado.....	49
4. La transición ecológica, la paz ambiental y el necesario trasvase de fondos del sistema militar a la seguridad humana ...	57
4.1 Construcción de Paz y medio ambiente	57
4.2 El búnker en llamas. Paz y desarme en la lucha por la justicia climática	62
Conclusiones	71
Bibliografía	75

ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS Y MAPAS

Tabla 1. Exportación de armas, poder corporativo y emisiones	15
Tabla 2. Países considerados de muy alto riesgo según el ranking general de INFORM GRI 2020	20
Tabla 3. Resumen de la teoría de la rueda de destrucción y del ciclo económico militar	36
Tabla 4. Diez países más afectados según el Índice de Riesgo Climático Global en 2018.	43
Tabla 5. Muros fronterizos que interfieren en el desplazamiento por motivos ambientales	46
Tabla 6. Asesinatos de DDHA vinculados a las fuerzas estatales	52
Tabla 7. Construcción de Paz	57
Tabla 8. Hacer las paces	58
Gráfico 1. Causas y consecuencias de la crisis ambiental. Militarización versus paz positiva y seguridad humana	10
Gráfico 2. Las seis perspectivas que contempla el informe.	10
Gráfico 3. Círculo de los privilegios, de las desigualdades globales y del militarismo.	17
Gráfico 4. Los impactos medioambientales de la militarización	35
Gráfico 5. Emisiones de CO ₂ e del Departamento de Defensa de los EE.UU. desde 1975 hasta 2017	38
Gráfico 6. Emisiones de CO ₂ e del DoD y de la industria militar de EE.UU. y del total estatal de algunos países (2017).	40
Gráfico 7. Equilibrio y cuidado de las personas y el planeta versus militarismo y crisis ambiental	70
Mapa 1. Riesgo por causas humanas	21
Mapa 2. Riesgo por fenómenos naturales (unificado)	21
Mapa 3. Riesgo por fenómenos naturales (específico)	22
Mapa 4. Falta de capacidad de resiliencia frente a los riesgos naturales y humanos.	23
Mapa 5. Vulnerabilidad frente los riesgos naturales y humanos	23
Mapa 6. Índice de Riesgo Global para los años 1999-2018	44
Mapa 7. Principales rutas migratorias	45



RESUMEN EJECUTIVO

La crisis ambiental, que incluye un gran número de fenómenos interrelacionados a nivel planetario, será el gran problema global del siglo XXI. Durante décadas, y guiados por el absurdo mito del crecimiento ilimitado que algunos defienden, hemos llegado a superar la capacidad de generar recursos de la Tierra, hemos roto los equilibrios ecológicos y nos hemos ido acercando a un punto múltiple de no retorno que, si lo cruzamos, nos eliminará como especie. Sabemos que el calentamiento planetario se ha descontrolado, vemos que la depredación de recursos naturales avanza sin ningún tipo de regulación, nos sorprenden nuevas pandemias, pero algunos, y sobre todo los centros de poder y las grandes corporaciones, continúan priorizando el beneficio económico a corto plazo y para unos pocos, por delante del bienestar de la mayoría de las personas y la sostenibilidad del planeta. Sabemos que la actividad humana facilita las pandemias, porque la deforestación y la pérdida de biodiversidad (extinción de especies por causas antropogénicas) favorecen el salto de los patógenos desde los animales a los hombres, además de contribuir al calentamiento global y a la crisis climática. La temperatura global sigue subiendo y la media anual de hectáreas deforestadas supera los 26 millones, con efectos demostrados sobre el calentamiento y sobre la propagación de nuevos virus y epidemias. Hay crisis rápidas e imprevistas, como las pandemias globales, que coexisten con la climática, lenta y casi imperceptible pero que puede tener efectos devastadores para nuestros descendientes. La actual crisis ambiental puede fácilmente convertirse en un completo colapso planetario.

Según un reciente informe de IPBES,¹ desarrollado por 150 expertos internacionales ayudados por 350 personas colaboradoras y elaborado a partir del análisis de más de 15.000 publicaciones científicas y del estudio

1. IPBES (2020): "Informe de la Evaluación Mundial sobre la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas", Manuela Carneiro da Cunha, Georgina M. Mace y Harold Mooney, Eds. - Disponible en: https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_es.pdf (última consulta, 30 de noviembre de 2020).

de los conocimientos locales e indígenas, el cambio climático es un impulsor directo que exacerba cada vez más los efectos de otros impulsores sobre la naturaleza y el bienestar humano:

"En promedio, alrededor del 25% de las especies de grupos de animales y plantas evaluados están amenazadas, por lo que alrededor de un millón de especies ya están en peligro de extinción, muchas dentro de pocos decenios, salvo que se adopten medidas para reducir la intensidad de los factores impulsores de la pérdida de diversidad biológica. Si no se adoptan medidas, habrá una mayor aceleración del ritmo de extinción de especies en todo el mundo, extinción que ahora ya es decenas, cuando no cientos de veces superior a la media de los últimos diez millones de años."

El informe continúa explicando que "las actuales tendencias negativas de la diversidad biológica y los ecosistemas socavarán los avances en el 80% (35 de 44) de los objetivos específicos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas relacionados con la pobreza, el hambre, la salud, el agua, las ciudades, el clima, los océanos y las tierras".

Pero no se puede hablar de crisis ambiental sin tener en cuenta el gasto militar y el militarismo. Porque, como ha demostrado la pandemia del Covid'2019, ni el modelo de seguridad nacional basado en el concepto securitario ni sus soluciones militarizadas sirven para resolver los grandes problemas que tiene y tendrá la humanidad, dado que la crisis ambiental es esencialmente global mientras que las soluciones securitarias, pensadas para defender las fronteras de los Estados-nación, son inútiles en estos retos transfronterizos.

Necesitamos menos soldados, menos aviones y armas, y en cambio necesitamos más médicos, más hospitales, energía verde y soluciones para cubrir las necesidades y garantizar los derechos de todas las personas. Durante décadas nos hemos equivocado estableciendo nuestras prioridades. Es momento de plantearnos que el gasto militar ha absorbido una gran cantidad de recursos públicos proporcionando una falsa noción de seguridad que no tiene nada que ver con las necesidades de la mayoría de la población y con los derechos a la salud, la educación, a la justicia energética, a la vivienda y a la calidad de vida, que requerirían soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Y es momento de constatar que el sistema militar es, además, uno de los grandes contribuyentes a las emisiones y al calentamiento global. Se necesitan soluciones constructivas para las personas y el planeta, no "soluciones" destructivas basadas en la imposición, el recorte de derechos, la violencia y los conflictos armados. Es momento, por tanto, de reivindicar un cambio de prioridades y un trasvase de recur-

sos, traspasando fondos presupuestarios militares a partidas que permitan construir nuevos sistemas de seguridad que sirvan para todas las personas.

LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE ESTE INFORME SON:

EN RELACIÓN CON LOS PRIVILEGIOS QUE SE ASIENTAN EN LA DEPREDACIÓN DE RECURSOS:

- El conjunto de los principales países exportadores de armas representa el 35,48% de la población mundial, concentra el 82% del gasto militar global y es responsable de las dos terceras partes de las emisiones mundiales de CO2.
- Estos países generan el 67,1% de las emisiones mundiales de CO2 que causan el calentamiento planetario y concentran los centros de poder que controlan de manera efectiva más de 63.000 corporaciones transnacionales.
- La China, Reino Unido, España, Israel, Italia, Países Bajos, Corea del Sur, Ucrania, Suiza, Turquía, Suecia, Canadá, Noruega, Los Emiratos Árabes, Chequia, Bielorrusia, Australia, Arabia Saudita y Japón, suman poco más de un tercio de la población mundial (un 35,48%), pero fabrican y exportan prácticamente todas las armas que se hacen en el mundo, armas que terminan activando conflictos y matando personas sobre todo en los países más afectados por el cambio climático.

EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DOMINANTE, EL PODER MILITARISTA Y LOS CONFLICTOS ARMADOS:

- La degradación medioambiental conduce a una escasez de recursos que genera mayores enfrentamientos entre grupos de población, de manera que se aumenta el posible estallido de conflictos armados.
- La inclusión del cambio climático como un factor relevante en los planes estratégicos de la OTAN es un indicador de la militarización del clima, mostrando que es una oportunidad para la justificación de aumentos del gasto militar, de la estrategia de disuasión nuclear, y de las operaciones militares de los aliados.
- Recientes documentos de políticas de seguridad, tanto en España, como en Estados Unidos, en la Unión europea y en la OTAN, apuntan al cambio climático como elemento relevante de seguridad, como "potenciador de riesgo" o "multiplicador de

amenazas". Pero enfocar el cambio climático como una cuestión de seguridad conlleva un riesgo: la militarización.

- El concepto de guerras climáticas elude la responsabilidad humana en las guerras al alegar que la causa de estos conflictos se encuentra en factores climáticos incontrolables.
- Los 11 países que están considerados con mayor riesgo de crisis humanitarias y desastres naturales a nivel mundial son Somalia, República Centroafricana, Sudán del Sur, Afganistán, República Democrática del Congo, Chad, Yemen, Níger, Burundi, Camerún y Burkina Faso, y todos ellos se encuentran inmersos actualmente en conflictos armados.

EN RELACIÓN CON LAS EMISIONES Y DAÑOS MEDIOAMBIENTALES PROPIOS DEL ESTAMENTO MILITAR:

- La degradación ecológica es inherente a los procesos de militarización. Se prevé que a medida que aumenten los gastos militares, los impactos medioambientales militares serán cada vez mayores.
- Todas las etapas del ciclo económico militar se relacionan con daños específicos al medio ambiente, desde el consumo de energía y recursos necesarios para la actividad militar habitual, los ensayos y la producción de armas, así como su transporte, hasta la reconstrucción posconflicto y hasta la contaminación provocada por los desechos tóxicos, y la deforestación, pérdida de hábitat y de ecosistemas consecuencia de la militarización y de los conflictos armados.
- Las fuentes de emisión de gases con efectos invernaderos más relevantes vinculadas al sector militar son las emisiones de las instalaciones y de actividades militares no directamente relacionadas con la guerra, las emisiones relacionadas con la guerra en operaciones de contingencia en el extranjero, las emisiones de la industria militar, y las emisiones generadas por ataques y a objetivos petroleros.
- Las emisiones de CO₂ de los ejércitos de todo el mundo se estiman entre un 5 y 6% del total de emisiones de carbono.
- El gasto militar de EE.UU. es el mayor del mundo. El año 2019 fue de 732.000 millones de dólares, esto es 38% del gasto militar mundial y más del doble de la suma de los gastos militares de Rusia (65.100 millones de dólares) y de China (261.000 millones de dólares). EE.UU. dispone de la mayor maquina-

ria de guerra del mundo. Las fuerzas armadas de EE.UU. consumen más petróleo y emiten más GEI que la mayoría de los países de tamaño medio.

- Si el departamento de defensa de EE.UU. fuera un Estado, sería el 47º mayor emisor de gases de efecto invernadero GEI del mundo. La actividad militar de EE.UU. fue la responsable de la emisión de 212 millones de toneladas de CO₂e durante el año 2017. Estas emisiones son casi el doble de las emisiones de Bélgica (114 millones de toneladas) o la mitad de las de Francia (471 millones) durante el mismo año.

EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS:

- En las principales rutas migratorias utilizadas por las personas que huyen de las crisis climáticas hay muros militarizados. Esto implica que las personas desplazadas por cuestiones ambientales se tendrán que enfrentar a la violencia militarizada de los muros, y tendrán que cambiar y alargar su ruta para llegar a posibles países de acogida, con los riesgos y los costes que esto implica.
- Se estima que los desplazamientos forzados por causas climáticas superarán los 200 millones de personas en 2050.
- De los diez países más afectados por la crisis ambiental en 2018, cuatro de ellos (Japón, Alemania, India y Canadá) se encuentran también en el ranking de los 15 países más contaminantes en emisiones de carbono en el mismo año. Y en el ranking de estos 15 países más contaminantes, 4 de ellos (Estados Unidos, India, Arabia Saudí y Sudáfrica) han construido muros que interfieren en las rutas migratorias de las personas desplazadas por cuestiones ambientales.
- Las personas defensoras de los derechos humanos medioambientales tienen tres veces más probabilidad de sufrir violencia y coacción en relación a otras personas defensoras de derechos humanos.
- Del total de asesinatos de personas defensoras de los DH registrados a nivel mundial en 2018 (321 muertos), el 77% eran DHA, en su mayoría vinculadas a conflictos derivados de la actividad de industrias extractivas y de macro-proyectos que contaban con el apoyo de los Estados.
- En 2018 se asesinaron 164 activistas defensores de los derechos humanos medioambientales, que protestaban principalmente contra la industria extractivista, la industria minera, las presas, la explotación forestal y la agroindustria.

- América latina y Asia-Pacífico son las regiones que cuentan el mayor número de asesinatos de personas defensoras, y los grupos indígenas son las principales víctimas de estos asesinatos.

EN RELACIÓN CON LA NECESARIA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DESDE UNA PERSPECTIVA DE PAZ:

- La transición ecológica pasa necesariamente por procesos de desarme y desmilitarización: reducción del gasto militar mundial, conversión de la industria armamentística en industria de energías renovables, y desmantelamiento del arsenal nuclear.
- Es necesario trabajar la paz desde un enfoque de paz medioambiental, esto es, abordar la crisis ambiental desde el estudio de las violencias (directas, estructurales y culturales) cometidas sobre la naturaleza.
- En un contexto de transformación del clima, la seguridad será imposible sin una justicia climática. En este sentido, las propuestas para una transición ecológica deben incorporar necesariamente un estudio riguroso del actual gasto militar, de la producción y comercio de armas, y de las priorida-

des para redistribuir los gastos presupuestarios de los países, con el fin de pasar de enfoques basados en el concepto de seguridad nacional militar a un enfoque basado en las necesidades y los derechos sociales de todas las personas.

- De la misma manera que la seguridad a largo plazo no puede existir sin justicia social, hay que poner la seguridad humana en el centro. La solución a la crisis ambiental pasa por la desmilitarización y desarme internacionales.

En este contexto, creemos que es necesario apostar por una ética centrada en todas las personas y en el planeta, superando este modelo patriarcal, capitalista y militarista que está destruyendo el entorno y la vida de la gente, y empezar a pensar en términos de equilibrio ecológico, de derechos de todas las personas y en términos de cuidados. Es esencial que tanto la lucha contra la crisis ambiental como la transición ecológica incorporen y exijan la reducción de los gastos militares mundiales y el trasvase de estos fondos para la financiación de políticas de seguridad para la paz. En este sentido, es imprescindible cambiar de paradigma de seguridad, y dar el paso de la seguridad militarizada a la seguridad humana.



INTRODUCCIÓN

La crisis climática y el colapso medioambiental son la mayor amenaza global a la que se enfrenta la humanidad en este siglo. El calentamiento global, la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad, y la mayor ocurrencia de desastres naturales están ampliamente descritos y consensuados entre la comunidad científica. Más allá de los efectos sobre la naturaleza, existen cantidad de estudios sobre las consecuencias que tendrá la crisis ambiental sobre los procesos sociales, políticos y económicos. Pero, como amenaza que representa, la pregunta es: ¿desde qué paradigma de seguridad estamos analizando esta crisis?

En este informe queremos presentar, desde un enfoque crítico y con perspectiva de seguridad humana, varias aproximaciones a la problemática de la crisis climática y sus vínculos con el militarismo. Estas giran alrededor de seis ejes. El primero trata de los privilegios que se asientan en la depredación de recursos por parte de los países occidentales, responsables en buena medida de la amplitud de la crisis ambiental y climática a la que nos enfrentamos. El segundo eje aborda la cuestión del sistema dominante actual, basado en el poder militarista. Las emisiones de CO₂ y daños medioambientales propios del estamento militar son el tercer eje de la publicación. El cuarto es la vulneración de derechos de las personas, en concreto los defensores de los derechos humanos medioambientales y los refugiados climáticos. El quinto eje de análisis trata de los dividendos de paz y del necesario trasvase de fondos militares para financiar políticas de seguridad para la paz. Y el sexto y último presenta recomendaciones para la necesaria transición ecológica desde una perspectiva de paz positiva y de paz ambiental. Estos ejes se desarrollan y se interrelacionan en los nueve capítulos de esta publicación.

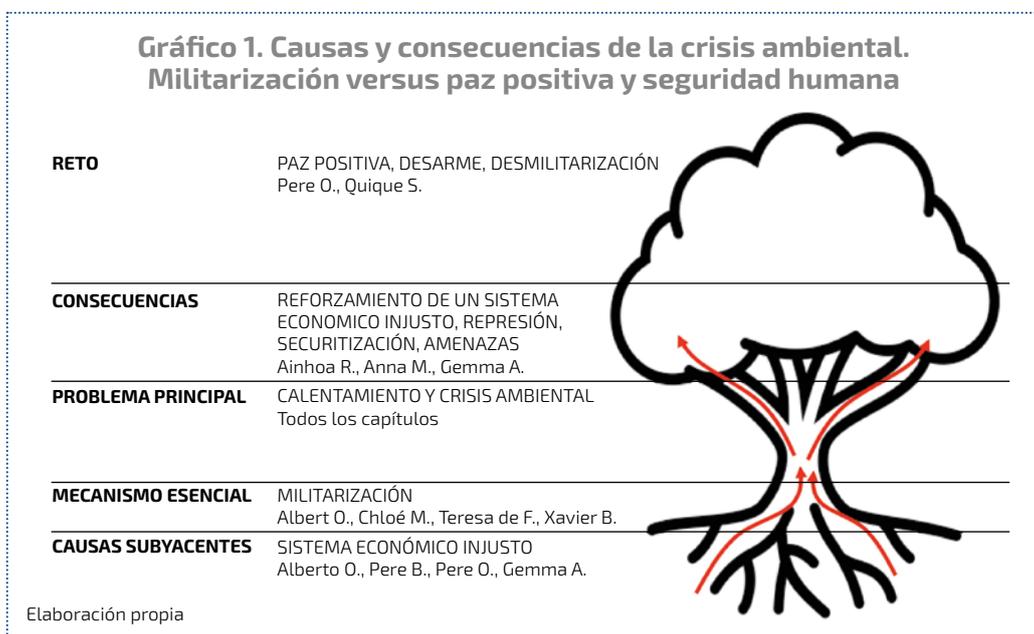
Este informe busca pues, dar pistas sobre los vínculos entre el militarismo y la crisis climática global. Estas permiten entender como el militarismo, y más específicamente el estamento militar, es una de las causas relevantes en el calentamiento global y en los daños medioambientales que se observan alrededor del planeta, y como el militarismo, desde una perspectiva de seguridad nacional y militar, es la consecuencia y respuesta actual frente a esta crisis. En este sentido, el informe trata de dar propuestas para una transición ecológica exitosa, que implica necesariamente un enfoque de paz medioambiental y una desviación de gastos y fondos militares hacia la financiación de políticas de seguridad para la paz para desarrollar políticas de mitigación de los efectos de la crisis climática.

Como primer informe que se publica dentro de la nueva línea de investigación del Centre Delàs d'Estudis per la Pau sobre militarismo y crisis ambiental, presentamos aproximaciones al vínculo entre el militarismo y la crisis climática y ambiental actual. Las metodologías y fuentes, en consecuencia, varían en función de los capítulos, pues responden a la disponibilidad de datos y bibliografía respectiva a cada tema abordado.

Tal como muestra el el gráfico 1, los diferentes capítulos del informe indican que la crisis ambiental asociada a las emisiones, el calentamiento planetario y la destrucción del equilibrio ecológico tiene como causa subyacente el actual sistema económico injusto y depredador, que utiliza como mecanismos esenciales para su supervivencia la militarización y las solucio-

nes basadas en el uso del gasto militar. Pero, como se mostrará, esta militarización es también parte de las causas de la crisis climática, de manera que tanto el actual sistema económico como la securitización y militarización son las raíces del problema, que crece como un árbol con consecuencias que implican el refuerzo de este sistema económico injusto y las amenazas y represión con tra los derechos de las personas y su dignidad. En este contexto, el gran reto actual es el de conseguir un desarme y un proceso de desmilitarización que nos pueda llevar a la construcción de una Paz positiva.

En este contexto, los nueve capítulos que siguen se interrelacionan para cubrir las seis perspectivas que esquematiza el gráfico 2.



Estas son las seis perspectivas que analiza y desarrolla el informe en sus distintos capítulos:

1. Sobre los privilegios, la depredación de recursos y los países que más sufren la crisis ambiental (AM, AO, AR, GA, PB, TF, XB²):

El actual estilo de vida de los privilegiados se basa en una depredación y explotación de los recursos (básicamente del Sur Global) que, además de ser el principal contribuyente al calentamiento global del planeta, se hace con el uso de la fuerza. El calentamiento planetario es la fuente de los beneficios de las élites políticas y económicas y el armamento es el medio para la securitización de su fortaleza. Los efectos del cambio climático son indisolubles del aumento de la violencia y la pérdida de derechos, y de un sistema económico que no sólo condena millones de personas a la pobreza, sino que está en la raíz de la crisis climática.

2. Sobre el sistema dominante que se basa en el poder militarista (AO, AR, GA, PB, PO):

Basamos nuestros privilegios en un modelo militarista y genocida, que además de provocar la crisis ambiental saca rentabilidad de los conflictos armados. Por otra parte, ignora el pasado colonial de muchas regiones que hoy se señalan como origen de los conflictos y las migraciones climáticas. El discurso centrado en la seguridad nacional es lo que refuerza el enfoque geopolítico clásico basado en la supervivencia del Estado en un entorno global hostil. Entender los retos del cambio climático desde esta perspectiva sólo contribuye a activar la retórica nacionalista basada en la dicotomía ellos / nosotros que dificulta la cooperación internacional. Mientras continúe prevaleciendo el capitalismo como sistema económico, el cambio climático será irreversible y el colapso planetario será irremediable.

3. Sobre las emisiones del sistema militar y el calentamiento global (CM, QS, TF, XB):

El gasto mundial en medidas paliativas y de adaptación a la emergencia climática es notablemente menor que el gasto militar mundial. En el año 2016 el gasto militar fue doce veces mayor que el destinado a la crisis climática. Paradójicamente, una parte importante del petróleo consumido en operaciones militares de EEUU en el exterior se destina a los barcos y aviones que protegen el acceso al petróleo y las rutas marítimas de transporte de este petróleo. Además, el sector militar ha optado por centrarse en la gestión de las consecuencias del colapso ecosocial, considerándose parte de la solución y no del problema. Dados los efectos que podrían tener las respuestas militares en la crisis

medioambiental, es urgente investigar en profundidad el papel que debe tener el sector militar en relación al que deben tener otros sectores ligados a la seguridad humana.

4. Sobre la vulneración de los derechos de las personas (AM, AO, AR, GA):

Se crea un discurso planetario marcado por "conflictos climáticos", con unos movimientos de población, los "migrantes climáticos", que se ven como amenazas a la estabilidad de los Estados y del orden que representan. El proceso securitario convierte las poblaciones en riesgos potenciales y quiere legitimar los espacios fronterizos como espacios en guerra, con técnicas, estrategias y tecnologías militares y policiales, y como espacios de excepción para detectar, interceptar y expulsar a las personas que huyen, entre otras razones, de la violencia ambiental. Pero la militarización empieza a partir del momento en que aceptamos el uso de la violencia organizada como una respuesta legítima y apropiada a los diferentes retos sociales a los que nos enfrentamos como sociedad.

5. Sobre los dividendos por la Paz y el trasvase de fondos del sistema militar a la seguridad humana (CM, PO, QS):

Si se limita el poder militar de las grandes potencias se podrán reducir las prácticas depredadoras de las grandes corporaciones. Porque la paz medioambiental está destinada a proteger la naturaleza considerando el planeta Tierra como un solo sistema que une humanidad y naturaleza. Y por ello hay que incluir la responsabilidad del sector militar en el discurso de los movimientos que buscan soluciones a la crisis climática y ambiental. Hay que implementar un sistema de dividendos por la paz a nivel global que comporte el desvío de recursos económicos militares hacia la financiación de políticas relacionadas con la seguridad humana. La reducción del gasto militar y la construcción de paz deben formar parte de las reivindicaciones y de los debates por el clima.

6. Sobre la transición ecológica y la paz ambiental (PO, QS):

Hay que hacer explícitos los vínculos entre el militarismo y la emergencia climática, deslegitimando las respuestas militarizadas y securitarias a la crisis climática, pidiendo la reducción del gasto militar mundial y liberando recursos públicos y privados que podrían perfectamente ser utilizados para impulsar una Transición Ecológica. Cualquier propuesta para una transición ecológica que quiera evitar los efectos de la crisis ambiental y el consecuente colapso ecosocial deberá necesariamente incorporar procesos exhaustivos de desmilitarización y

2. Iniciales del nombre y apellido de las personas autoras de los capítulos correspondientes.

desarme internacionales. Hay que trabajar y hacer camino hacia una Paz positiva y medioambiental que esté centrada en las personas, en sus derechos y en la justicia social.

El trabajo realizado en este informe quiere presentar las diferentes relaciones existentes entre las estructuras de poder (estatal, transnacional y entramado

militar-industrial) por un lado, y la crisis ambiental por otro, mostrando, en diferentes escenarios, que quien sufre las consecuencias, además del medio ambiente y el planeta, son las personas, sobre todo las más vulnerables. La solución a la crisis ambiental pasa necesariamente por un proceso de desmilitarización a nivel mundial.



1. PRIVILEGIOS, DEPREDACIÓN DE RECURSOS Y EL SISTEMA DOMINANTE BASADO EN EL PODER MILITARISTA

1.1 PRIVILEGIOS, MILITARISMO Y CALENTAMIENTO

Pere Brunet

La Comisión Europea tiene una vicepresidencia de "promoción de nuestro modo de vida europeo" (la propuesta inicial hablaba de "preservarlo"). Es un concepto que habla de los privilegios de los que estamos en la fortaleza de los países del Norte y, sobre todo, de los privilegios de una muy pequeña minoría a nivel mundial. Son privilegios que se basan en el mantenimiento del poder y en argumentos irracionales de acceso ilimitado a los recursos, ignorando todos los razonamientos contrastados que vienen de la ciencia. Y son privilegios que, al no poderse sustentar en la razón, se basan en la violencia y el uso de la fuerza. El calentamiento, con todos los efectos de empobrecimiento que tiene en el Sur, es el subproducto inevitable del actual estilo de vida del Norte.

CALENTAMIENTO PLANETARIO Y EMERGENCIA CLIMÁTICA

El año 2019 se ha cruzado, por primera vez en la historia, el umbral de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de 415 partes por millón (ppm).³ Los

actuales niveles de CO₂ en la atmósfera son los más altos de los últimos 400 mil años. Tras fluctuar entre 200 y 280 ppm durante los períodos glacial e interglaciares, en 2013 la concentración de CO₂ traspasó el nivel simbólico de las 400 ppm, y en los siguientes seis años hemos subido 15 partes por millón más. La causa primordial de este crecimiento desmedido es evidente, si tenemos en cuenta que alrededor de un 60% del CO₂ que producimos durante la combustión de los combustibles fósiles se queda en la atmósfera;⁴ la civilización de los combustibles fósiles está poniendo en peligro al planeta y a gran parte de la población mundial.

El uso de combustibles fósiles tiene consecuencias inmediatas que repercuten en la contaminación y en la calidad del aire, pero lo más dramático a nivel planetario es la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y básicamente CO₂, invisible pero que puede terminar siendo inmensamente destructivo durante el siglo XXI. Los científicos, y en particular el comité IPCC de Naciones Unidas, lo está recordando desde su creación en 1988. En noviembre de 1992, alrededor de 1.700 científicos del mundo, incluyendo la mayoría de premios Nobel en ciencias que seguían vivos en aquel momento, publicaron una advertencia a la humanidad (Abragam, 1997). Decían que las actividades humanas causan daños a menudo irreversibles en el medio ambiente y en los recursos críticos, y que muchas de nuestras prácticas actuales pueden acabar alterando el mundo vivo. Explicaron que era muy

3. Peter Dockrill, Science Alert, 13 de mayo de 2019 (última consulta, 10-1-2020): <https://www.sciencealert.com/it-s-official-atmospheric-co2-just-exceeded-415-ppm-for-first-time-in-human-history>

4. Gráfico de la NASA sobre el cambio climático (última consulta, 10-1-2020): https://climate.nasa.gov/climate_resources/24/graphic-the-relentless-rise-of-carbon-dioxide/

urgente hacer cambios fundamentales para evitar la colisión que podía llegar. Afirmaron que las naciones desarrolladas son los más grandes contaminantes a nivel mundial, y que "el éxito en este esfuerzo global requerirá una gran reducción de la violencia y la guerra. Los recursos que ahora se dedican a la preparación y conducción de la guerra serán necesarios para estas nuevas tareas, y tendrán que desviarse hacia los nuevos retos". Ningún gobernante les hizo caso.

El número de avisos de los científicos desde 1992 se ha multiplicado. En 2017, la revista *Bioscience* publicó un artículo de William Ripple, Christopher Wolf y 15.372 científicos de 180 países, en el que insistían en el riesgo de destruir irreversiblemente buena parte de la vida en la Tierra (Ripple, 2017). En 2018, un artículo altamente clarificador de Will Steffen, Johan Rockström y otros, explicaba el peligro inminente de cruzar el umbral que puede desestabilizar la biosfera, llegando a una temperatura global media muy superior a la del último millón de años. Según Hans Joachim Schellnhuber, director del Instituto investigación climática de Potsdam y coautor del artículo de William Ripple, un calentamiento de dos grados podría activar importantes fenómenos en cascada (deshielo, desaparición del "permafrost", emisiones de metano, desertización, cambios radicales en el sistema bacteriano, etc.), aumentando aún más la temperatura como resultado de un efecto dominó incontrolable que produciría un incremento de temperatura media del planeta de 4 o 5 grados. En estas circunstancias, dice Schellnhuber, la población mundial podría caer en picado desde los actuales 7.500 millones hasta unos mil millones.⁵ Y un nuevo artículo de 2019 firmado por William Ripple junto con 11.200 autores muestra, "clara e inequívocamente", que el planeta se encuentra en emergencia climática.⁶

Las evidencias científicas son indiscutibles. El planeta puede entrar pronto en una dinámica que puede destruir miles de millones de vidas humanas, además de las de muchos otros seres vivos. La humanidad (y sobre todo los países del Norte, como veremos a continuación) ha derrochado recursos en combustibles fósiles del planeta, con políticas extractivas basadas en el negocio y en los beneficios a corto plazo de unos pocos. Y lo ha hecho sin considerar ni los límites planetarios ni los equilibrios sociales, ambientales, y ecológicos. Se han aplicado políticas irracionales basadas en un supuesto crecimiento continuado e ilimitado, imposible y científicamente absurdo en un mundo de recursos limitados. El crecimiento sin fin

ha sido el gran engaño que ha posibilitado, durante unas décadas, muy buenos beneficios a la minoría que controla el mundo financiero y neoliberal. Pero el planeta nos está diciendo que este juego perverso debe terminar.

PODER CORPORATIVO, PODER MILITAR, Y EMISIONES

William Ripple lo dice bien claro⁴: "la crisis climática está estrechamente ligada al consumo excesivo del estilo de vida de los ricos. Los países más adinerados son los principales responsables de las emisiones históricas de GEI y generalmente tienen unas mayores emisiones per cápita".

La Tabla 1 presenta una comparativa de 23 países en base a diferentes indicadores. Los 23 países corresponden a los 20 principales exportadores de armas en el periodo 2014-2018 (según las bases de datos del instituto SIPRI⁷) además de Australia, Arabia Saudita y Japón. Los países aparecen ordenados por volumen de armas exportadas.

El número de habitantes, en millones, corresponde al año 2016. Las exportaciones de armas se indican en TIV (*Trend Indicator Values*, SIPRI). El volumen de gasto militar es en millones de dólares constantes y corresponde al año 2016. El número de agentes de poder se refiere a la lista de los 50 principales centros de poder corporativo mundial, según el estudio de Stefania Vitali y sus colaboradores (Vitali, 2011). Y los datos de emisiones de CO₂, correspondientes al año 2016 para cada país y por cápita, se han obtenido de la base de datos EDGAR de la Comisión Europea.⁸

En cuanto al número de habitantes, los 23 países estudiados suman un total de 2.648,16 millones de personas, lo que significa un 35,48% de la población mundial. En cambio, la suma de las exportaciones de armamento indicadas en la Tabla 1 asciende a un total de 143.095 TIV, equivalentes al 97,8% de las exportaciones a nivel mundial. Y el gasto militar total de estos 23 países, que suma 1.382.337 millones de dólares, significa el 82% del total mundial. Podemos ver, además, que la distribución de los 50 principales agentes de poder que controlan toda la red de empresas en todo el mundo está aún más concentrada, ya que se encuentran en sólo diez de los 23 países de la tabla, con prácticamente la mitad de ellos en Estados Unidos. En su estudio, Stefania Vitali demuestra que estos 50 agentes (muchos de ellos entidades financieras) ya controlan el 39,78% de todas las empresas transnacionales (la lista completa de agentes con un

5. Kerry Sheridan (2018), Phys.org: <https://phys.org/news/2018-08-earth-hothouse-state.html>

6. William J Ripple, Christopher Wolf, Thomas M Newsome, Phoebe Barnard, William R Moomaw. *Bioscience*, Nov. 2019: <https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806>

7. Fuente: SIPRI: <https://www.SIPRI.org/databases/armstransfers>

8. Fuente: Base de Datos EDGAR: <https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2andGHG1970-2016>

Tabla 1. Exportación de armas, poder corporativo y emisiones

País	Habit.	Export. armas	Gasto Militar	Agentes poder	CO2 per cápita	CO2 total
EE.UU.	323,07	52.480	612.889	24	15,51	5011,7
Rusia	144,34	30.064	82.576		11,51	1661,9
Francia	66,86	9.948	58.795	5	4,96	331,5
Alemania	82,35	9.324	42.918	2	9,42	775,7
China	1.378,7	7.633	215.718**	1	7,57	10.432,7
Inglaterra	65,6	6.171	46.903	8	5,61	367,9
España	46,48	4.692	14.497		5,42	251,9
Israel*	13,36*	4.517	15.740		4,88	65,2
Italia	60,63	3.366	25.709	1	5,91	358,1
Holanda	17,03	3.064	9.376	2	9,59	163,4
Corea Sur	51,24	2.577	38.463		11,79	604
Ucrania	45	1.951	3.778**		5,18	233,2
Suiza	8,37	1.443	4.601	2	4,74	39,7
Turquía	79,82	1.405	16.630		4,61	368,1
Suecia	9,92	1.003	5.527		4,5	44,7
Canadá	36,1	816	18.436	1	18,72	675,9
Noruega	5,23	714	6.210		8,3	43,4
Emiratos A.	9,36	510	24.601**		23,38	218,8
Chequia	10,56	486	2.080		10,6	112
Bielorrusia	9,5	469	657		6,6	62,7
Australia	24,2	453	27.741		17,15	415
Arabia S.	32,44	3	63.141**		15,94	517,1
Japón	127	6	45.351	4	9,76	1.239,6
Total mundo	7.464	146.291	1.686.000	50	4,79	35.753

País: los 20 principales exportadores de armas ordenados por volumen exportado, más Australia, Arabia Saudita y Japón

Habit.: millones de habitantes, 2016. Fuente: Banco Mundial

Export. armas: período 2014-2018, en millones de dólares. Fuente: SIPRI <https://www.sipri.org/databases/armstransfers>

Gasto militar: año 2016, en millones de dólares constantes. Fuente: SIPRI <https://www.sipri.org/databases/millex>

Agentes poder: número de agentes en cada país. Fuente: Vitali et. al. (máximos controladores del poder corporativo)

CO2 por cápita: en Tm por persona y año (2016). Fuente: EDGAR, Comisión Europea

CO2 total: en millones en Tm. Fuente: EDGAR <https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2andGHG1970-2016>

* Israel: incluye territorios palestinos ocupados

** Estimaciones de SIPRI; Emiratos: datos de 2014

Elaboración propia

control efectivo sobre el 80% de todas las empresas transnacionales incluye 737 entidades / accionistas).

El interés de este ranking de agentes de poder elaborado por Stefania Vitali y sus coautores es que no sólo revela la lista de las corporaciones que controlan el sistema empresarial global, sino que demuestra que muchos de estos agentes principales pertenecen a un núcleo de control extremadamente denso y vinculado que incluye grandes corporaciones extractivas, bancos y corporaciones multinacionales financieras. No ejercen negocios aisladamente; al contrario, están unidos. El trabajo de Stefania Vitali se basa en el estudio de conexiones entre los más de 30 millones de empresas de la base de datos Orbis 2007 y las 43 mil corporaciones transnacionales que publicó la OCDE.

En su artículo, Vitali y sus colegas precisan que la palabra "control" debe entenderse como control mayoritario de los órganos de decisión de las corporaciones. El grupo que identificaron con 737 agentes puede imponer sus decisiones en más de 126.000 corporaciones transnacionales.⁹

Actualmente, más del 97% de los artículos publicados por científicos que trabajan en el área del cambio climático consideran probado que las tendencias ob-

9. Todos estos 737 agentes son también corporaciones transnacionales; y estos 737 agentes significan un 0,61 del total de las 126 mil corporaciones que controlan. El grupo de 50 agentes de la tabla 1, concentrado en los 10 países que indica la tabla, tiene el poder de controlar de manera efectiva más de 63.000 corporaciones transnacionales (los 50 agentes de la tabla 1 son un 0,08% del total de estas 63 mil corporaciones). Los 50 agentes de la tabla 1 constituyen el subgrupo más poderoso dentro de los 737 que descubrió el estudio.

servadas en relación al calentamiento del planeta y al cambio climático se deben a la actividad humana.¹⁰ Por otra parte, las emisiones que más efecto tienen en el calentamiento planetario son las de dióxido de carbono (CO₂), que suponen un 76% del total de gases de efecto invernadero.¹¹ Por esta razón, las cifras mostradas en la Tabla 1 se concretan a las emisiones de CO₂. El total mundial de emisiones en el año 2016 fue de 35.753 millones de toneladas de CO₂, de los cuales, 23.994,2 millones de toneladas (un 67,1% del total mundial) fueron enviadas a la atmósfera por los 23 países de la tabla. Por otra parte, las emisiones per cápita a nivel mundial en el año 2016 fueron de 4,79 toneladas por persona.¹² Es fácil observar que todos los países de la tabla, con la excepción de Suiza, Suecia y Turquía, generaron emisiones per cápita superiores a la media mundial.

En resumen: los 23 países mostrados en la tabla suman el 35,48% de la población mundial, pero exportan el 97,8% de las armas, concentran 82% del gasto militar global y acogen los centros de poder que controlan de manera efectiva más de 63.000 corporaciones transnacionales. Además, son responsables del 67,1% de las emisiones mundiales de CO₂ que causan el calentamiento planetario. Poder corporativo, emisiones, gasto militar, armas. Todo ello son diferentes herramientas correlacionadas que permiten garantizar los privilegios y el estilo de vida en el Norte global.

Es interesante observar, además, la relación entre el volumen de la exportación de armas y el gasto militar de los diferentes países. Aunque las unidades son diferentes (TIV y dólares), estas relaciones pueden ser significativas a la hora de comparar países. Según los datos de la Tabla 1, por ejemplo, este valor es de 0,3236 por España, de 0,085 (TIV / dólar) para los Estados Unidos, y de 0,0047 para Arabia Saudita. Y, de hecho, España sólo es superada por Bielorrusia (0,7138), Ucrania (0,5164), Rusia (0,364) y Holanda (0,3299); Israel queda un poco por detrás de España. Mientras que Arabia Saudí es el paradigma de país militarizado que básicamente compra e importa armamento, España se encuentra en el grupo de países fuertemente productores y vendedores, con un grado importante de negocio de exportación en relación a su presupuesto de defensa. España no acoge centros de poder corporativo, pero fabrica parte de las armas que garantizan la pervivencia de este poder y que protegen a quienes se quedan con los recursos del planeta.

10. NASA (2020): Scientific Consensus: Earth's Climate is Warming: <https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/>

11. EPA: Greenhouse Gas Emissions: <https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data>

12. La población mundial en el año 2016 era de 7.464 millones de personas. Las emisiones per cápita fueron por tanto de 35753/7464 = 4,79 toneladas por persona

El actual estilo de vida de los privilegiados se basa en una depredación de los recursos (básicamente del Sur Global) que, además de ser un contribuyente neto al calentamiento global del planeta, se hace por la fuerza (Buxton, 2016). Los países con más poder financiero, corporativo y militar, exportan las armas que les aseguran el acceso a los recursos (fósiles y minerales), se hacen con los combustibles, los quemamos, producen energía, y emiten un porcentaje muy importante de los gases de efecto invernadero que están generando cambios a nivel planetario. El calentamiento, con todos los efectos de empobrecimiento que tiene en el Sur, es el subproducto inevitable del actual estilo de la vida del Norte. Todo litro de gasolina, diesel o gasóleo consumido en la industria, el transporte o en calefacción, desaparece durante su combustión mientras termina enviando a la atmósfera entre 2,38 y 2,79 kilogramos de CO₂. Y en el Norte, la economía que ha ido creciendo desde principios del siglo XX se basa en la combustión y en la transformación industrial del petróleo y derivados. Es lo que ha ido conformando, en palabras de Jeremy Rifkin, la civilización del petróleo (Rifkin, 2019).

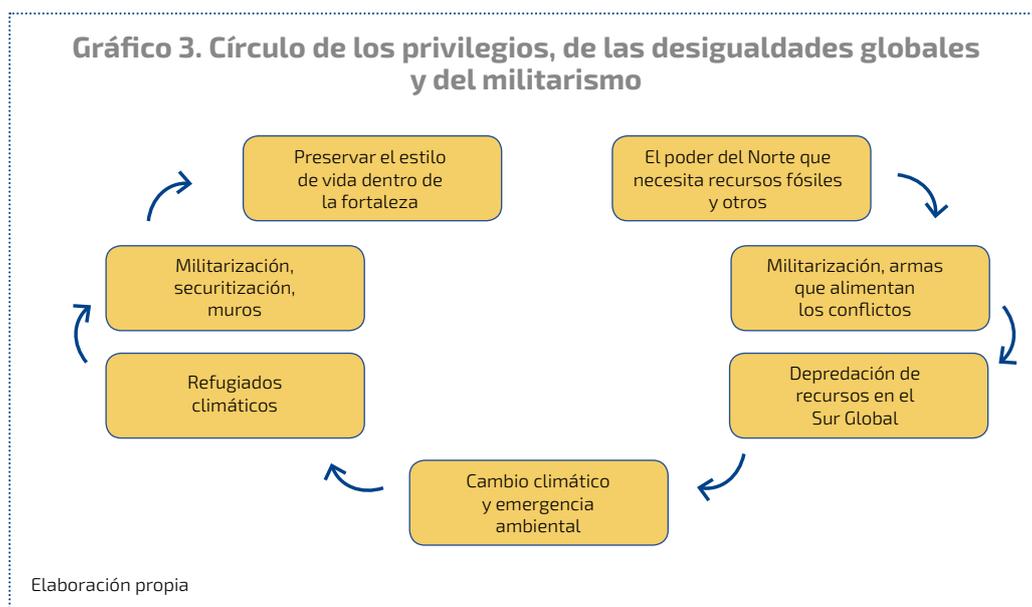
El artículo de William Ripple de 2019¹³ analiza las causas y los efectos de estas emisiones de CO₂ y muestra la evolución de diversas variables durante los últimos 40 años. Entre 1979 y 2019, el número de viajes en avión ha pasado de 500 a 4000 millones, a la vez que lo que consumo de carne ha crecido de 30 a 45 kilos por persona y año (a pesar del gran crecimiento demográfico mundial). Los subsidios a combustibles fósiles han estado casi siempre por encima de los 300 mil millones de dólares anuales. El hielo en el Ártico, Antártida, glaciares y Groenlandia ha ido disminuyendo constante y rápidamente, mientras que el número de fenómenos meteorológicos extremos se ha cuadruplicado, pasando de 200 a 800.

Los subsidios a los combustibles fósiles y el incremento de viajes en avión han beneficiado claramente a los ciudadanos de los países del Norte, mientras que los efectos del calentamiento y los fenómenos meteorológicos extremos afectan fundamentalmente a los habitantes del Sur Global. Lo que ayuda a mantener el estilo de vida de unos, termina haciendo peligrar la vida de otros.

Pero los privilegios basados en la depredación de recursos sólo pueden mantenerse con violencia y con el uso de la fuerza militar. Y todo ello viene de lejos. Joseph E. Stiglitz explica que el poder, y a menudo el poder militar, es el que ha servido históricamente

13. William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M Newsome, Phoebe Barnard, William R Moomaw. Bioscience, Nov. 2019: <https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806>

Gráfico 3. Círculo de los privilegios, de las desigualdades globales y del militarismo



Elaboración propia

para mantener las desigualdades.¹⁴ El militarismo es la herramienta para mantener un determinado modelo económico. Así como los conquistadores tenían el derecho de extraer el máximo que pudieran de los conquistados, los que detentan el poder lo utilizan para fortalecer sus posiciones económicas y políticas, o al menos para mantenerlas.

El poder y el sistema de vida del Norte necesitan recursos fósiles y minerales para, además de mantener sus privilegios, continuar alimentando una economía que se supone que no debe parar de crecer. Pero, dado que los recursos planetarios son limitados, el sistema económico sólo puede crecer si se van incrementando las desigualdades y los privilegios de unos se sustentan un número cada vez más y más grande de personas "prescindibles". La obtención de recursos implica una depredación de muchas zonas del Sur global, con exportaciones de armamento y soluciones militarizadas que alimentan los conflictos armados. Todo ello genera emisiones, incrementa el efecto invernadero, calienta el planeta y crea situaciones, sobre todo en los países del Sur, de emergencia climática y ambiental, que incrementan el número de personas refugiadas climáticas. Personas que detenemos con fronteras militarizadas para preservar el estilo de vida dentro de la fortaleza. Poder corporativo, emisiones, armas. Todo atado, permite garantizar los privilegios y el estilo de vida en el Norte global.

Sin embargo, cada vez aparecen más voces críticas, que llegan tanto de la sociedad civil¹⁵ como de los expertos. Jeremy Rifkin, por ejemplo, considera que la civilización del petróleo, según predicciones bien

documentadas, colapsará durante la próxima década (Rifkin, 2019) en medio de una fuerte crisis mundial que hundirá a todos los poderosos que no hayan sabido ver a tiempo los cambios. En este escenario habría que preguntarse, incluso desde una perspectiva muy ligada a la visión económica occidental, si sigue teniendo sentido defender militarmente y encarnizadamente los sistemas actuales de extracción y transporte del petróleo, cuando parece que tienen los días contados. Por otra parte, y desde una perspectiva de economía planetaria y ecológica, Jason Hickel considera que el actual desbordamiento ecológico se debe casi completamente al sobre-consumo de los países ricos, y que, en el conjunto del mundo, la única opción es el decrecimiento intencionado para conseguir un equilibrio ecológico planetario (Hickel, 2016). Un decrecimiento que, en palabras de Hickel no significa pobreza, porque, dice, es perfectamente posible disminuir el consumo de recursos mientras aumentamos lo que realmente importa: la felicidad humana, el bienestar, la educación, la salud y la longevidad.

Además, Federico Mayor Zaragoza dice que, desde la convicción de que el supremacismo mata, es el momento de pasar de la fuerza a la palabra, cerrando la época de la oligarquía autocrática y volviendo el poder a los pueblos, para romper la espiral de privilegios y poder que está destruyendo a la gente y al planeta. Cree que disponemos de dos grandes recursos que nos permitirán reaccionar y asumir la gran responsabilidad inter-generacional que tenemos: el aprovechamiento de las nuevas tecnologías digitales, y el liderazgo de las mujeres, que serán la piedra angular de la nueva civilización.¹⁶

14. Joseph E. Stiglitz: <https://economics.com/nobel-prize-economist-says-american-inequality-didnt-just-happen-it-was-created/>

15. Rebelión o Extinción Barcelona: <https://xrbarcelona.org/ca/homepage/>

16. Federico Mayor Zaragoza (2018), Curso de Verano de la Universidad Internacional de la Paz, edición XXXIII, San Cugat, 5-11 de julio de 2018: <http://www.universitatdelapau.org>

Los países analizados y mostrados en la tabla 1 suman tienen poco más de un tercio de la población mundial (un 35,48%), pero fabrican y exportan prácticamente todas las armas que se hacen en el mundo, armas que terminan activando conflictos y matando personas sobre todo en los países más afectados por el cambio climático. Los países de la Tabla 1 también concentran los centros de poder que controlan de manera efectiva más de 63.000 corporaciones transnacionales, acumulan 82% del gasto militar global, y generan el 67,1% de las emisiones mundiales de CO2 que causan el calentamiento planetario.

Las élites políticas y económicas, que operan en total connivencia, viven de espaldas a las necesidades de la gente y del planeta. Y ahora, en un momento de emergencia climática, están dispuestas a llevarnos al colapso para mantener su posición de poder, provocando una crisis ambiental global y amenazando la vida de millones de personas prescindibles. El calentamiento planetario es la fuente de sus beneficios, y el armamento es el muro de protección de su fortaleza. Ahora más que nunca, es necesario un retorno a la ética centrada en todas las personas y en el planeta, superando este modelo machista, capitalista y militarista que ha conseguido destruir el entorno y la vida de la gente, y empezando a pensar en términos de equilibrio ecológico y de derechos de todas las personas, en términos de cuidado, y en términos de reducción del gasto militar mundial.¹⁷

1.2 CRISIS AMBIENTAL Y CONFLICTOS ARMADOS

Gemma Amorós

Dicen que el ser humano no tiene la capacidad de ser consciente del momento histórico que está viviendo. Si esto es cierto o no, lo dejo al criterio de cada cual. No obstante, si bien quizás no podemos llegar a comprender la magnitud de lo que supone la crisis de civilización de la que somos partícipes, como mínimo, sí que tenemos el deber ético de cuestionar la realidad que nos rodea. Para empezar, daremos por válidas dos premisas: que la humanidad está inmersa en una crisis ambiental sin precedentes y que esto afecta, de alguna manera, la relación que establece el ser humano con su entorno, es decir, con la naturaleza y con los otros seres humanos.

Dicho esto, y sin más pretensión que hacer una primera aproximación a un tema que es extremadamente complejo y relativamente incipiente, este apartado gira alrededor de varias preguntas: ¿qué relación hay entre los conflictos armados y la crisis ambiental? ¿Es posible establecer una relación causal en cualquiera

17. Campaña GCOMS (IPB) para la reducción del gasto militar mundial: <http://demilitarize.org/>

de los dos sentidos? ¿Qué papel juega el modelo económico capitalista predominante? ¿Se puede afirmar que existen guerras climáticas? ¿Qué hay detrás de este concepto?

Entenderemos por conflicto armado la definición de la Escuela Cultura de Pau (2020), que en su informe Alerta 2020, expone:

"En este informe, se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles, en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio."

En cuanto a la metodología, se ha hecho una investigación bibliográfica de artículos académicos para contrastar si existe correlación entre conflicto armado y crisis ambiental, a través de las investigaciones hechas en la materia. Así mismo, se ha consultado los datos más recientes que publica la Comisión Europea en materia de riesgos¹⁸ para la seguridad humana y análisis de la severidad de las crisis existentes,¹⁹ para hacer un análisis de los datos disponibles y aportar conocimiento a las preguntas de investigación planteadas. Así mismo, otra aportación clave ha sido la del informe *Alerta! 2020* publicado por la *Escola de Cultura de Pau*, (Escola de Cultura de Pau, 2020). Estas fuentes, entre otros, han sido consideradas por su rigurosidad y porque ofrecen diferentes miradas, para recoger lo que nos aporta cada una.

SOBRE EL MITO DE LA GUERRA CLIMÁTICA

La relación que ha establecido la humanidad con la naturaleza es, predominantemente, conflictiva, y es herencia del pensamiento racionalista que, entre otras cosas, establece una oposición entre el ser humano y la naturaleza. Esta relación ha comportado

18. European Commission Joint Research Center (2020). INFORM Epidemic Risk Index 2020

19. European Commission Joint Research Center (2020). Global Crisis Severity Index 2020

una jerarquía que justifica la opresión constante y el utilitarismo con el que tratamos el medio natural, sin tener en cuenta, muchas veces, que estas acciones tienen consecuencias. Y una es, efectivamente, la aceleración del cambio climático.

El Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático –IPCC–, expone en su informe (2012)²⁰ que el clima extremo y los fenómenos climáticos, interactuando con sistemas humanos y naturales expuestos y vulnerables, pueden provocar desastres; así mismo, relaciona las consecuencias del cambio climático con la seguridad humana: “La vinculación entre el cambio climático y los conflictos violentos es controvertida. El debate conceptual vincula el cambio climático con la escasez de recursos –o de los recursos imprescindibles para soportar las formas de subsistencia–, que a la vez conducen a la inseguridad humana.” (IPCC, 2012:297). Añadido a esto, Barnett, J. y Adger, W. (2007) apuntan que “en ciertas circunstancias, los impactos directos e indirectos del cambio climático en la seguridad humana, pueden incrementar el riesgo de conflictos violentos”. Así mismo, exponen que hay cuatro factores clave en este sentido. En primer lugar, los impactos del cambio climático afectarán más a la población de áreas marginadas socialmente y ambientalmente y que depende de los recursos naturales para su subsistencia. En segundo lugar, se prevé un incremento de la pobreza al menguar el acceso a los recursos naturales. Otro factor clave es la fragilidad de los Estados, que pueden ver reducida su capacidad para crear oportunidades y ofrecer seguridad a la ciudadanía. Por último, las migraciones esperables por causas climáticas pueden incrementar el riesgo de conflictos en las comunidades de acogida.

Por lo tanto, el cambio climático es un factor que afecta el ser humano y que puede influenciar en el modo de subsistencia, en mayor o menor grado dependiendo de las condiciones previas de vulnerabilidad y conflicto. Pero no es determinante. No es causa directa de conflictos armados. Sin embargo, cada vez se sitúa más la idea que existen, han existido y se incrementarán las guerras climáticas. ¿Qué comporta esta afirmación? Entre otras cosas, justificar la existencia de ciertos conflictos y crisis, alegando que su causa no depende del ser humano directamente sino de algo que es incontrolable como el cambio climático. Y hay que combatir las consecuencias.

Por lo tanto, el concepto de cambio climático no nos permite profundizar epistémicamente en la relación que hay entre los conflictos armados y la naturaleza, ni explicar el porqué de los conflictos armados. Por eso proponemos otro concepto, más amplio, el de

crisis ambiental, que nos permite tener en cuenta los factores humanos interrelacionados con los naturales que pueden llevar a un colapso ambiental, y hace hincapié en la influencia ahora sí, determinante, que tiene el modelo de sociedad occidental en la causa, la intensificación y la aceleración de las crisis y los conflictos armados en el mundo.

Esto no es nuevo, el sistema militarista capitalista necesita tener siempre un enemigo, ya sea el terrorismo o el cambio climático, para mantener el miedo y justificar las injerencias colonialistas, los presupuestos de defensa, las inversiones en la industria del armamento, la militarización de la seguridad, el control de la vida civil y la creciente securitización de las fronteras nacionales. Y este modelo, sí que influye directamente en la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, hasta el punto de producir una crisis ambiental sin precedentes con el único objetivo de mantener los privilegios de la clase dominante y el modelo de vida occidental.

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE RIESGOS?

El INFORM Global Risk Index –GRI– creado por la Comisión Europea,²¹ es de los más completos para analizar el nivel de riesgo de cada país, teniendo en cuenta un gran número de variables que se clasifican en tres subgrupos: amenazas y exposición, vulnerabilidad y carencia de capacidad de resiliencia. Dentro del apartado de amenazas y exposición, incluye los datos relativos tanto en fenómenos naturales (terremotos, tsunamis, epidemias, ciclones tropicales, sequías, inundaciones), como humanos. Hay que tener en cuenta el sesgo de este índice, y es que no tiene en cuenta desastres repentinos como pueden ser los incendios forestales, los deslizamientos de tierra y la actividad volcánica, para citar algunos ejemplos. Así mismo, no refleja otros aspectos ambientales producidos directamente por el ser humano, como la contaminación, la desaparición de especies, la desestabilización de ecosistemas, el aumento de la temperatura a nivel mundial u otras consecuencias producidas por el cambio climático que son difíciles de medir actualmente, todavía más de predecir. En cuanto a los riesgos producidos por el ser humano, tiene en cuenta los conflictos existentes –ponderando su nivel de violencia– y la posibilidad de nuevos conflictos.

Por otro lado, resulta muy interesante la compilación de datos que utiliza para medir tanto el índice de vulnerabilidad –donde incluye indicadores como

20. IPCC (2012). Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation

21. INFORM es una colaboración entre el Grupo de referencia del Comité Permanente interagencial sobre riesgo, alerta anticipada y preparación y la Comisión Europea. El Centro de Investigación Conjunto de la Comisión Europea es el responsable técnico de INFORM.

la dependencia de ayudas externas, la desigualdad de género y la inseguridad alimentaria– así como el índice de capacidad de resiliencia –que comprende aspectos como la efectividad de gobierno, la percepción de la corrupción y el acceso al sistema de salud, por citar algunos–.

Sin embargo, otro de los sesgos relevantes, es que no tiene en cuenta la militarización de los Estados. En este sentido, el índice de paz global –GPI²²–, que es un índice desarrollado por el *Institute for Economics and Peace*, hace el cruce de tres factores: seguridad –tanto a nivel humano como material–, conflicto en marcha y militarización, utilizando datos del SIPRI.²³ Los países con el índice de paz más bajo según el GPI 2020, en este orden, son: Afganistán, Siria, Irak, Sudán del Sur, Yemen, Somalia, Libia, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Rusia, Sudán, Pakistán, Corea del norte, Turquía, Venezuela y Ucrania. Este índice refleja que, por novena vez en los últimos 12 años, el mundo es menos pacífico.

La tabla 2 muestra el ranking general de los países considerados con más riesgo a nivel mundial según el GRI 2020 y su puntuación sobre 10. También, hemos incluido una columna con el índice de militarización según el GPI 2020, y dos columnas con datos del in-

forme *Alerta! 2020* correspondientes al nivel de intensidad del conflicto armado y su tendencia.

Lo que podemos destacar de estos países a simple vista, es que absolutamente todos ellos están inmersos actualmente en conflictos armados, de mayor o menor intensidad. Según la *Escuela de Cultura de Pau* (2020), los conflictos de más intensidad en 2019 han estado en Afganistán, en el Camerún, el conflicto del Lago Chad (Boko Haram), que involucra Camerún, Chad y Níger, junto con Nigeria, y el conflicto regional en el Sahel Occidental, que involucra Burkina Faso y Níger, junto con Mali. Estos cuatro conflictos han tenido una valoración de intensidad de 3, es decir la máxima, hecho que supone un incremento de la conflictividad respecto al año 2018. Los conflictos que se han mantenido en nivel 3 respecto el año anterior, son los de Somalia y Yemen. Hay que decir que el Yemen mantiene otro conflicto interno internacionalizado con Al-Qaeda, que se mantiene en un nivel 1 de intensidad.

Se valora con un nivel 2 de intensidad el conflicto de República Centroafricana, que tiende a mejorar, así como los dos conflictos vigentes en República Democrática del Congo; el que se inició el 2014 y que involucra las Fuerzas Aliadas Democráticas –ADF–, de origen ugandés, está incrementando su intensidad. El conflicto iniciado en 1998 al este del país, se mantiene respecto el 2018. En este conflicto está involucrado Burundi, que también ve cómo se intensifica el

22. Institute for Economics & Peace (2020). Global Peace Index 2020: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf (Última consulta, 30-10-2020)

23. Stockholm International Peace Research Institute: <https://SIPRI.org/>

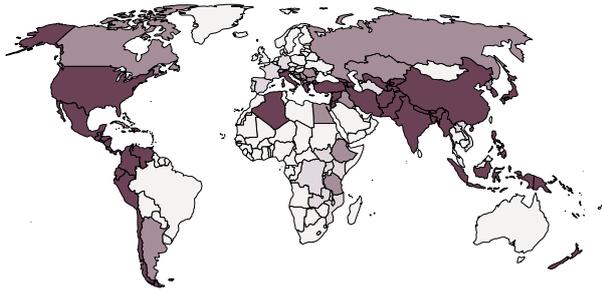
Tabla 2. Países considerados de muy alto riesgo según el ranking general de INFORM GRI 2020

País	Puntuación (sobre 10)	Ranking de militarización	Nivel de intensidad del conflicto armado	Tendencia
Somalia	7,8	22	3	=
República Centroafricana	7,8	24	2	↓
Sudán del Sur	7,5	12	3	↓
Afganistán	7,4	11	3	↑
República Democrática del Congo	7,2	74	2 (este)	=
			2 (ADF)	↑
Chad	7,2	29	3	↑
Yemen	7,0	23	3	=
Níger	6,9	71	3 (Lago Chad)	↑
			3 (Sahel Occidental)	↑
Burundi	6,5	141	1	↑
Camerún	6,5	95	3	↑
Burkina Faso	6,5	47	3	↑

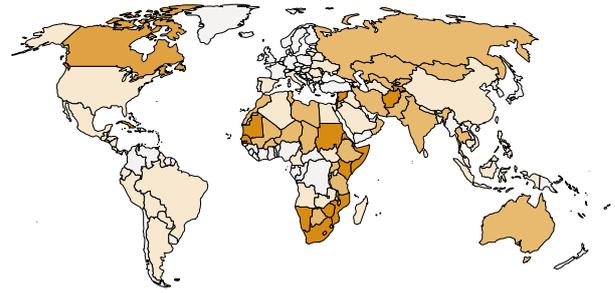
Elaboración propia a partir de los últimos datos del *INFORM Epidemic Risk Index 2020*, del *Global Peace Index 2020* y de *Alerta! 2020*

Mapa 3. Riesgo por fenómenos naturales (específico)

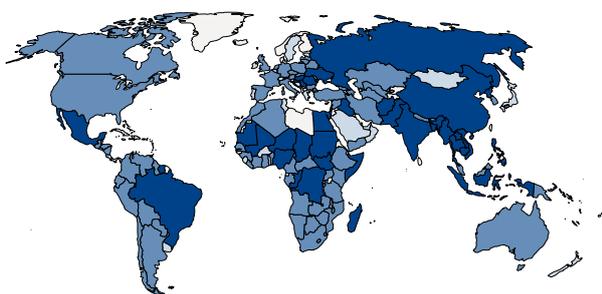
Riesgo de terremotos



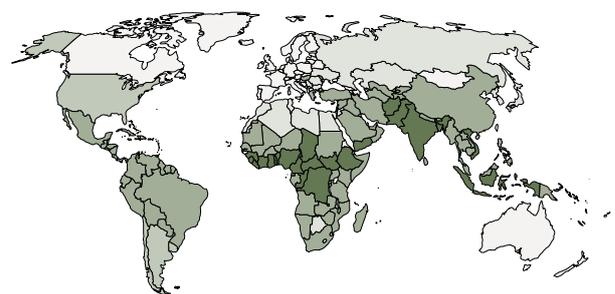
Riesgo de sequía



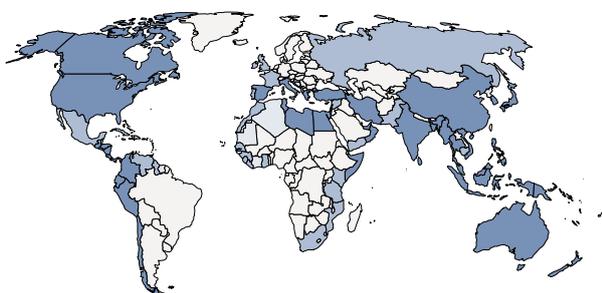
Riesgo de inundaciones



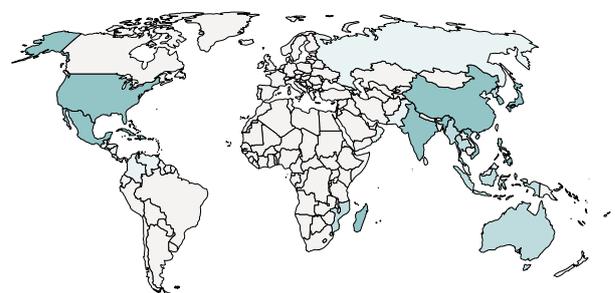
Riesgo de epidemia



Riesgo de tsunami



Riesgo de ciclón tropical



Elaboración propia a partir de los últimos datos del *INFORM Epidemic Risk Index 2020*

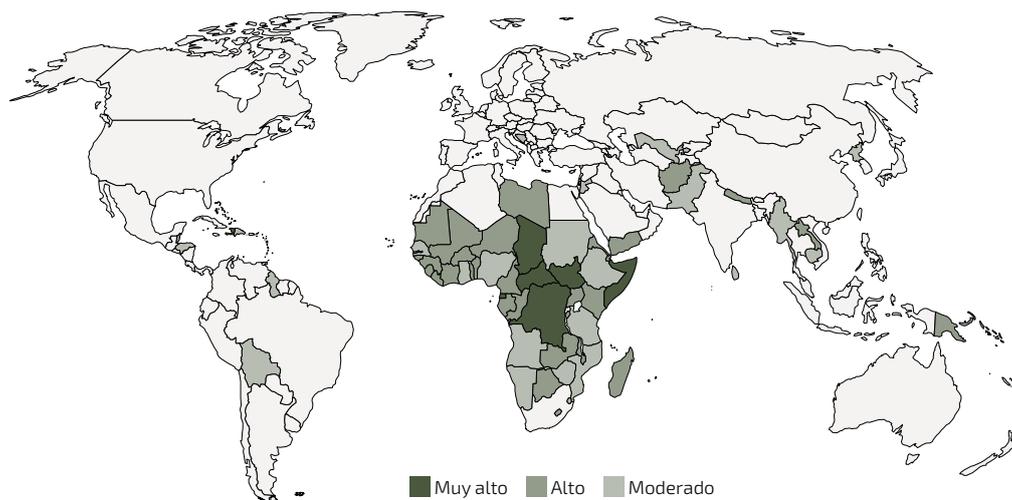
■ Muy alto ■ Alto ■ Moderado

Se puede observar que, en mayor o menor grado, casi todos los países del mundo presentan riesgo de sufrir algunos de los fenómenos naturales que contempla este informe y que, insistimos, representan una parcela muy pequeña y no determinante por sí sola entre los factores de riesgo para la seguridad humana dentro de la crisis ambiental. Es por eso que hay que analizar estos niveles de riesgo en relación a la situación de cada territorio, tal como propone el INFORM, para determinar su impacto relativo a la hora de afectar las condiciones de seguridad y, por lo tanto, para saber

si pueden resultar en una crisis temporal resoluble o intensificar un conflicto ya existente.

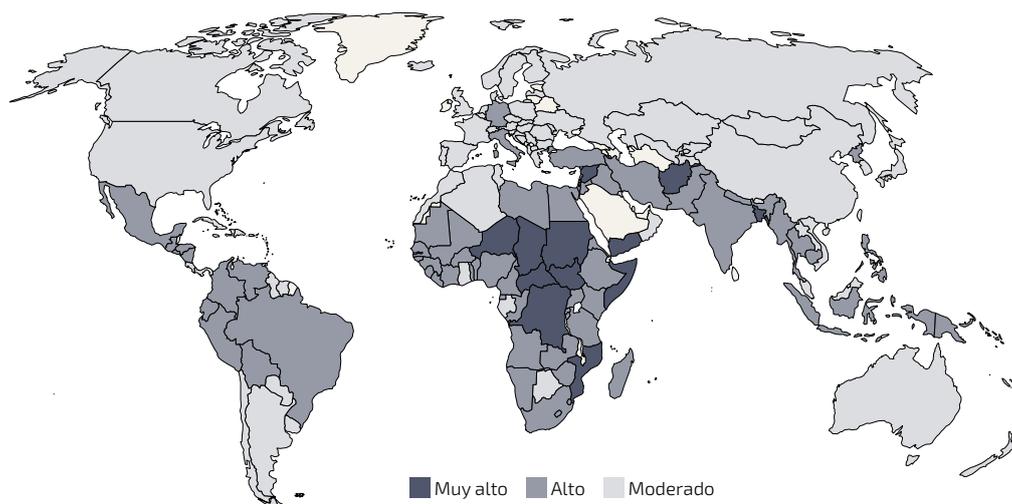
Los siguientes mapas muestran, bajo la misma escala de muy alto riesgo, alto riesgo y riesgo moderado, el nivel de carencia de capacidad de resiliencia (Mapa 4); así como el índice de vulnerabilidad frente a los riesgos naturales y humanos. Con estos datos, nos podemos hacer una idea más cuidadosa de por qué la crisis ambiental afecta de manera diferencial a los territorios.

Mapa 4. Falta de capacidad de resiliencia frente a los riesgos naturales y humanos



Elaboración propia a partir de los últimos datos del *INFORM Epidemic Risk Index 2020*

Mapa 5. Vulnerabilidad frente los riesgos naturales y humanos



Elaboración propia a partir de los últimos datos del *INFORM Epidemic Risk Index 2020*

Qué tienen en común argumentos aparentemente tan dispares como que no se puede hacer nada para detener el cambio climático, que el ser humano no tiene nada que ver, que existe un determinismo ambiental en relación a los conflictos armados, que el cambio climático provocará nuevos conflictos e, incluso, que el cambio climático no tiene nada que ver con los conflictos armados... pues que todos eluden la implicación del sistema capitalista y militarista en el que vivimos en la actual crisis ambiental.

El cambio climático sólo es un factor más, una amenaza más para la seguridad humana, un desencadenante de nuevos riesgos incluso, pero el elemento concatenando en los conflictos complejos que actualmente

hay en el mundo, y seguramente seguirá así con los que vendrán, es la relación de opresión hacia la naturaleza que establecemos para mantener el modo de vida occidental y que ha provocado una crisis ambiental difícil de revocar si no se produce un cambio de paradigma económico y sistémico a gran escala.

Y no se puede hablar de crisis ambiental sin tener en cuenta la contribución del militarismo, la securitización de las fronteras y el gasto militar. Así mismo, no se pueden usar los datos de evolución de la crisis ambiental para justificar la existencia de conflictos o para predecir directamente nuevas crisis, pero sí que nos puede permitir estar alerta del nivel de riesgo que tienen algunos territorios donde se interrelacionan di-

ferentes factores conflictivos. Y estar alerta significa hacer una lectura crítica de la realidad y pensar en alternativas posibles de transformación y mitigación de riesgos, es decir, reducir vulnerabilidades e incrementar la capacidad de resiliencia de los territorios. Basamos nuestros privilegios en un modelo militarista y genocida, que, así como ha provocado la crisis ambiental también saca rentabilidad de los conflictos armados. Así pues, la lucha para reducir los impactos de la crisis ambiental tiene que comportar, inevitablemente, la reducción del gasto militar mundial y pasar de la seguridad militarizada a la seguridad humana.

1.3 EL DISCURSO POLÍTICO: EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO AMENAZA A LA SEGURIDAD

Albert Orta

A medida que el cambio climático deja de ser un posible escenario de futuro y emerge como una realidad presente con efectos bien tangibles, una de las ideas que cada vez es más habitual encontrar es que la transformación global del clima representa una amenaza a la "seguridad". Sin duda, este planteamiento ha contribuido a enfatizar su urgencia y gravedad, y por tanto la necesidad de actuar inmediatamente. Además, ha ayudado a que ciertos actores que podían mostrarse reticentes a reconocer la importancia del fenómeno hayan cambiado de posición. No obstante, enfocar el cambio climático como una cuestión de seguridad también conlleva un riesgo: la militarización.

La militarización puede definirse como el proceso por el cual las instituciones militares amplían su papel en la vida social, económica o política, y se privilegian valores militaristas como la centralización de la autoridad, la jerarquía, la disciplina, la obediencia, el conformismo y la agresividad (Calvo, 2015). Históricamente, desde el momento en que el concepto de seguridad se asocia a la defensa de la independencia e integridad territorial de un Estado, la militarización se ha considerado una de las principales estrategias para garantizar la seguridad. Ahora bien, existen razones para dudar de que esta sea la respuesta más adecuada a los retos del cambio climático. Como demuestran diversos apartados de este informe, la industria de defensa no es sólo responsable de un volumen considerable de gases contaminantes, sino que en muchos casos la militarización ha sido y es un instrumento clave para mantener un status quo que nos ha llevado a la transformación global del clima y a la degradación de las condiciones de vida materiales de millones de personas.

Por tanto, ¿cómo podemos evitar que el cambio climático sirva de pretexto para militarizar todavía más las sociedades? El objetivo de este apartado es elaborar una respuesta a esta pregunta a partir del pa-

pel central que juegan las ideas –supuestos, valores, mapas mentales– en los procesos de militarización. Este enfoque no es nuevo (Calvo, 2016), y parte de la hipótesis según la cual la militarización empieza a partir del momento en que aceptamos el uso de la violencia organizada como una respuesta legítima y apropiada a los diferentes retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Así, si el uso de instrumentos y estrategias militares no constituye una respuesta necesaria a los retos del cambio climático, ¿cuáles son los elementos ideológicos que los presentan como si lo fueran?

Un concepto clave es el de seguridad. Más allá de definiciones genéricas, existen muchas formas distintas de entender qué significa la seguridad a la hora de llevarla a la práctica. Fundamentalmente, toda estrategia de seguridad responde a tres preguntas: ¿qué o quién hay que asegurar? ¿Frente a qué? ¿A través de qué medios? La respuesta a estas preguntas no está determinada por las transformaciones materiales asociadas al cambio climático, sino que tiene que ver con la manera como interpretamos estos cambios: la seguridad de *quien* decidimos priorizar, *quién* o *qué* representa un peligro, y qué medios estamos dispuestos a utilizar. Como hemos mencionado anteriormente, tradicionalmente la definición de seguridad ha estado muy vinculada a la protección de los Estados y el orden geopolítico que representan. Cada Estado se ve amenazado por un escenario internacional hostil frente al cual tiene que protegerse militarmente. Sin embargo, esta no es la única manera de entender la seguridad. Desde hace años el concepto de seguridad humana se ha propuesto como alternativa a la noción tradicional centrada en la seguridad de los Estados, con el objetivo de poner las personas en el centro e ir más allá de las amenazas y estrategias de tipo militar. De esta forma se incluyen todos aquellos factores que ponen en peligro el bienestar y la calidad de vida de las personas, independientemente de su condición nacional, étnica, de género o de cualquier otro tipo, y se reconoce, a menudo, que el militarismo y la militarización son una amenaza a la seguridad de las personas.

En consecuencia, cómo definimos la "seguridad" es fundamental para entender los procesos de militarización. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de "seguridad" y cambio climático? ¿La seguridad de quién y frente a qué está en juego? Ambas cuestiones demuestran el papel de las ideas y de los discursos a la hora de justificar que determinados retos se conviertan en problemas que requieran el uso de las armas. No obstante, en este debate no todo el mundo tiene la misma influencia, la misma autoridad para hablar de seguridad. Dado que el concepto de seguridad ha estado históricamente asociado a la seguridad nacional –y por tanto a los estados– son los gobier-

nos centrales e instituciones afines los que a menudo acaban marcando la agenda y definiendo, en definitiva, qué entendemos por seguridad y como debemos garantizarla.

A continuación, analizamos las estrategias de seguridad y defensa de dos gobiernos –España y los Estados Unidos– y de dos instituciones intergubernamentales –la Unión Europea y la OTAN– con el objetivo de ver como definen la relación entre cambio climático y seguridad, e identificar, así, a partir de que conceptos e ideas concretas abren la puerta a la militarización de las respuestas al cambio climático.

LA MILITARIZACIÓN DEL CLIMA EN LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

España

Durante los últimos años el Gobierno español ha elaborado tres estrategias de seguridad: la *Estrategia Española de Seguridad. Una responsabilidad de todos* (2011), la *Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido* (2013) y la *Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido de todos y para todos* (2017). Estos documentos se publican desde la Presidencia del Gobierno central y tienen como objetivo marcar las líneas generales de las políticas de seguridad. Respecto al cambio climático, en las tres aparece como un elemento relevante. En este apartado hemos seleccionado las estrategias del 2011 y del 2017 para ver las continuidades y discontinuidades en un período de tiempo más largo, ya que la estrategia publicada en 2013 no presenta diferencias sustanciales respecto a las otras dos.

La estrategia del 2011 consta de tres partes principales. La primera presenta los diferentes riesgos, amenazas y oportunidades por áreas geográficas (Europa, Estados Unidos, Rusia, América Latina, África, etc.). La segunda desarrolla los “potenciadores de riesgo”, es decir, factores que no representan en sí mismos una amenaza directa, pero pueden aumentar la gravedad de los riesgos. Finalmente, la tercera sección detalla las diferentes amenazas directas y riesgos a los que tiene que enfrentarse el Estado español. El cambio climático es mencionado por primera vez en la introducción en tanto que potenciador de riesgos, junto con otros fenómenos:

Las disfunciones de la globalización, los desequilibrios demográficos, la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, los peligros tecnológicos, y las ideologías radicales y no democráticas, son todos factores transnacionales que pueden potenciar los efectos de las amenazas y riesgos e incluso cambian su naturaleza (p. 10)

Así, el cambio climático no se considera una amenaza directa, sino como un factor que puede potenciar riesgos y amenazas. ¿Y cuáles son las amenazas y riesgos que pueden ser agravados por el cambio climático? El Capítulo 3, dedicado a los potenciadores de riesgo, desarrolla esta cuestión:

La variación del clima global durante los últimos años es un proceso cierto, cuyo impacto ya se siente, que exige respuestas en el momento presente y que plantea, a medio y largo plazo, retos de gran trascendencia para la sociedad mundial. Desatará conflictos por la escasez de recursos, disparará el número de refugiados climáticos y agravará la pobreza en muchas sociedades, incrementando la fragilidad de algunos Estados y con ello las amenazas a la seguridad global (p. 37)

Este fragmento es importante. Según el texto, el cambio climático tendrá tres efectos seguros: conflictos por la escasez de recursos, aumento significativo del número de refugiados climáticos (“disparará”), y agravamiento de la pobreza. Estos tres factores, presentados como certezas, incrementarán a la vez la fragilidad de algunos estados y por tanto las amenazas a la seguridad global. Ahora bien, hay dos cuestiones que no quedan resueltas: ¿Por qué “algunos” países serán más frágiles que otros? ¿Son los conflictos por la escasez de recursos, los refugiados y la pobreza generadas por el cambio climático los únicos factores –o al menos los más importantes– que explican la fragilidad de un país? La segunda cuestión queda todavía menos clara: ¿qué es la seguridad global? ¿Tenemos que entender que se refiere a la seguridad de todos los seres humanos, en oposición a la seguridad exclusivamente *nacional*? ¿O a la seguridad del planeta en tanto que ecosistema global? ¿O, al contrario, se refiere a la estabilidad de un orden político y económico causante del cambio climático?

Si avanzamos a la tercera parte del documento estratégico, en la que se especifican los riesgos y amenazas directas, podemos hacernos una idea más precisa del tipo de amenazas que representan los Estados fallidos, los conflictos armados y las personas refugiadas climáticas según la estrategia de seguridad del Estado español. En primer lugar, los conflictos armados –asociados a los Estados fallidos y al terrorismo– son relevantes en la medida en que están relacionados con amenazas “contra nuestro territorio, ciudadanos, intereses o valores”, ya que sus consecuencias “en muchos casos desbordan las fronteras” (p. 43). En otras palabras, los conflictos armados representan un peligro solo en el caso en que la inestabilidad de *allí* –de los estados fallidos– desborde las fronteras y llegue *aquí* –al Estado español o a sus intereses y/o valores. Esta visión corresponde al paradigma de la seguridad nacional. Respecto a

las personas refugiadas climáticas, en el capítulo de amenazas y riesgos ya no aparecen como personas, sino como "flujos migratorios no controlados" (p. 70):

Es previsible que se mantengan o incluso incrementen los flujos migratorios irregulares si persisten en algunos de ellos la pobreza, la desigualdad, los conflictos étnicos, la sobreexplotación de los recursos naturales, los riesgos medioambientales, la debilidad institucional, los regímenes totalitarios y/o los conflictos armados [...] El impacto de los movimientos migratorios excesivos y no controlados sobre España, como sociedad de destino o como frontera exterior de entrada a la UE, tiene implicaciones para la seguridad (p. 70)

Las implicaciones a nivel de seguridad que menciona el documento estratégico son la conflictividad social, los guetos urbanos, la explotación económica de los migrantes por parte de organizaciones criminales, la desestabilización de la economía, la radicalización o el hecho que el gobierno no conozca la identidad o nacionalidad de las personas que llegan. Es significativo que, exceptuando los abusos económicos que puedan sufrir, los más vulnerables al cambio climático –los migrantes– aparezcan sobre todo como una amenaza al Estado y a la sociedad que los recibe. Esta visión del fenómeno migratorio como riesgo a la seguridad se confirma cuando se enumeran las medidas a tomar: fomentar los acuerdos de cooperación con los países de origen con el fin de evitar que salgan del país o facilitar la repatriación en caso de que consigan cruzar la frontera, crear Centros de Internamiento de Extranjeros, e incrementar los medios marítimos y aéreos de la policía y el ejército (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) (p. 72). Finalmente, hay que destacar el papel que la estrategia otorga al ejército –a través de la Unidad Militar de Emergencias– en la gestión de las "emergencias y catástrofes", uno de los riesgos a la seguridad que puede verse agravado por el cambio climático.

En cuanto a la estrategia publicada en 2017, hay dos diferencias significativas respecto a la edición del 2011. En primer lugar, el título no deja lugar a la ambigüedad sobre la noción de seguridad: *Estrategia de Seguridad Nacional*. Más adelante el documento define la seguridad nacional como aquella política pública "cuyo objeto es proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, garantizar la defensa de España y los principios y valores recogidos en su Constitución, así como contribuir junto a socios y aliados a la seguridad internacional" (p. 21). La segunda novedad es que da mucha más importancia al cambio climático en comparación con la estrategia del 2011, tanto por el espacio dedicado como por el nivel de detalle de la exposición. Así, ya no aparece como un potenciador de riesgos, sino que sus efectos tienen

una sección dedicada en el capítulo de amenazas y retos. Según el texto, el aumento de la frecuencia y severidad de sequías, inundaciones e incendios debido al cambio climático tendrá consecuencias sobre diversos retos a la seguridad:

A nivel global, existe una creciente relación de los efectos del cambio climático con la competencia por el acceso a los recursos, sobre todo el agua, los movimientos migratorios forzados y la aparición de vectores que favorecen la propagación de enfermedades. Estos factores tienen un impacto especialmente intenso en regiones como África y en el área Asia-Pacífico, y a veces funcionan como causas estructurales de conflictos armados (p. 75)

La competencia por los recursos, las migraciones forzadas, la propagación de enfermedades y, como consecuencia de estos fenómenos, los conflictos armados, aparecen como los principales retos a la seguridad generados por el cambio climático. Es cierto que estos fenómenos van más allá de la agenda de seguridad nacional clásica, centrada sobre todo en amenazas de tipo militar, pero esto no impide que puedan ser interpretados desde un prisma estado-céntrico que abra la puerta a la militarización. Así, en la línea de la estrategia del 2011, los "flujos migratorios irregulares" –a pesar de ser calificados como "drama humano" (p. 72)– son representados como un reto a la seguridad del Estado español, y no como personas en situación de fuerte vulnerabilidad que necesitan apoyo y protección. De aquí a la militarización de las respuestas al fenómeno migratorio solo hay un paso (Ruiz, 2019). De la misma forma, los conflictos armados aparecen como una amenaza en la medida en que pueden afectar al Estado, pero no para las personas que los sufren directamente:

la persistencia de graves focos de inestabilidad y de Estados fallidos o de débil gobernanza, en particular en zonas próximas a territorio español, proporcionan espacios desde los que diversos grupos armados pueden actuar. Ello supone una mayor exposición de España a otras amenazas como los tráfico ilícitos, la piratería o el terrorismo (p. 58)

No obstante, la estrategia del 2017 introduce algunos elementos que apuntan hacia la noción de seguridad humana, donde el bienestar y las libertades de las personas se convierten en una prioridad. Por ejemplo, se reconoce el acceso a la alimentación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los hábitats naturales como retos a la seguridad en sí mismos en la medida en que pueden afectar la calidad de vida de los ciudadanos (p. 75-76). De la misma manera, en cuanto a las acciones para garantizar la seguridad, se identifican diversos instrumentos que se alejan, a priori, de la defensa entendida en términos militares:

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la lucha contra la pérdida de biodiversidad, la revisión de los sistemas de abastecimiento y uso de la energía, la gestión conjunta de bienes compartidos como el agua o los recursos pesqueros, así como un pacto global de países industrializados y países emergentes, son requerimientos imprescindibles para afrontar las consecuencias del cambio climático (p. 76)

Este amplio abanico de medidas se desarrolla con más detalle en el apartado sobre las líneas de actuación, donde se menciona, entre otros, la cooperación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la preservación de la biodiversidad, la planificación para evitar inundaciones y sequías, o el uso de tecnologías menos contaminantes como estrategias a seguir para reducir los efectos negativos del cambio climático. La introducción de estos elementos genera una cierta ambigüedad sobre quién es el referente de la seguridad, y amplía las estrategias para garantizarlas más allá de los instrumentos estrictamente militares. Así, si bien el enfoque de las migraciones y los conflictos armados –posibles efectos del cambio climático– no cierra la puerta a la militarización, y la visión general se enmarca todavía en el paradigma estatal-nacional, la estrategia de seguridad del 2017 reconoce el impacto del cambio climático sobre la seguridad humana y por tanto la necesidad de adoptar medidas no militares.

Estados Unidos

En los Estados Unidos los documentos más recientes sobre políticas de seguridad publicados por el gobierno federal son la última versión de la *National Security Strategy* (2017) y la *National Defense Strategy* (2018). En coherencia con la política de la administración Trump de minimizar –cuando no negar– el cambio climático, en ninguna de las dos publicaciones se menciona como reto o amenaza a la seguridad. Esto no significa, sin embargo, que en los Estados Unidos no exista un debate sobre los efectos a nivel de seguridad del cambio climático, ni que desde el gobierno no se preparen estrategias. En realidad, los Estados Unidos siguen ejerciendo una influencia muy importante sobre otros estados en la elaboración de doctrinas de seguridad y desde hace años se han publicado muchos estudios analizando la relación entre cambio climático y seguridad. Para encontrar alguna referencia a esta cuestión en las estrategias de seguridad y defensa del gobierno federal, tenemos que remontarnos a las últimas versiones publicadas antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca: la *Quadriennial Defense Review* (2014) y la *National Security Strategy* (2015).

La *Quadriennial Defense Review* es un documento publicado por el Departamento de Defensa cada cuatro

años con el propósito de identificar los objetivos estratégicos y las amenazas que debe afrontar el ejército estadounidense. En este sentido es muy revelador para entender cuál es la concepción que tiene el gobierno federal y, más concretamente, el Departamento de Defensa, sobre el papel de las fuerzas armadas. El documento identifica tres pilares de la estrategia: defender la "patria", o "nación" (*homeland*); construir seguridad a nivel global a través del mantenimiento del orden y la estabilidad en todo el mundo; y proyectar el poder de los EEUU fuera de las fronteras del territorio estatal para combatir agresiones, destruir redes terroristas o proveer asistencia humanitaria (p. V). Como factor de (in)seguridad, el cambio climático se interpreta de dos formas: la primera se acerca mucho a la noción de "potenciador de riesgos" de la estrategia española, al definir el cambio climático como "multiplicador de amenazas" (p. 8). Según el documento, algunos efectos del cambio climático como la escasez de agua, el aumento del precio de los alimentos o la devastación de casas, tierras e infraestructuras, agravarán la competición por los recursos y pondrán más presión sobre las sociedades y economías:

Estos efectos son multiplicadores de amenazas que agravarán las tensiones en el extranjero como la pobreza, la degradación medioambiental, la inestabilidad política y las tensiones sociales –condiciones que pueden facilitar actividades terroristas y otras formas de violencia (p. 8)²⁴

De esta forma, el texto dibuja un escenario marcado por la devastación, la escasez y la competición por los recursos, y varias formas de violencia, incluyendo el terrorismo. No queda claro cuál es el papel del ejército en este contexto, pero dada la historia reciente del Departamento de Defensa en la lucha contra el terrorismo y la supuesta estabilización de diferentes regiones alrededor del mundo, no es arriesgado suponer que el ejército deberá jugar un papel activo.

El segundo aspecto del cambio climático que afecta la seguridad de los Estados Unidos y el papel de las fuerzas armadas es el cambio de contexto material en el que operan. Es decir, el cambio climático puede perjudicar las capacidades y efectividad del ejército:

La agilidad operacional del Departamento [de Defensa] depende del acceso libre a la formación en tierra, aire y mar y espacio de entrenamiento. En consecuencia, realizaremos un estudio completo de todas las instalaciones para analizar los impactos potenciales del cambio climático en nuestras

24. En inglés en el original: "These effects are threat multipliers that will aggravate stressors abroad such as poverty, environmental degradation, political instability, and social tensions – conditions that can enable terrorist activity and other forms of violence" (p. 8)

misiones y nuestra resiliencia operativa, y desarrollaremos e implementaremos planes de adaptación en caso de que sea necesario (p. 25)²⁵

Así, se trata de modernizar y preparar el aparato militar a las nuevas condiciones medioambientales para mantener su efectividad, lo que implica, presumiblemente, más gasto militar.

La *National Security Strategy* (2015), por su lado, fue elaborada por la presidencia del gobierno federal y desarrolla una visión de la seguridad más multidimensional, similar a las estrategias de seguridad del Estado español. Por un lado, describe el cambio climático como uno de los "principales riesgos a nuestros intereses" (p. 2):

El cambio climático es una amenaza urgente y creciente a nuestra seguridad nacional, que incrementa los riesgos naturales, los flujos de refugiados y los conflictos por los recursos básicos como la comida y el agua (p. 12)²⁶

La referencia a la primera persona del plural ("nuestros intereses", "nuestra seguridad") no deja lugar a dudas sobre quién es el amenazado –los Estados Unidos– y quiénes o qué son las amenazas: los riesgos naturales, las personas refugiadas y los conflictos que puedan afectar los intereses de los Estados Unidos. Este enfoque encaja con una visión del cambio climático centrada en la seguridad nacional. No obstante, a la hora de explicar las medidas para afrontar esta amenaza es significativo que el documento se centre, sobre todo, en estrategias de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así, si bien se interpreta el cambio climático desde el marco geopolítico clásico donde el sujeto de seguridad es el estado y las amenazas vienen sobre todo del exterior –refugiados climáticos, conflictos armados–, cuando desarrolla las líneas de actuación pone el énfasis en la reducción de las emisiones que causan el cambio climático.

Unión Europea

En tanto que actor con voluntad de tener una política exterior y de seguridad propia, la Unión Europea también ha elaborado en los últimos años una estrategia de seguridad: *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European*

Union's Foreign And Security Policy (2016). En las primeras páginas del documento, donde se resume la visión general de la estrategia, el cambio climático aparece como un factor que agravará un escenario de por sí bastante desolador:

Vivimos momentos de crisis existencial, dentro y fuera de la Unión Europea. Nuestra Unión está amenazada. Nuestro proyecto europeo, que nos ha traído paz, prosperidad y democracia sin precedentes, está siendo cuestionado. Al este, el orden de seguridad europeo está siendo violado, mientras el terrorismo y la violencia afectan el Norte de África y Oriente Medio, así como la misma Europa. El crecimiento económico todavía no corresponde a la demografía en partes de África, las tensiones a nivel de seguridad en Asia aumentan, mientras el cambio climático causa todavía más interrupciones (p. 7)²⁷

En este fragmento queda claro que el referente de la seguridad es la Unión Europea. ¿Pero qué tipo de reto o amenaza representa el cambio en tanto que factor "disruptivo"? El enfoque se asemeja al que encontramos en las estrategias de seguridad de España y de los Estados Unidos, en la medida en que el cambio climático es definido como un "multiplicador de amenazas" que "catalizará la escasez de agua y alimentos, pandemias y desplazamientos" (p. 29). Según el texto, este efecto multiplicador es especialmente peligroso por su potencial desestabilizador en las regiones vecinas de la UE:

La transición energética es uno de los principales retos de nuestras regiones vecinas, pero hay que gestionarlo de forma correcta para evitar que alimente tensiones sociales. El cambio climático y la degradación medioambiental exacerbaban conflictos potenciales, dado su impacto en la desertificación, la degradación del suelo, y la escasez de agua y alimentos (p. 26)²⁸

Prácticamente el documento no vuelve a mencionar el cambio climático, excepto en las medidas para afrontarlo, que incluyen la cooperación multilateral en la gobernanza del clima y el uso de energías renovables. Así, queda claro que, desde el punto de vista de la seguridad, el cambio climático representa un problema en la medida en que puede agravar la inestabilidad de regiones vecinas de Europa, si bien las medidas incluyen estrategias de mitigación y no solo de defensa militar.

25. En inglés en el original: "The Department's operational readiness hinges on unimpeded access to land, air, and sea training and test space. Consequently, we will complete a comprehensive assessment of all installations to assess the potential impacts of climate change on our missions and operational resiliency, and develop and implement plans to adapt as required" (p. 25)

26. En inglés en el original: "Climate change is an urgent and growing threat to our national security, contributing to increased natural disasters, refugee flows, and conflicts over basic resources like food and water" (p. 12)

27. En inglés en el original: "We live in times of existential crisis, within and beyond the European Union. Our Union is under threat. Our European project, which has brought unprecedented peace, prosperity and democracy, is being questioned. To the east, the European security order has been violated, while terrorism and violence plague North Africa and the Middle East, as well as Europe itself. Economic growth is yet to outpace demography in parts of Africa, security tensions in Asia are mounting, while climate change causes further disruption" (p. 7)

28. En inglés en el original: "Energy transition is one of the major challenges in our surrounding regions, but must be properly managed to avoid fuelling social tensions. Climate change and environmental degradation exacerbate potential conflict, in light of their impact on desertification, land degradation, and water and food scarcity" (p. 26)

OTAN

La OTAN es un organismo militar intergubernamental, y por tanto su visión de la seguridad tiende a ser más militarista que la que podemos encontrar en estrategias elaboradas por los gobiernos centrales en su conjunto, donde a menudo participan otros departamentos a parte de los responsables de defensa. No obstante, igual que la *Quadriennial Defense Review* de los Estados Unidos, las estrategias de la OTAN son útiles para entender qué papel dan a las fuerzas armadas en el actual contexto internacional. En este sentido, la inclusión del cambio climático como un factor relevante en sus planes estratégicos es un indicador de la militarización del clima ya que se utiliza como pretexto para justificar las acciones de las fuerzas armadas y el gasto militar.

El documento más relevante publicado por la OTAN es el *Strategic Concept: Active Engagement, Modern Defence* (2010), donde se identifican los valores y objetivos que han de guiar la actuación de la organización durante los próximos diez años. A diferencia de otros textos analizados hasta ahora, el cambio climático sólo se menciona una vez:

Presiones medioambientales y relativas a los recursos, como los riesgos a la salud, el cambio climático, la escasez de agua y las necesidades crecientes de energía continuarán influenciando el contexto de seguridad del futuro en ámbitos que afectan la OTAN, y potencialmente pueden afectar las operaciones y la planificación de la OTAN (p. 13)²⁹

Este fragmento aparece dentro del apartado sobre el contexto de seguridad. Así, encontramos una visión similar a las que hemos visto en otras estrategias de seguridad, donde el cambio climático y otros factores medioambientales aparecen como elementos que, si bien no representan amenazas directas, crearán un escenario marcado por la escasez de recursos que puede agravar los peligros. En lo que respecta a las medidas a tomar, a pesar de que el documento no menciona ninguna específica para los retos del cambio climático, la estrategia de la OTAN se centra sobre todo en reforzar los instrumentos militares: aumentar el gasto militar, mejorar la planificación y el entrenamiento, o continuar con la disuasión nuclear, entre otras.

RESPONDER A LA MILITARIZACIÓN DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA: UNA CRÍTICA A LA TESIS SOBRE LOS CONFLICTOS ARMADOS

Los documentos estratégicos analizados se inscriben, en su mayor parte, dentro del paradigma de la seguridad nacional clásica donde el referente principal es el Estado –o conjunto de Estados en el caso de la OTAN y la UE–, el cual debe hacer frente a un amplio abanico de amenazas y riesgos generadas por el cambio climático, como pueden ser los estados fallidos, la escasez de recursos, las migraciones o incluso el terrorismo. Al mismo tiempo, esta visión coexiste con medidas que ponen más énfasis en la gobernanza multilateral de los retos climáticos o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y el reconocimiento del impacto de un aumento global de las temperaturas para el bienestar de las personas. De esta manera el discurso que reflejan las estrategias de seguridad se sitúa dentro del paradigma de seguridad convencional –especialmente la de la OTAN y la del Departamento de Defensa de los EEUU– aunque introducen elementos que van más allá de la defensa militar clásica y reconocen un enfoque más amplio respecto a los retos y amenazas a la seguridad.

No obstante, hay un argumento que se repite en los diversos documentos y que vale la pena examinar con más detalle, ya que no solo abre la puerta a la militarización del cambio climático, sino también a un repliegue de los Estados en la medida en que éstos ven su seguridad amenazada. Esta idea se refleja en la definición del cambio climático como un “potenciador de riesgos” o “multiplicador de amenazas” a la seguridad nacional. Desde esta perspectiva, el cambio climático es visto como un factor que, al reducir la disponibilidad de bienes ecológicos como pueden ser la tierra cultivable o el agua potable, y degradando ecosistemas necesarios para la vida humana, generará un escenario global marcado por la inestabilidad social, los conflictos por los recursos y los desplazamientos de población masivos. Así, el riesgo principal es que estas tensiones contribuyan a desintegrar los órdenes sociales, políticos y económicos existentes en un clima de conflicto generalizado donde la supervivencia del Estado-nación se vea amenazada. De forma más o menos explícita se dibuja, por tanto, un mapa geopolítico con unos focos de inestabilidad y conflicto geográficamente localizados, y un conjunto de Estados que buscan contener estas amenazas a su seguridad mediante sus aparatos militares, entre otras medidas.

Este discurso aparece, por ejemplo, cuando la estrategia de la UE sitúa los riesgos del cambio climático a nivel de seguridad en la inestabilidad que se pueda

29. En inglés en el original: "Key environmental and resource constraints, including health risks, climate change, water scarcity and increasing energy needs will further shape the future security environment in areas of concern to NATO and have the potential to significantly affect NATO planning and operations" (p. 13)

generar en regiones vecinas como Oriente Medio; o de forma parecida cuando la estrategia española de 2017 identifica el África subsahariana, y el Sahel en particular, como un espacio especialmente propicio para actividades criminales y/o terroristas, agravadas por el cambio climático y la desertización (p. 47). En definitiva, esta visión dibuja un escenario marcado por "conflictos climáticos" en diversas partes del mundo y movimientos de población generalizados –los "migrantes climáticos"– que amenazan la estabilidad de los Estados y el orden que representan.

No es difícil encontrar este argumento en documentos gubernamentales, publicaciones de centros de investigación, artículos periodísticos e incluso trabajos académicos. Una de las versiones más extremas, pero aun así más influyentes, es la desarrollada por el analista Robert D. Kaplan en *La anarquía que viene* (2000), donde sitúa los cambios medioambientales como el principal reto a la seguridad del siglo XXI. De hecho, como han señalado autores como Hulme (2011) y Livingstone (2015), este discurso que tiende a explicar los conflictos a partir de cambios en el clima continúa una larga tradición compartida por Hobbes y Malthus, entre otros. Por tanto, su éxito se explica en parte por esta continuidad con una visión muy asentada de los conflictos sociales que viene de lejos.

Sin embargo, a pesar de la aparente plausibilidad de este argumento, contiene una serie de supuestos que vale la pena analizar. En primer lugar, se basa en la recreación de un escenario marcadamente pesimista, incluso a veces apocalíptico, que se presenta como una certeza incontestable. Esta visión que asume la escasez y la competición por los recursos como principios incuestionables alimenta sentimientos de impotencia e irreversibilidad donde solo la adaptación, el repliegue y la defensa aparecen como opciones razonables. Pero el problema principal es el reduccionismo, que pone énfasis en el cambio climático mientras esconde toda una serie de factores políticos y económicos que son mucho más relevantes para entender por qué determinados lugares son más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por tanto, pueden convertirse en espacios de conflicto y migraciones. De esta forma se tiende a ver como inevitables la pobreza y la inestabilidad social ya que dependerían principalmente de cambios en el medio ambiente. Si la guerra, el empobrecimiento y las migraciones se pueden atribuir a un aumento de la temperatura, entonces no hace falta buscar soluciones políticas a los retos securitarios del cambio climático.

Y, sin embargo, años de investigación sobre el vínculo entre cambio climático y conflictos no han podido demostrar una relación de causalidad clara entre ambos, mientras que otros factores como el desarrollo

socioeconómico, las desigualdades entre grupos sociales o la calidad de los sistemas de gobierno aparecen como factores explicativos mucho más relevantes (Buhaug, 2015; Selby y otros, 2017; Mach y otros, 2019). Así, a pesar de que a nivel teórico la hipótesis de los "conflictos climáticos" pueda parecer razonable, en la práctica se ha demostrado errónea.

No obstante, es importante recordar que a menudo la persistencia de ciertos argumentos no se explica tanto en función de si se ajustan más o menos a la realidad, sino por el hecho de que refuerzan determinadas visiones del mundo. En este sentido, el reduccionismo que enfatiza el cambio climático como causa de conflictos es útil en la medida en que exime de responsabilidad muchos países que no solo son los principales emisores de gases de efecto invernadero, sino que perpetúan las relaciones económicas y políticas que producen la vulnerabilidad de las personas a los efectos del cambio climático. Se ignora, por ejemplo, el pasado colonial de muchas regiones que hoy se señalan como origen de los conflictos y las migraciones climáticas: el África subsahariana, Oriente Medio y el sur de Asia. De la misma manera, no se cuestiona la extracción de materias primas que expulsa poblaciones locales, o los monocultivos masivos que degradan ecosistemas necesarios para la vida humana, ni sistemas institucionales que excluyen sistemáticamente buena parte de la población. De esta forma, aquellos que son más vulnerables al cambio climático –sociedades empobrecidas– aparecen como amenazas para los estados con más recursos. Ciertamente, para algunos es más fácil construir un muro y protegerlo militarmente que reconocer la propia responsabilidad en las causas de los conflictos.

Otra consecuencia negativa del discurso centrado en la seguridad nacional es que refuerza el enfoque geopolítico clásico basado en la supervivencia del Estado en un entorno global hostil. Al contextualizar los riesgos del cambio climático como amenazas externas –migraciones, conflictos, inestabilidad proveniente de países empobrecidos– se esconde el hecho de que muchos de estos retos son a menudo los efectos de acciones realizadas en otras partes del mundo, ya sean emisiones de gases de efecto invernadero o relaciones socioeconómicas que incrementan la vulnerabilidad a la emergencia climática. Por tanto, entender los retos del cambio climático desde esta perspectiva sólo contribuye a activar una retórica basada en la dicotomía ellos/nosotros que dificulta la cooperación internacional necesaria para encontrar soluciones colectivas a problemas compartidos. Tal como señala Deudney (1990), a menudo las causas de la degradación medioambiental no hay que buscarlas en "ellos" sino en "nosotros".

La manera como interpretamos el cambio climático a través de diferentes discursos de seguridad es fundamental para entender qué tipo de respuestas nos parecen razonables y legítimas. Un discurso que pone énfasis exclusivamente en los riesgos que representan los conflictos, las migraciones o la inestabilidad social para la independencia e intereses de los Estados abre la puerta a su repliegue y a la militarización. A partir del análisis de sus estrategias de seguridad y defensa, hemos visto como algunos estados reproducen esta visión a través de la definición del cambio climático como "multiplicador de amenazas" o "potenciador de riesgos", entendiendo estas amenazas y riesgos –"conflictos climáticos", migraciones– en referencia a la seguridad del estado.

Por otro lado, no es menos cierto que este discurso coexiste con algunos elementos que se acercan al paradigma de la seguridad humana al poner en el centro el bienestar y la calidad de vida de las personas. Además, reconocen que para garantizar la seguridad humana hacen falta estrategias centradas en el desarrollo socioeconómico, como por ejemplo garantizar el acceso a recursos y bienes esenciales para la vida humana. Ciertamente, el hecho de que prácticas asociadas a la seguridad humana se incorporen en la agenda de seguridad nacional de los estados puede ser interpretado como un cambio positivo hacia una concepción de la seguridad menos militarista. Sin embargo, tal como muestran los documentos analizados, el concepto de seguridad sigue estando fuertemente asociado a la preservación de un orden geopolítico centrado en la confrontación entre estados nacionales, y a un sistema económico que no solo condena millones de personas a la pobreza, sino que se encuentra en el origen del cambio climático (Dalby, 2015).

Este hecho implica que la seguridad humana pueda ser apropiada por las instituciones tradicionalmente encargadas de garantizar la seguridad –el ejército y la policía– y ser subsumida en una definición de segu-

ridad ampliada. Así, las políticas de desarrollo y bienestar orientadas a garantizar la seguridad humana ya no estarían motivadas por razones de justicia, solidaridad o responsabilidad, sino que se convertirían en instrumentos para proteger la seguridad nacional como valor último. Dicho de otro modo, la subordinación al paradigma clásico –como demuestran los documentos analizados– significa que estas prácticas siempre estarán supeditadas a los objetivos y prioridades de la seguridad nacional; solo se llevarán a cabo cuando sean útiles para garantizar la seguridad de los Estados o, al menos, cuando no entren en contradicción con ésta. Por poner un ejemplo, muchos estados establecen que garantizar el aprovisionamiento de combustibles fósiles de forma barata constituye uno de los principales objetivos de sus estrategias de seguridad –en beneficio, sobre todo, de grandes empresas energéticas, ya que esta reducción de costes no siempre revierte en los consumidores finales. Ahora bien, este objetivo entra en contradicción con las prioridades del enfoque de la seguridad humana como son el mantenimiento de una relación sostenible con el medio ambiente y la garantía de unas condiciones de vida digna para todos los trabajadores de la cadena de aprovisionamiento.

Por tanto, el reto es evitar que el paradigma de la seguridad humana se subordine al imaginario geopolítico y geoeconómico convencional, donde la preservación de un orden basado en los Estados nacionales y la defensa de los intereses ciertas élites políticas y económicas aparecen como los objetivos últimos. Y esto pasa por reconocer que existe una tensión entre un enfoque basado en la seguridad humana, y otro basado en la seguridad nacional, ya que no siempre son complementarios. De la misma forma que la seguridad a largo plazo no puede existir sin justicia social, en un contexto de transformación del clima, la seguridad será imposible sin una justicia climática que pase por reconocer y asumir responsabilidades, y distribuir los costes del cambio climático.



2. LAS EMISIONES DEL SISTEMA MILITAR Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL

2.1 ¿QUÉ HACEMOS CON EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN? ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES MILITARES

Chloé Meulewaeter

Los impactos medioambientales de la institución militar aún están ausentes de los grandes debates sobre el clima. Desde la exclusión explícita de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) relativas al sector militar del Protocolo de Kioto en 1992, a la retirada de Estados Unidos de los Acuerdos de París de 2015, es visible el malestar del sector militar a la idea de reducir su huella de carbono. En este apartado, queremos hablar del elefante en la habitación, esto es, de la huella de carbono del sector militar, tema tan poco tratado en la literatura especializada y en los debates actuales sobre la crisis ambiental. Nos preguntamos sobre los impactos de la institución militar en la degradación medioambiental, desde la extracción de materias primas para fabricar armas, hasta los desechos tóxicos resultantes de la guerra.

Para ello, en este apartado hacemos una aproximación a los vínculos entre la militarización y la crisis ambiental, primero desde el enfoque de la sociología ambiental, con el concepto de la rueda de destrucción. Segundo, desde la perspectiva de los estudios para la paz, a través de la propuesta del ciclo económico militar. Ambas perspectivas permiten entender cómo

la actividad militar, desde el proceso de preparación para la guerra, hasta los conflictos armados mismos, es un factor clave de la degradación medioambiental y debe de formar parte de la narrativa que denuncia a los principales responsables de la crisis ambiental.

En consecuencia, el apartado se divide en dos puntos principales. El primero describe la teoría de la rueda de destrucción y expone los resultados de estudios empíricos relevantes sobre la relación entre la militarización y las emisiones de dióxido de carbono. El segundo ilustra cómo los varios tipos de daños medioambientales son inherentes a las distintas etapas que conforman el ciclo económico militar. Finalmente, concluimos sobre los vínculos entre las dos teorías y las implicaciones que tienen para la acción a favor de la sostenibilidad del planeta.

LA RUEDA DE DESTRUCCIÓN

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), identifica en sus informes los sectores industriales responsables de las mayores emisiones de CO₂. Estos son, en orden de importancia, la energía, la industria, el transporte y la construcción (IPCC, 2014). Esta clasificación invisibiliza el papel del sector militar, que precisamente es un factor clave del cambio climático. De acuerdo con Crawford (2019), el Departamento de Defensa de los Estados Unidos es la mayor institución consumidora de petróleo, y, por consiguiente, es la principal responsable de las emisiones de gases con efecto invernadero.

En la literatura académica, y en los estudios sobre los determinantes del cambio climático, poco se ha escrito sobre la relación entre la militarización y la crisis ambiental. Sin embargo, hay una rama de la sociología ambiental que analiza esta relación, desde una perspectiva que se conoce como la "rueda de la destrucción" (Clark y Jorgenson, 2012; Clark, Jorgenson, y Kentor, 2010; Givens, 2014; Jorgenson, Clark, y Givens, 2012; Jorgenson, Clark, y Kentor, 2010). Esta perspectiva explica que la institución militar tiene su propia dinámica de crecimiento, que funciona independientemente de la "rueda de producción" – un marco de la sociología ambiental que explica la conexión entre la tendencia expansionista del capitalismo y sus consecuencias negativas para el medioambiente –, y, por tanto, genera daños específicos al medioambiente (Clark y Jorgenson, 2012; Hooks y Smith, 2005; Jorgenson y otros, 2010). Por ello, dentro de la teoría de la "rueda de producción", la "rueda de destrucción" se centra en el sector militar. Desde la perspectiva de la sociología ambiental, se destacan una serie de características institucionales, estructurales y tecnológicas que ilustran la importancia de considerar la forma en que el ejército, como gran organización e institución, contribuye a la degradación ecológica, y se sugiere que a medida que los Estados desarrollen ejércitos a los que se destinen capitales cada vez mayores, sus impactos ambientales aumentarán (Clark & Jorgenson, 2012).

De acuerdo con el sociólogo medioambiental Gould (2007) la militarización es el acto humano más destructivo desde el punto de vista ecológico. Los impactos medioambientales que genera la actividad militar ocurren tanto en tiempos de paz, como en periodos de guerra, ya que todas las etapas del proceso de militarización de la sociedad provocan degradación medioambiental. De acuerdo con los principales estudios realizados desde la perspectiva de la rueda de destrucción (Clark y Jorgenson, 2012; Clark y otros, 2010; Jorgenson y otros, 2012, 2010), estos daños se pueden clasificar de la siguiente forma:

- Durante un conflicto armado, y las misiones militares en general, se generan daños al medio ambiente debido al uso de las armas: en particular, las armas de destrucción masiva –nucleares, químicas y biológicas– contaminan los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las misiones militares consumen enormes cantidades de combustibles fósiles y nucleares en aviones, barcos y tanques. Las guerras también son responsables de la pérdida de hábitat silvestre y de la deforestación. Además, las minas y municiones sin estallar dejan las tierras inapropiadas para la agricultura y la cría de animales, y presentan peligros persistentes para la población civil. Los desechos de guerra incorporan en los eco-

sistemas una serie de sustancias químicas y otras toxinas.

- La actividad militar en general también es responsable de importantes daños al medioambiente. El consumo de energía y otros recursos en las bases militares nacionales e internacionales emiten considerables emisiones de CO₂ en la atmósfera. Estas bases militares ocupan terrenos para el entrenamiento de los soldados y están altamente contaminadas por el uso de varias sustancias tóxicas para el mantenimiento del arsenal militar. La I+D militar, y los ensayos de armas que conlleva, son otra fuente de contaminación del agua y de las tierras, tanto por el uso de combustibles como por los desechos tóxicos que generan. Otras toxinas se introducen en el medio ambiente a través de la producción, el almacenamiento, el transporte y la eliminación de armas biológicas y químicas.

Desde la perspectiva de la rueda de la destrucción, también se han valorado empíricamente los efectos de la militarización en el consumo de energía. Por ejemplo, (Clark y otros, 2010) han examinado empíricamente el impacto de las instituciones militares nacionales en el consumo de energía. Los resultados de los análisis de datos de panel³⁰ revelan, por un lado, que la militarización, medida por el gasto militar por soldado, aumenta el consumo de energía, y, por otro lado, revelan que el consumo total de energía está positivamente asociado con el tamaño de las Fuerzas Armadas. Los autores explican estos resultados por la expansión y el desarrollo de equipos y vehículos de tecnología punta, que aumentan la demanda de energía de las Fuerzas Armadas, y por las necesidades de recursos de los soldados, que deben ser entrenados, alojados, alimentados y vestidos (Clark y otros, 2010). En esta misma línea, Bildirici (2017) analiza la co-integración y la relación causal entre las emisiones de CO₂, el crecimiento económico, la militarización (medida con los gastos militares), y el consumo de biocombustibles, desde la perspectiva de la teoría de la rueda de la destrucción. Basándose en datos de Estados Unidos para el periodo 1984-2015, los resultados confirman que el crecimiento económico y la militarización son la causa principal de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de biocombustibles. Jorgenson y otros (2010) han realizado un análisis con datos de panel para el periodo 1970-2000 para evaluar, desde la perspectiva de la rueda de la destrucción, los efectos de la militarización, medida por los gastos militares por soldado y por el porcentaje de personal militar, sobre varios indicadores medioam-

30. Los datos de panel se refieren a datos que combinan una dimensión temporal con una dimensión transversal. En este capítulo, habitualmente la dimensión temporal es un rango de años, y la dimensión transversal son los países.

bientales: las emisiones de CO2 totales, las emisiones de CO2 per cápita, y la huella ecológica per cápita de los Estados. Los hallazgos empíricos indican que tanto la militarización contribuye al aumento de la escala e intensidad de las emisiones de CO2, así como a los impactos ambientales basados en el consumo de los Estados, lo que apoya la teoría en la que se basa el análisis.

A propósito de los desechos tóxicos consecuencia de la actividad militar, Singer y Keating (1999) sostienen que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos generaba, en la época, 500.000 toneladas de residuos tóxicos al año, lo cual representa más que las cinco principales empresas químicas juntas. Por tanto, los autores estiman que las fuerzas armadas son responsables de producir la mayor cantidad de residuos peligrosos en el mundo. En esta línea, Gould (2007) afirma que los lugares más ecológicamente devastados de la Tierra se encuentran dondequiera que funcionen instalaciones de producción militar, dado que a menudo están exentas de la legislación de protección del medio ambiente en nombre de la seguridad nacional. Siempre desde la teoría de la rueda de destrucción y con una visión empírica, Givens (2014) analiza la relación entre los niveles de militarización y el tiempo de ratificación del Protocolo de Kioto –que insta a los países a reducir sus emisiones de CO2–. Los resultados muestran que niveles más elevados de militarización se asocian con periodos más largos hasta la ratificación, o la no ratificación del Protocolo, lo que apoya las propuestas de la teoría de la rueda de destrucción.

En definitiva, la sociología ambiental, desde la lógica de la rueda de destrucción, considera a la institución militar como una institución social que ha establecido una dependencia hacia el consumo masivo de combustibles fósiles. La dinámica expansiva de la militarización de la sociedad produce un sistema que es altamente consumidor de recursos y generador de desechos, y, por lo tanto, pone en peligro la sostenibilidad del planeta (Clark y Jorgenson, 2012).

EL CICLO ECONÓMICO MILITAR

Desde la perspectiva de los estudios para la paz, y desde su cruce con la rama de conocimiento de la economía de la defensa, el ciclo económico militar es una propuesta que explica el proceso de militarización de la sociedad. Describe todo el conglomerado económico que rodea la economía de la defensa, desde la aprobación anual de los presupuestos públicos de defensa hasta la utilización final de las armas en los conflictos armados (Calvo, 2015). Las distintas etapas que conforman el proceso de militarización son: el gasto militar, la I+D militar, la industria armamen-

tística, el comercio de armas, y la financiación privada de todo ello. Pero, si bien el inicio del ciclo se encuentra en manos del gobierno al aprobar el gasto militar, su verdadero origen se encuentra en la ideología del militarismo, esto es, los elementos discursivos que justifican la necesidad de las armas y de los ejércitos para hacer frente a las amenazas. Asimismo, el ciclo finaliza, y se reinicia, en los conflictos armados, pues el uso de las armas justifica nuevas inversiones para seguir haciendo frente a las amenazas a la seguridad, sean reales o ficticias. La dinámica del ciclo económico militar se caracteriza tanto por la inercia, debido al aprobación anual de los presupuestos militares –que son el motor del ciclo–, como por la expansión, pues produce “empresas cada vez de mayor tamaño cuyas ramificaciones alcanzan desde las fundaciones supuestamente de la sociedad civil hasta la propia universidad” (Calvo, 2015: 83-84).

Como marco teórico, el ciclo económico militar, permite comprender cómo el cambio climático es inherente al proceso de militarización de la sociedad. Más allá de describir el conglomerado que rodea la economía de la defensa. El ciclo económico militar puede ayudar a entender cómo toda la actividad económica militar provoca daños al medioambiente. En esta línea se ha conducido un estudio sobre la relación entre el gasto militar –como indicador de la militarización de los Estados– y las emisiones de CO2 (Meulewaeter, 2017). Basado en 158 países para el período de 1960 a 2015, el análisis de datos de panel confirma que el gasto militar influye en las emisiones de CO2, y que la influencia del gasto militar en las emisiones de CO2 es independiente de la curva de Kuznets³¹ ambiental, lo que significa que el gasto militar, por sí mismo, es un determinante de las emisiones de CO2.

A continuación, detallamos los impactos medioambientales que conllevan cada una de las etapas del ciclo económico militar, que se resumen en el gráfico 4.

Gasto militar

El gasto militar representa el conjunto de presupuestos públicos que tienen como destino la defensa y seguridad armada de un Estado (Ortega, 2015a). Incluye el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, la adquisición de suministros para hacerlas operativas, las infraestructuras y la adquisición de armamento, entre otros. Por tanto, los impactos medioambientales asociados con el gasto militar incluyen todos aquellos

31. La curva de Kuznets vincula el crecimiento económico con la calidad ambiental. Suele incluirse en los estudios empíricos sobre cambio climático en economía medioambiental. Esta hipótesis asume que en el corto plazo el crecimiento económico empeora el medio ambiente; pero en el largo plazo, el desarrollo provoca menos daños medioambientales. La curva de Kuznets tiene la forma de una U invertida, y se calcula con datos del PIB al cuadrado.

Gráfico 4. Los impactos medioambientales de la militarización



relacionados con la actividad militar habitual, de los que se destacan:

- El consumo de energía y recursos durante los entrenamientos;
- El mantenimiento de cuarteles y bases internacionales;
- El consumo de energía y recursos de las infraestructuras;
- Los desechos tóxicos del mantenimiento de equipos militares e infraestructuras, y de los entrenamientos de soldados.

I+D militar

La investigación y desarrollo (I+D) militar tiene como objetivo elaborar nuevos armamentos, instalaciones o infraestructuras militares. Recientemente, se le ha añadido la "i" de innovación, por lo que hablaríamos de I+D+i militar, cuyo objetivo es el desarrollo tecnológico de armas, convencionales y no convencionales, cada vez más sofisticadas (Ortega, 2015b). A la I+D+i se la relaciona con los ensayos de armas, pues forma parte del proceso de desarrollo las pruebas de funcionamiento. Así pues, las consecuencias medioambientales de esta etapa del ciclo económico militar comprenden los recursos y la energía necesaria para la I+D, la contaminación, deforestación y pérdida de hábitat relacionados con los ensayos, y los desechos tóxicos resultantes del proceso de I+D.

Industria militar

La industria militar se refiere a las empresas que realizan toda o parte de su actividad produciendo armas y sus componentes, así como servicios asociados, como la comunicación, los sistemas de vuelo o de mantenimiento de equipos militares (Ortega, 2015c).

Tiene importantes impactos medioambientales indirectos, desde la extracción de materias primas para la fabricación de las armas, la contaminación por las actividades industriales de las cadenas de suministro, y el montaje final de los nuevos equipamientos militares (Parkinson, 2020).

Comercio de armas

Las exportaciones e importaciones tienen también un impacto medioambiental por el consumo de energía que necesita el transporte de las armas y la contaminación que conlleva.

Financiación privada

Las instituciones financieras están también involucradas en el ciclo económico militar, pues proveen todos los servicios financieros necesarios para su buen funcionamiento. Las instituciones financieras tienen impactos medioambientales, al igual que las otras etapas del ciclo económico militar, pues conforman, junto con las empresas transnacionales de extracción y el complejo militar-industrial, el Triángulo Global de Poder –una red de organizaciones e individuos altamente interdependientes, cuyo funcionamiento está relacionado con el cambio climático (Meulewaeter y Brunet, 2020). Es decir, las instituciones financieras tienen un impacto medioambiental indirecto, ya que las empresas extractivas y el complejo militar-industrial dependen de sus servicios, de tal forma que, sin estas, no podrían subsistir.

Conflictos armados

El proceso de militarización de la sociedad culmina en el uso de las armas. Los conflictos armados son

la cara más visible del impacto militar de la crisis ambiental. El desplazamiento de los militares implica el consumo de combustibles. Las armas utilizadas en los conflictos, aviones de guerra, buques, tanques, y vehículos de combate, entre otros, consumen importantes cantidades de combustibles fósiles y nucleares, y en consecuencia son responsables de contaminar tierras agrícolas, mares y la atmósfera. Los conflictos armados conllevan pérdida de hábitat, transformación de ecosistemas y deforestación. Las minas antipersonales y otras municiones sin estallar siguen siendo una amenaza para la población civil durante años, e impiden el cultivo de tierras y la cría de animales. La reconstrucción posconflicto implica también la necesidad de grandes cantidades de energía y recursos. Finalmente, el consumo de recursos durante los conflictos armados implica la generación de residuos, que son otro impacto medioambiental de la actividad militar.

Necesidad de renovar las armas

La necesidad de renovar las armas para hacer frente a nuevas amenazas, sean reales o ficticias, es consecuencia directa de la auto amplificación del Triángulo de Poder Global: una constante expansión que se alimenta de los conflictos y de la depredación de los recursos (Meulewaeter y Brunet, 2020).

La degradación ecológica es inherente a los procesos de militarización. La lógica expansiva de la rueda de destrucción, que explica los vínculos entre la institución militar y sus impactos medioambientales cada vez mayores, y la lógica expansionista del ciclo económico militar, que lleva inexorablemente a la guerra y a la destrucción medioambiental- se complementan para explicar por qué la huella de carbono militar es un factor determinante del cambio climático.

Los daños medioambientales de la actividad militar ocurren tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, y tienen repercusiones tanto en las emisiones de CO2 provocadas por el elevado consumo de

combustibles fósiles de las armas y equipamientos militares, como en la destrucción de hábitat y ecosistemas, y en la contaminación de aguas y tierras por los desechos tóxicos de las armas, del desarrollo tecnológico y de las infraestructuras militares, entre muchos otros. Tanto desde la teoría de la rueda de destrucción, como desde el ciclo económico militar, se prevé que a medida que los gobiernos dediquen más recursos económicos a sus instituciones militares, los impactos medioambientales serán cada vez mayores. Dada su envergadura, la institución militar debe considerarse un motor clave de la degradación ecológica.

En la tabla 3 resumimos los aspectos principales de cada propuesta, que parten de distintas disciplinas y fundamentos, pero desembocan en lógicas similares, esto es, la expansión de la militarización, y en consecuencia crecientes daños ambientales relacionados con el sector militar (Calvo, 2015; Clark y Jorgenson, 2012; Clark y otros, 2010; Givens, 2014; Jorgenson y otros, 2012, 2010).

En este sentido, la acción por el clima debe de incluir en su discurso la responsabilidad del sector militar. La histórica llamada de los movimientos por la paz por la reducción de los gastos militares y la creación de dividendos por la paz, esto es, la desviación de recursos económicos militares para la financiación de políticas relacionadas con la seguridad humana y la construcción de paz debe formar parte de las reivindicaciones y de los debates por el clima. La creación de estos dividendos de paz permitiría alejar el sombrío horizonte que se presentará si no se hace posible la financiación de políticas públicas enfocadas a la mitigación de los aspectos adversos del cambio climático.

El impacto de la guerra y de la preparación para la guerra tiene consecuencias medioambientales evidentes, pero aun poco documentadas. Dados los efectos que podrían tener las respuestas militares en la crisis medioambiental, urge investigar en profundidad el papel del sector militar desde un enfoque de paz. En definitiva, hay que sacar al elefante de la habitación.

Tabla 3. Resumen de la teoría de la rueda de destrucción y del ciclo económico militar

	Rueda de destrucción	Ciclo económico militar
Ámbito	Sociología ambiental	Economía de la defensa, estudios para la paz
Fundamentos	Competición en el sistema internacional de Estados	Inercia en la aprobación anual de los presupuestos públicos de defensa
Lógica	Expansión	Expansión
Estudios empíricos	La militarización aumenta los niveles de CO2 (Clark, Jorgenson y Kentor, 2010; Bildirici, 2017; Jorgenson, Clark y Kentor, 2010)	La militarización aumenta los niveles de CO2 (Meulewaeter, 2017).

Elaboración propia

2.2 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS EE. UU.

Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas

CARENCIA DE RESPONSABILIDAD Y DE COMPROMISO SOBRE EMISIONES MILITARES

La significativa contribución de las fuerzas armadas a la crisis climática ha recibido poca atención. Los estudios sobre el tema no suelen tener en cuenta las emisiones militares. En los acuerdos internacionales sobre crisis climática, el sector militar ha recibido un trato de privilegio, a pesar de que (como veremos a continuación) es el responsable de un volumen importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En el debate del Protocolo de Kioto de 1997, los Estados Unidos insistieron mucho en mantener fuera del Acuerdo tanto los datos sobre emisiones militares como su posible reducción, alegando cuestiones de seguridad nacional. Finalmente, a pesar de que consiguieron su objetivo (Knight, 1998), no ratificaron el Protocolo. El Acuerdo de París de 2015 no representó avances efectivos en este sentido puesto que no obliga explícitamente a los estados a reducir sus emisiones militares (Neslen, 2015). Es, pues, urgente, que se legisle la reducción de emisiones que tengan su origen en el ámbito militar.

LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS EE.UU. CONSTITUYEN UN GRAN EMISOR DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

El gasto militar de los EE.UU. es el mayor del mundo. El año 2019 fue de 732.000 millones de dólares, lo que representa el 38% del gasto militar mundial y más del doble de la suma de los gastos militares de Rusia (65.100 millones de dólares) y de China (261.000 millones de dólares) (Tian, 2020). Los EE.UU. disponen de la mayor maquinaria de guerra del mundo.

Las fuerzas armadas de los EE.UU. consumen más fuel y emiten más GEI que la mayoría de los países de tamaño mediano³² El consumo diario de combustible del Departamento de Defensa norteamericano (*Department of Defence*, DoD) supera el consumo total nacional de países como Suecia, Suiza o Chile. Si el DoD fuera un estado, sería el 47º mayor emisor de GEI del mundo, y eso teniendo en cuenta solo las emisiones derivadas de la combustión de fuel. El elevado número de acciones militares y la magnitud de sus fuerzas armadas (tropas, armamento, instalaciones en todo el mundo...) hacen del DoD el mayor consumidor de energía de los EE.UU. y el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo. Es

32. Todos los datos, salvo que se especifique una fuente distinta, se han extraído de (Crawford, 2019).

un factor determinante que los EE.UU. hayan estado ininterrumpidamente en guerra (o implicados en acciones militares) desde 2001. En estos momentos, el DoD y el Departamento de Estado están implicados en operaciones contraterroristas en más de 80 países. El DoD cuenta con unas fuerzas armadas de más de dos millones de personas, y uno de los arsenales más avanzados tecnológicamente. Todo esto exige un enorme consumo de energía, al que hay que sumar las necesarias cadenas de suministro (barcos de contenedores, grandes camiones...).

En su petición presupuestaria anual dirigida al Congreso, el DoD no informa sobre su consumo de fuel. Tampoco informa de sus emisiones de GEI. Aun así, es posible hacer una estimación a partir de los datos de emisiones y de los datos de consumo de fuel del DoD, publicadas por el Departamento de Energía. Estos datos permiten, además, una estimación de qué parte de dichas emisiones es atribuible a la guerra.

DATOS DE CONSUMO DE PETRÓLEO Y DE EMISIÓN DE GASES GEI

Combustible

La guerra y su preparación son actividades de uso intensivo de combustibles fósiles. Desde 2001, el DoD ha gastado de forma continuada un 77-80% de todo el consumo de energía del gobierno de los EE.UU. Consume más petróleo que la mayoría de países. Ello se debe a que utiliza equipos que gastan combustible a un ritmo increíble. La logística y las instalaciones de apoyo de las operaciones militares también hacen un uso extremadamente intensivo de petróleo. Incluso los vehículos militares no blindados son extremadamente ineficientes. Por ejemplo, los 60.000 vehículos HUMVEE (un tipo de jeep) de la flota de la *US Army* necesitan casi cuatro litros de combustible diésel para recorrer entre seis y doce kilómetros. Un consumo colosal comparado con los cuatro litros que gasta un turismo medio para recorrer 100 km.

El consumo energético del DoD se reparte entre dos partidas. Una es la energía consumida en las instalaciones militares del Pentágono y representa el 30% del consumo total. La otra gran partida es la operativa, definida como la energía necesaria para la movilidad, entrenamiento y apoyo de las fuerzas militares y plataformas de armamento. Esta partida representa el 70% del consumo energético del DoD. La mayor parte corresponde a la compra de combustibles Jet (JP-8, JP-5) para aviones y de combustible diésel. Cuando los EE.UU. están involucrados en una guerra, crece el consumo de combustibles Jet y de combustible diésel. Y el ritmo de crecimiento depende del tipo de operación que se lleva a cabo, concretamente si

la guerra es terrestre o aérea. Por ejemplo, el 2001, a raíz del inicio de una guerra de envergadura como la de Afganistán, aumentó claramente el consumo de energía del DoD. A pesar de que todas las secciones armadas de Defensa disponen de aviones, la *Air Force* es la mayor consumidora de petróleo para los combustibles Jet. Durante el año 2014, en que los EE.UU. habían empezado la guerra contra Daesh en Siria con ataques aéreos, el consumo de combustible Jet representó más del 70% del total de la partida operativa. El año 2017 el DoD gastó casi 8.200 millones de dólares en la partida operativa (concretamente en el combustible para hacer funcionar barcos, aviones, vehículos de combate y las bases de contingencia).

El consumo total de combustible por parte del DoD refleja la implicación de los EE.UU. en guerras y ocupaciones militares. Desde el 11S, la media anual de compra de combustible ha sido de más de 120 millones de bidones de todo tipo de fueles. La media anual de estos últimos años (2013-2017), en que los EE.UU. han reducido sus operaciones en Irak y Afganistán, ha sido de 100 millones de bidones (Crawford, 2019).

Emisiones

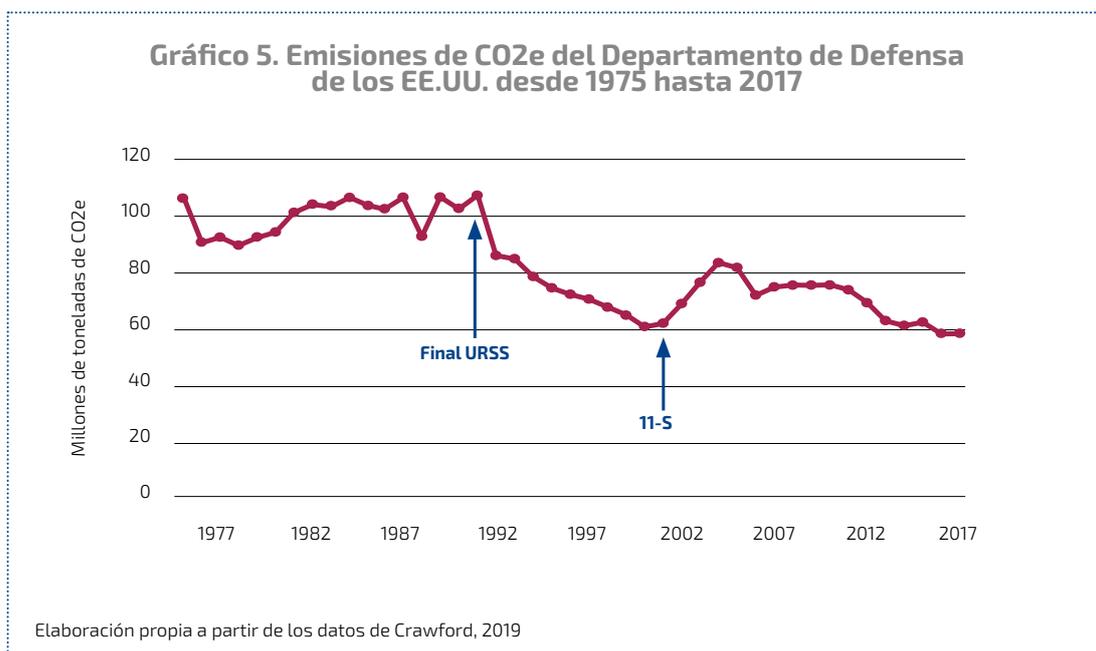
Las fuentes de emisión de GEI más relevantes vinculadas al sector militar son:

1. Emisiones de las instalaciones y de actividades no de guerra.
2. Emisiones relacionadas con la guerra en operaciones de contingencia en el extranjero.
3. Emisiones por parte de la industria militar norteamericana (fabricación de armamento y munición).
4. Emisiones generadas por ataques a objetivos petroleros, concretamente la quema de pozos de petróleo y de refinerías.

Comentamos cada una de dichas fuentes de emisión:

1. El conjunto de las instalaciones militares (en territorio norteamericano y en el extranjero) es el responsable del 40% de las emisiones de GEI del DoD. El combustible Jet representa una parte importante del combustible que usan las fuerzas armadas norteamericanas y, por lo tanto, de las emisiones de GEI. Durante una misión aérea, cada avión suelta centenares de toneladas de CO₂ al aire (sin contar las actividades de apoyo terrestre o naval necesarias para esas misiones aéreas). Las guerras de Estados Unidos en Afganistán e Irak se iniciaron con jornadas de ataques aéreos masivos. En el gráfico 5 podemos ver cómo, a partir de 2001, las emisiones de GEI aumentan de forma muy significativa. También la guerra contra Daesh, tanto en Siria como en Irak, supuso decenas de miles de salidas aéreas (de reconocimiento, recarga de combustible, transporte y ataques propiamente dichos). Un ejemplo de derroche de combustible: el 18 enero de 2017, dos bombarderos B-2, acompañados de aviones de recarga aérea de combustible, llevaron a cabo una misión de 30 horas desde una base aérea de Misuri hasta Libia para lanzar bombas sobre objetivos de Daesh.

2. El Departamento de Energía clasifica las emisiones de GEI en tres categorías: operaciones estándares, operaciones no-estándares y biogénicas. Solo las dos primeras van asociadas al uso de combustibles fósiles. Las emisiones de la tercera categoría representan una cantidad muy pequeña respecto el total y no se tendrán en cuenta. Las operaciones no-estándares incluyen las emisiones de vehículos, barcos, aviones y otros equipos usados en operaciones de apoyo a combate, operaciones tácticas, entrenamiento de este tipo de operaciones, respuestas de emergencia,



vuelos espaciales (incluyendo los equipos de apoyo terrestre asociado) y generación de energía eléctrica. Las operaciones estándares engloban las emisiones del resto de actividades del DoD para llevar a cabo sus funciones y misiones. El Departamento de Energía afirma que el DoD generó entre 2010 y 2017 un total (en operaciones estándares y no-estándares) de 527 millones de toneladas de CO₂ equivalente (CO₂e),³³ una media de unos 66 millones de toneladas anuales. El total para el periodo 2001-2017 fue de 1.212 millones de toneladas de CO₂ equivalente. En cualquiera de estos años, las emisiones del Pentágono superaron las de muchos países pequeños. El año 2017 las emisiones de GEI del DoD llegaron a 59 millones de toneladas de CO₂e, las de Finlandia fueron 55,3 millones de toneladas, las de Suecia 52,6 millones y las de Dinamarca 49,2 millones.³⁴

La guerra global contra el terror iniciada por los Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001 ha contribuido de forma significativa a las emisiones de GEI del DoD. Se estima que esta contribución representa el 35% del total. Para llegar a este resultado se ha tenido en cuenta la proporción de combustible gastado por el *Central Command* (responsable de las operaciones en Afganistán, Irak y Siria) y se ha sumado la parte correspondiente al resto de operaciones contraterroristas que hay en curso, en unos 80-90 países en todo el mundo.

3. Al total de las emisiones GEI asociadas a la guerra y a su preparación, hay que añadir las generadas por la industria militar, un pilar imprescindible del estamento militar. La industria militar norteamericana da trabajo directamente a un 14,7% de los trabajadores del sector industrial de los EE.UU. En base a esto, la contribución a las emisiones GEI de la industria militar de los EE.UU. se podría estimar en un 15% del total emitido por la industria estadounidense. De ahí se puede concluir que la industria de guerra norteamericana emitió unos 2.600 millones de megatoneladas de CO₂e entre 2001 y 2017, una media de 153 millones de toneladas de CO₂e anuales.

4. No está cuantificada la contribución de otras fuentes relevantes de gases de efecto invernadero, como por ejemplo la combustión de petróleo en sabotajes a infraestructuras petroleras, por parte de los diferentes bandos beligerantes. Este tipo de sabotaje ha sido muy frecuente en Irak y Siria. En la ocupación militar de Irak de 2003, los militares iraquíes encendieron pozos de petróleo. En 2014 y en 2015, los Estados Unidos atacaron infraestructuras de petróleo (camiones

cisterna, refinerías, lugares de almacenamiento...) en Irak y en Siria con el objetivo de reducir los ingresos de Daesh (Ferdinando, 2015). Y cuando Daesh se retiró, prendió fuego a pozos de petróleo y oleoductos en ambos países (Hameed, 2015). En muchos casos, esos fuegos quemaron durante meses. A menudo, camiones cisterna de la OTAN han sido atacados y quemados durante el recorrido a través de Pakistán, camino de Afganistán.

Tampoco hay cálculos sobre la energía consumida (y las emisiones generadas) en la reconstrucción después de un conflicto.

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar la repercusión de las guerras en la emergencia climática es la pérdida de la captura actual y futura de carbono a causa de la deforestación. Recordemos los efectos de los bombardeos de napalm en las guerras de Vietnam y de Corea.

En resumen, sumadas las emisiones de CO₂ asociadas a las actividades del DoD (59 millones de toneladas CO₂e) y las asociadas a la producción de armamento (153 millones de toneladas de CO₂e), obtenemos que la actividad militar de los EE.UU. fue responsable de la emisión de 212 millones de toneladas de CO₂e durante el año 2017. Estas emisiones son casi el doble de las emisiones de Bélgica (114 millones de toneladas) o la mitad de las de Francia (471 millones) durante el mismo año.³⁵ Véase en el gráfico 6.

LAS FUERZAS ARMADAS NORTEAMERICANAS SON CONSCIENTES DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

A pesar de que el presidente Trump niega que la crisis climática sea un problema, hace décadas que el estamento militar y la comunidad de inteligencia norteamericanos alertan de las amenazas que la crisis climática puede suponer para la seguridad de su país. Ya el 2015, el documento *National Security Strategy* de la Administración Obama afirmaba: "El cambio climático es una amenaza creciente para nuestra seguridad nacional a causa del incremento de desastres naturales, de flujos de personas refugiadas, de conflictos por el control de recursos básicos como los alimentos y el agua...". Un escenario en que pueden proliferar los conflictos bélicos y en que la disminución de los recursos y, por tanto, de los medios de subsistencia, causarían migraciones masivas. La percepción, por parte de un gobierno, de la emergencia climática como una amenaza a la seguridad de su país, puede provocar una respuesta militar a la supuesta amenaza. Es decir,

33. Emisiones CO₂e (CO₂ equivalente) es el resultado de contabilizar las emisiones de todos los gases de efecto invernadero.

34. Según datos de la OCDE. OECD-Stat, Greenhouse gas emissions. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AIR_GHG# (Última consulta: 4-3-2020)

35. Según datos de la OCDE. OECD-Stat, Greenhouse gas emissions. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AIR_GHG# (Última consulta: 4-3-2020)

MILITARISMO Y CRISIS

NORTE DE ALASKA

ARTICO CANADIENSE

NUEVA ORLEANS

MEXICO

BRASIL

▲ Norte Global

▼ Sur Global

Los 10 principales exportadores de armas (2018)

EUA, Rusia, Francia, Alemania, China, Reino Unido, España, Israel, Italia, Países Bajos.

Los 10 países que acogen los 45 principales agentes mundiales de control corporativo (2011)

EUA, Reino Unido, Francia, Japón, Suiza, Países Bajos, Alemania, China, Canadá, Italia.

11 países que están considerados con mayor riesgo de sufrir crisis humanitarias y desastres naturales a nivel mundial (2020)

Somalia, República Centroafricana, Sudán del Sur, Afganistán, República Democrática del Congo, Chad, Yemen, Níger, Burundi, Camerún y Burkina Faso, y todos ellos se encuentran inmersos actualmente en conflictos armados.

Los 20 países con conflictos armados de tasa alta o mediana (2018)

Libia, Mali, Chad, Somalia, Sudán del Sur, Irak, Siria, Yemen, Afganistán, República Democrática del Congo, Camerún, República Centroafricana, Sudán, Filipinas, India, Pakistán, Turquía, Ucrania.

Los 10 principales países con reservas probadas de petróleo

Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Arabes Unidos, Rusia, Libia, EUA.

Mayor riesgo de crisis humanitarias y desastres naturales a nivel mundial

Somalia, República Centroafricana, Sudán del Sur, Afganistán, República Democrática del Congo, Chad, Yemen, Níger, Burundi, Camerún, Burkina Faso.

Principales rutas migratorias

Muros que dificultan el movimiento migratorio

Principales movimientos migratorios debido al medio ambiente y el clima (2018)

México, Brasil, Artico Ruso, China, India, Bangladés, Burma/Myanmar, Filipinas, Cuerno de África, Asia Central, Zona del Sahel, Mozambique, Islas del Pacífico.

Otras áreas impactadas críticamente por el cambio climático, fuente potencial de migraciones



COSTE DE PREPARAR A LOS PAÍSES MÁS VULNERABLES PARA LOS EFECTOS DE LA CRISIS AMBIENTAL (10 años)

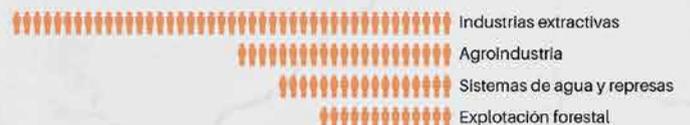
GASTO MILITAR MUNDIAL EN 2018 (1 año)

Situación de las defensoras de los derechos humanos ambientales

Principales países con víctimas defensoras de la tierra y el medio ambiente en 2018:



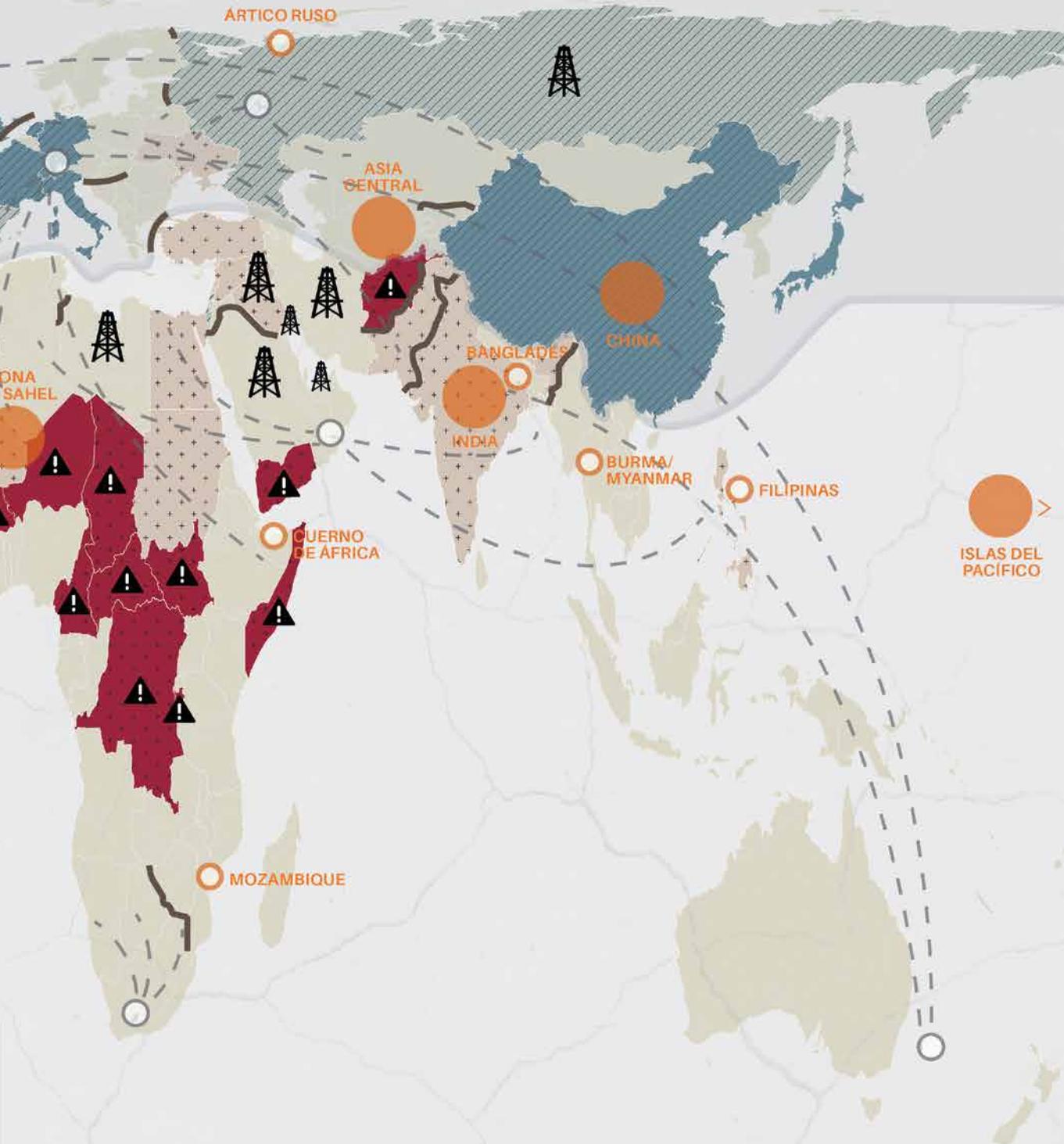
Principales sectores con más víctimas defensoras en 2018:



AMBIENTAL

CENTRE DELÀS
D'ESTUDIS
PER LA PAU

Con el apoyo de:
AMB Àrea Metropolitana
de Barcelona



El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) es el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo

Comparativa de las emisiones de CO₂ del DoD y de la industria militar de EE.UU con el total Estatal de otros países (2017) ▶



HUMVEE DE LA FLOTA DE LA US ARMY

4 litros de combustible diésel para recorrer

6-12 km

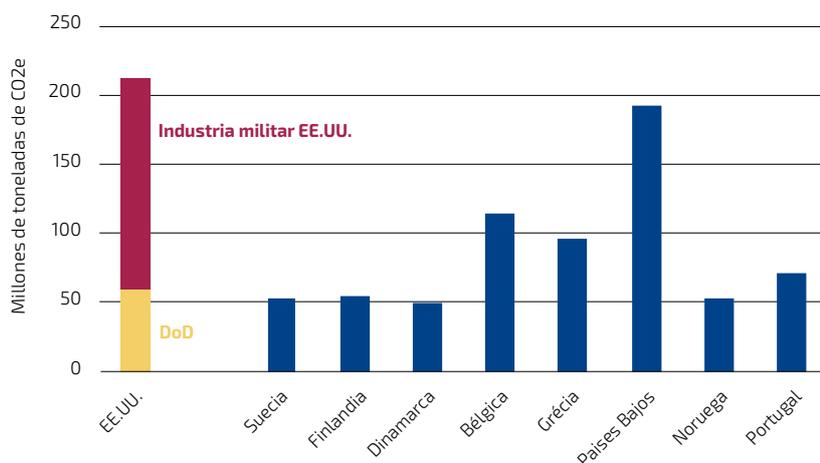


TURISMO MEDIANO

4 litros de combustible diésel para recorrer

100 km

Gráfico 6. Emisiones de CO2e del DoD y de la industria militar de EE.UU. y del total estatal de algunos países (2017)



Elaboración propia a partir de los datos de Crawford, 2019

más inversión en armamento, en instalaciones militares, incremento del número de soldados... Sirva de muestra la creciente presencia militar en la zona del Océano Ártico. La apertura del Ártico como posible vía de tráfico marítimo y como fuente de recursos naturales es la causa de que aquellos países interesados en esos recursos o en la nueva ruta marítima ya estén desplazando efectivos militares como medida tanto de fuerza como de control de aquel territorio.

El estamento militar de todo el mundo ha reconocido que las consecuencias potenciales de la crisis climática son factores multiplicadores de nuevos conflictos y riesgos a los cuales habrá que hacer frente. Si la respuesta a estos nuevos conflictos y riesgos es militar, es previsible que aumente el consumo de combustibles fósiles y, por lo tanto, que aumenten las emisiones de GEI.

ESFUERZOS DEL DOD PARA REDUCIR CONSUMO Y EMISIONES GEI

A pesar de que en mayo de 2018 la Administración Trump eliminó los objetivos de eficiencia energética definidos por la Administración Obama, el DoD mantiene el compromiso de reducción de su consumo de energía, por razones pragmáticas. La tendencia general de los últimos diez años es de una disminución del consumo en las instalaciones del Pentágono, desarrollando instalaciones solares en algunas bases y campamentos y pactando acuerdos de suministro de energías solar y eólica. También se está llevando a cabo una sustitución gradual de ciertos vehículos no tácticos de la flota por modelos híbridos o con combustibles alternativos. El 2017, el DoD gastó 3.500 millones de dólares en calefacción, aire acondicionado y suministro de electricidad a sus instalaciones, por

debajo del gasto del año anterior, de 3.700 millones de dólares.

El Pentágono intenta reducir su dependencia del petróleo, diversificando sus fuentes energéticas. Ha incrementado el uso de energías renovables desde 2009 y ha invertido en generación de renovables, hasta el punto de haber doblado esta producción entre 2011 y 2015. Las fuerzas armadas también han reducido el consumo de fuel, incluso durante las guerras en Afganistán, Irak y Siria. Estas medidas, pero, solo han supuesto un ahorro inferior al 1% de las emisiones GEI del DoD. Todavía hay, pues, un margen enorme para continuar reduciendo emisiones. Curiosamente, esta preocupación por parte del Pentágono coexiste con la posición de la Administración Trump de negar la emergencia climática.

DATOS DISPONIBLES DE OTROS PAÍSES

Hay muy poca información sobre emisiones de GEI de origen militar. Solo se sabe algo de Alemania y del Reino Unido (Fort, 2019).

Emisiones de las fuerzas armadas de Alemania. En el informe de 2018 (*Nachhaltigkeitsbericht 2018 des Bundesministeriums der Verteidigung und der Bundeswehr*), los únicos datos disponibles hacen referencia a la cantidad de energía consumida por el patrimonio militar alemán. A partir de ahí se estima que las emisiones de carbono (2017), solo del patrimonio del Ministerio Federal de Defensa, llegan a la cifra de 1,05 millones de toneladas.

Emisiones de las fuerzas armadas del Reino Unido. Según estimaciones de Stuart Parkinson de la entidad *UK Scientists for Global Responsibility* en el es-

tudio *The Carbon Footprint of the Military*, la suma de las emisiones de GEI (2016-2017) del patrimonio y de las capacidades del Ministerio de Defensa fue de unos 3,2 millones de toneladas de CO₂. Un 40% del total corresponde al patrimonio del Ministerio y un 60% proviene de sus capacidades, equipamiento y operaciones militares. La cifra total es superior a las emisiones de GEI de Islandia.

CONCLUSIONES

Las actividades militares impactan ya hoy en el calentamiento global a causa de la enorme quema de combustibles fósiles. Este calentamiento global potenciará el riesgo de conflictos. La respuesta militarista a estos nuevos conflictos incidirá todavía más en la emergencia climática.

Tanto el estamento militar como la comunidad de inteligencia de los EE.UU. son plenamente conscientes de las repercusiones de la emergencia climática. Ambos sectores perciben estas repercusiones como amenazas a la seguridad nacional, a las que habrá que hacer frente.

El DoD es el primer consumidor institucional de hidrocarburos del mundo. Continuará siéndolo durante años a causa de su dependencia de aviones y barcos de guerra activos en un buen número de operaciones (sin fecha de finalización) y del mantenimiento de sus bases militares en todo el planeta.

Si el Pentágono disminuyera significativamente su dependencia del petróleo, los EE.UU. podrían reducir los recursos militares que destina a defender el acceso al petróleo. Y muy particularmente podrían reducir su presencia militar en el Golfo Pérsico, donde concentran esos esfuerzos. Paradójicamente, una parte importante del petróleo consumido en operaciones en el exterior es la destinada a los barcos y aviones que protegen el acceso al petróleo extranjero y las rutas marítimas de transporte de ese petróleo.

Según un equipo de investigación de Oxford, el gasto mundial en medidas paliativas y de adaptación a la emergencia climática es notablemente menor que el gasto militar mundial. En 2016 el gasto militar fue doce veces mayor que el destinado a la crisis climática (Scanlan, 2019).

Si se estima que la suma de las emisiones de las fuerzas armadas y la industria militar de los EE.UU. es del orden de 212 millones de toneladas de CO₂e anuales, es fácil concluir que, respecto al total mundial de emisiones, la contribución militar es bastante significativa. Toda respuesta digna de lucha contra la emergencia climática deberá incluir necesariamente el desmantelamiento de buena parte de la maquinaria militar.



3. LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

3.1 REFUGIADOS CLIMÁTICOS Y MUROS MILITARIZADOS

Ainhoa Ruiz Benedicto

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)³⁶ ha apuntado en diversos de sus informes, que el cambio climático afecta de forma intensiva a la seguridad humana y a los desplazamientos de población. Algunos autores han establecido cálculos mediante los cuales en el año 1995 ya había 25 millones de personas desplazadas por la fuerza por motivos ambientales, principalmente: sequías, inaccesibilidad alimentaria y escasez de tierra de cultivos (Gemenne, 2011: 42). Sin embargo, según McLeman y Gemenne (2018: 3) no es hasta hace diez años que aparece un serio interés por parte de diversos sectores, políticos, sociales y académicos, por la situación de la migración y el desplazamiento medioambiental; de manera que permite hacerse una idea de lo tarde que ha reaccionado la sociedad en general ante una crisis que ya se estaba cuajando desde hace décadas.

36. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático. Fue creado por el [Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente \(PNUMA\)](#) y la [Organización Meteorológica Mundial \(OMM\)](#) en 1988 para ofrecer al mundo una visión científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas. En el mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas [hizo suya la decisión de la OMM y del PNUMA de crear conjuntamente el IPCC](#).

La preocupación por la materia parece haber aumentado por tres aspectos: primero, por el impacto de la degradación del medio ambiente para el desarrollo del bienestar humano; segundo, por las consecuencias que esta degradación tiene sobre los desplazamientos de personas (MaLeman y Gemenne, 2018: 4); y tercero, por los debates que se abren en materia de seguridad a partir de los años noventa, los cuales empiezan a cuestionar quién debe ser el referente a la seguridad e introducen aspectos como la protección del medio ambiente (McLeman y Gemenne, 2018: 5, Mutimer, 2013, 68-85). Así, la degradación ambiental y las posibles crisis que pudiera desencadenar, entre ellas los desplazamientos forzados, se convierten en creciente objeto de interés.

La situación de crisis climática en la que nos encontramos está conduciendo de manera inevitable a la aparición de una nueva figura de personas desplazadas por la fuerza: los refugiados ambientales, es decir, las personas que sufren desplazamiento forzado por causas relacionadas con el clima (ACNUR, 2020a). En el año 2019, según datos de ACNUR, nos encontramos con un total de 79,5 millones de personas desplazadas, un aumento de más de 9 millones desde el año anterior. En cuanto a los refugiados ambientales, según el *Migration Data Portal*, a finales de 2019 se contabilizaron por lo menos 2.000 desastres relacionados con el clima que generaron 24,9 millones de nuevos desplazados, la figura más alta desde 2012 (Migration Data Portal, 2020) y casi 6 millones más de desplazados por desastres en comparación con los 18,8 millones de 2017. El aumento de personas desplazadas por la fuerza año tras año podría ser

un indicador de que los desastres climáticos suceden cada vez con mayor frecuencia e intensidad.

Cabe destacar que, además, hay que sumar factores que agravan especialmente la situación. Por un lado, los efectos de la crisis climática afectan, de manera transversal a otras vulnerabilidades ya existentes en las poblaciones afectadas (Brown, 2008: 43). Por otro, la degradación medioambiental conduce a una escasez de recursos que genera mayores enfrentamientos entre grupos de población, de manera que se aumenta el posible estallido de conflictos armados (Jiménez y Suescún, 2011: 16; Brown, 2008: 35). En esta línea, por ejemplo, Keyes señala que las sequías vividas en 2011 en Siria podrían haber exacerbado los efectos del conflicto armado (2017: 26). Parece evidente que la transversalidad de la crisis climática con otros factores aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones y conduce a otras nuevas, haciendo que la cuestión de las personas desplazadas climáticas sea difícil de predecir (Brown, 2008: 21-25; Gemenne, 2011: 45). Por tanto, se hace urgente entender, así como tratar de definir y dotar de protección, a estas personas que se desplazan por la fuerza debido a la degradación medioambiental o cuyas vulnerabilidades se ven aumentadas por ella.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM), ha definido a las personas migrantes por motivos ambientales como:

"Persona que, debido principalmente a cambios repentinos o graduales en el medio ambiente que inciden negativamente en su vida o en sus condiciones de vida, se ve obligada a abandonar su lugar de residencia habitual, o decide hacerlo, con carácter temporal o permanente, y se desplaza a otras partes de su país de origen o de residencia habitual, o fuera del mismo" (OIM, 2020).

Sin embargo, aunque existen diversas definiciones sobre refugiado climático o ambiental (Gemenne, 2011: 41), se trata de una figura que todavía no existe en el derecho internacional (ACNUR, 2020b, Brown, 2008: 37) y, por lo tanto, se trata de personas de las que es complicado pedir el estatuto de refugiadas, quedando desprovistas de recibir ayuda y, por tanto, en mayor situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en enero de 2020 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hizo dos reconocimientos importantes: por un lado, que los países no deberían retornar de forma forzada a las personas que se han desplazado por cuestiones climáticas y, por otro, que el cambio climático es una amenaza para el derecho a la vida (Naciones Unidas, 2020). De esta manera, aunque la declaración del Comité de Derechos Humanos no introduce la figura dentro del derecho internacional, supone una respuesta que, aunque lenta y escasa, es

necesaria para poner los derechos de estas personas en la agenda política.

DEGRADACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DESPLAZAMIENTO FORZADO

El Índice de Riesgo Climático Global (IRC)³⁷ (Germanwatch, 2020), realizado por la organización Germanwatch que se publica desde hace 15 años, ofrece datos que cambian mucho la posible percepción que se pueda tener sobre los efectos de la crisis climática y de los desplazamientos forzados que se están produciendo y que seguirán haciéndolo en el futuro. El informe publicado en 2020 remarca, por ejemplo, que algunos países con un Índice de Desarrollo Humano³⁸ de los más altos del mundo, están en el ranking de los más afectados por crisis climáticas en el año 2018, como es el caso de Japón, Alemania y Canadá. Según el IRC publicado en 2020, en 2018 dentro de los diez países más afectados se encontraban Japón, Alemania y la India, dos de ellos con un IDH de los más altos del mundo y los tres debido a olas de calor extremo, entre otros fenómenos relacionados con crisis ambientales (Germanwatch, 2020: 3).

Tabla 4. Diez países más afectados según el Índice de Riesgo Climático Global en 2018

Ranking 2018 País	Personas fallecidas por 100.000 habitantes	Pérdidas en millones de dólares	Índice de Desarrollo Humano
Japón	1,01	35.839	19
Filipinas	0,43	4.547	113
Alemania	1,5	5.038	5
Madagascar	0,27	568	161
India	0,16	37.807	130
Sri Lanka	0,18	3.626	76
Kenia	0,24	708	142
Ruanda	0,73	93	158
Canadá	0,28	2.282	12
Fiji	0,9	118	92

Elaboración propia a partir de Germanwatch (2020) Índice de Riesgo Climático Global. Disponible en https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/20-2-01s%20KRI%202020%20-%20Kurzzusammenfassung_4.pdf, fecha de consulta el 10 de junio de 2020

37. El Índice de Riesgo Climático Global (IRC) de Germanwatch es un análisis basado en uno de los conjuntos de datos más fiables disponibles sobre los impactos de los eventos climáticos extremos y los datos socioeconómicos asociados a ellos. (Germanwatch, 2020: 1)

38. El IDH busca medir el logro medio de un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, los conocimientos y un nivel decente de vida. Se trata de un índice compuesto que contiene tres variables: la esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita (expresado en PPA, Paridad de Poder Adquisitivo). (Dubois, 2005).

En cambio, el mismo índice en 2017 señala que Puerto Rico, Sri Lanka, Dominica, Nepal, Perú y Vietnam fueron los países más afectados. De un año a otro se repiten Sri Lanka y Madagascar, lo que indica que probablemente son países más vulnerables.

De los dos años estudiados (2017 y 2018) del IRC, se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, la variabilidad de los efectos de la crisis climática, ya que afecta a países diferentes año tras año. En segundo lugar, además de constatar que el hecho de sufrir los efectos de la crisis climática en términos de pérdidas de vidas y de economía puede ser independiente del nivel de desarrollo humano, se observa que es posible que sin un IDH alto los efectos sufridos en estos países serían mucho más graves. Esta posibilidad indica la importancia de aplicar políticas que mejoren los Índices de Desarrollo Humano. Con todo y al contrario de lo que se podría pensar, es posible afirmar que los países con un alto nivel de IDH también se verán afectados y, en consecuencia, también serán susceptibles de sufrir desplazamientos forzados. En el siguiente mapa se puede apreciar de qué manera está habiendo países de todo el mundo afectados por los efectos de la degradación del clima.

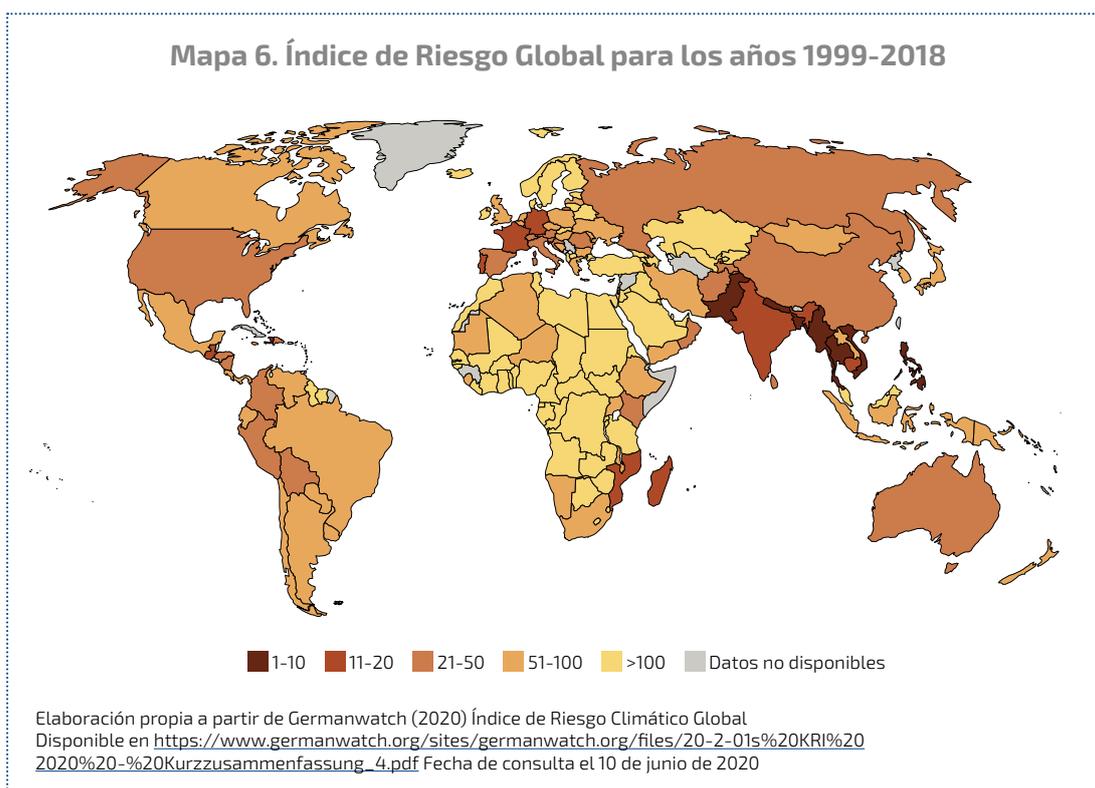
Por último, resulta interesante destacar que, de estos diez países más afectados en 2018, cuatro de ellos (Japón, Alemania, India y Canadá) se encuentran también en el ranking de los 15 países más contaminantes en emisiones de carbono en el mismo año (BBC, 2019). De acuerdo con este ranking, India se coloca en el tercer puesto, Japón en el quinto, Alemania en

el sexto y Canadá en el onceavo. Si las políticas relacionadas con el cambio climático siguen como hasta ahora, Brown señala que los análisis que pronostican migraciones de 200 millones de personas en 2050, se quedarían cortos (2008: 9-10).

MUROS QUE IMPIDEN EL DESPLAZAMIENTO Y AUMENTAN LA VULNERABILIDAD

En la actualidad, existen diversos ejemplos sobre las respuestas que se están dando a las crecientes crisis ambientales, cuya respuesta por parte de las políticas públicas se está viendo progresivamente securitizada. Existe diversa literatura que trata la temática, un ejemplo es el que nos dan los autores del artículo "Un estado de excepción permanente: contingencias civiles, gestión del riesgo y derechos humanos", cuando exponen como Sao Paulo securitizó la escasez de agua en una sequía en 2015, defendiendo las infraestructuras de agua con militares. Los autores critican que la securitización obvia la planificación a largo plazo de lo que está generando diversos problemas relacionados con las crisis ambientales (Mossaddeq, Nafeez y otros, 2016: 132). Otro ejemplo lo encontramos en el caso de los desplazamientos forzados, una de las principales consecuencias de las crisis climáticas y que, desde los años noventa están siendo progresivamente securitizados (Emmers, 2013: 138), con ellos también son securitizados los espacios fronterizos, ya que son los límites creados para controlar el movimiento de personas, para las cuales se despliegan diferentes medidas de control y disrupción del movimiento, como es la construcción de muros

Mapa 6. Índice de Riesgo Global para los años 1999-2018



fronterizos, una política en auge (Vallet y David, 2012: 113). De esta manera, la falta de planificación a largo plazo que denuncian los autores del ejemplo anterior, se replica en diversas consecuencias que tienen que ver con las crisis ambientales, impulsando políticas cortoplacistas e ignorando medidas de prevención.

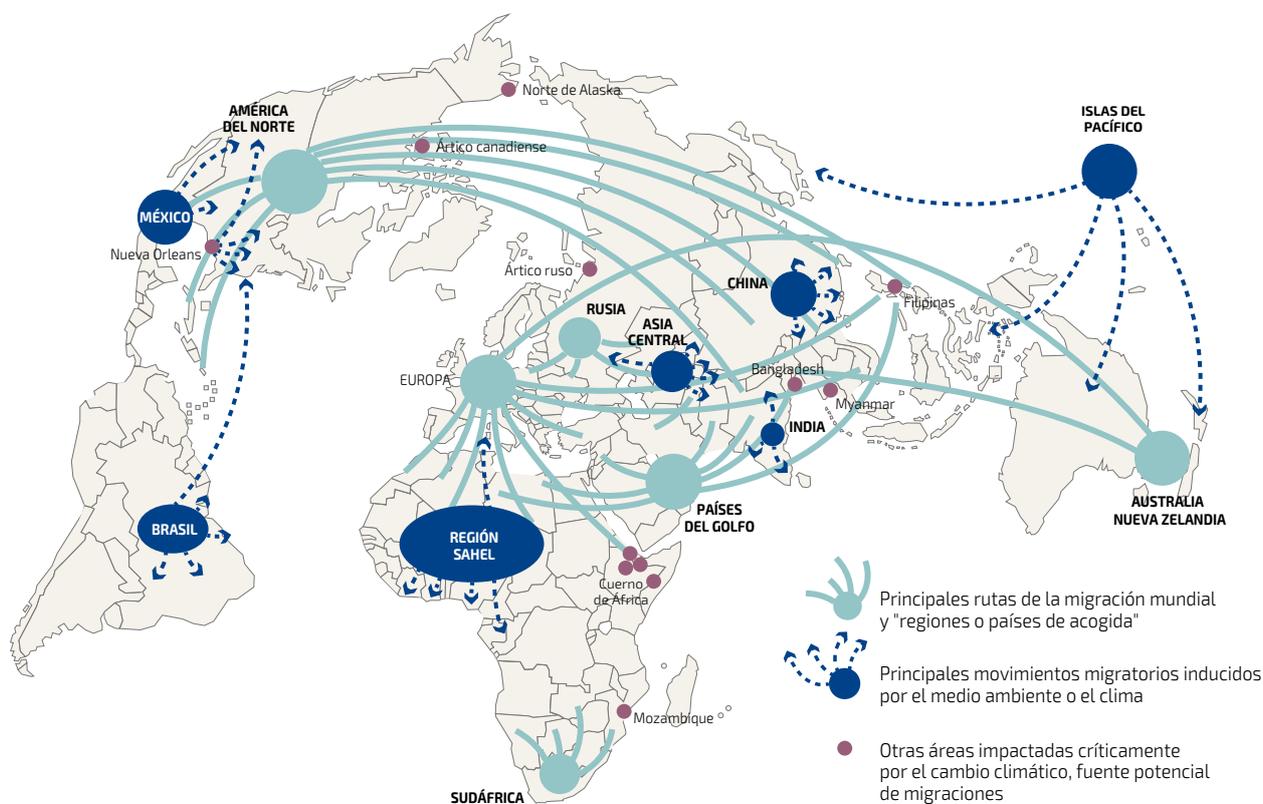
El proceso securitario, que convierte las migraciones en un presunto riesgo y en el que también entran los desplazados ambientales, pretende legitimar que los espacios fronterizos sean tratados como espacios en guerra (Williams, 2016: 28), donde se trasladan técnicas, estrategias y tecnologías militares y policiales (Jones y Johnson, 2016: 196). De esta manera, las fronteras pasan a concebirse como espacios de excepción (Davitti, 2018: 1173; Muller, 2009: 74) donde desplegar medidas de emergencia (Davitti, 2018: 1185; Emmers, 2013: 140), con el fin de detectar, interceptar y expulsar a las personas que huyen de diversos tipos de violencias, entre ellas la violencia ambiental. A este fin, el proceso securitario emplea los métodos de la seguridad militar (Sheehan, 2013: 148), y en los casos que se analizan a continuación, muros altamente militarizados. Se mantienen, por tanto, abordajes de

seguridad militar para tratar una de las consecuencias que genera la crisis climática. El análisis realizado por diversas personas académicas, apunta a que la securitización y militarización de las migraciones está yendo en detrimento de los derechos de las personas que migran y buscan asilo (Leònard, 2010: 231).

En el mapa 7 se analizan las principales rutas migratorias, y se señalan aquellas que serán especialmente utilizadas por las personas que huyen de las crisis climáticas. De esta manera es posible conocer cuáles son, posiblemente, los principales muros que pueden encontrarse las personas que huyen de la degradación ambiental o del aumento de vulnerabilidades derivadas de estas.

El resultado del análisis se expone en la siguiente tabla, para la realización de la cual se han escogido los principales puntos señalados como de mayor riesgo de sufrir los efectos de la degradación ambiental y los desastres naturales, y se han estudiado las posibles rutas escogidas. De esta manera, es posible contar con una aproximación de los muros fronterizos que estas personas pueden encontrar en el camino.

Mapa 7. Principales rutas migratorias



Elaboración propia a partir de Ionesco, Diana, Mokhnacheva, Daria, Gemenne, François (2017): *The Atlas of environmental migration*, Nueva York. Routledge

Tabla 5. Muros fronterizos que interfieren en el desplazamiento por motivos ambientales

Principales zonas en riesgo de afectación por la crisis climática	Países con muros y refuerzos fronterizos que se encontrarán en la ruta
México	Estados Unidos (1) (2)
Brasil	Estados Unidos (1) (2)
Ártico Ruso	Muros de la periferia norte europea: Noruega, Estonia, Letonia, Austria, Bulgaria, Hungría (3)
China	No hay muros relevantes o conocidos contra China
India	Bangladés (4) (5)
Bangladés	India (4) (5), Myanmar (6), Arabia Saudí (7) (8)
Burma/Myanmar	India (9) (10)
Filipinas	Muros de la periferia este europea: Noruega, Estonia, Letonia, Austria, Bulgaria, Hungría, Grecia, Eslovenia. Muros de la ruta de los Balcanes: Macedonia (3). Arabia Saudí (7) (8)
Cuerno de África	Muros de la periferia europea: España, Noruega, Estonia, Letonia, Austria, Bulgaria, Hungría, Grecia, Eslovenia, Reino Unido Países de la ruta de los Balcanes: Macedonia (3)
Asia Central	Pakistán (11) (12), India (4), Kazajistán (13) (14)
Zona del Sahel	Muros de la periferia europea: España, Eslovenia, Austria, Hungría, Estonia, Letonia, Reino Unido (3). Túnez (15) (16)
Mozambique	Sudáfrica (17)
Islas del pacífico	Controles marítimos en aguas internacionales alrededor de Australia (19)

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes:

(1) Jean Guerrero, Leo Castañeda (2017); (2) Arias, Guillermo (2017); (3) Ruiz Ainhoa, Brunet, Pere (2018); (4) Noack, Rick (2014); (5) Das, Shaswati (2017); (6) BBC (2018); (7) TeleSur (2015); (8) Gardner, Frank (2013); (9) Saddiki, Said (2017); (10) Gurfinkiel, Michel (2017); (11) Majeed, Abdul (2017); (12) Gul, Ayaz (2018); Piven, Ben (2014); (14) David Trilling (2010); (15) Nkala, Oskar (2015); (16) Nkala, Oskar (2018); (17) Biger, Gideon (2013); (18) Jones, Reece y otros (2017)

Cabe destacar que, del ranking de los 15 países más contaminantes señalados anteriormente (BBC, 2019), 4 de ellos (Estados Unidos, India, Arabia Saudí y Sudáfrica) han construido muros que interfieren en las rutas migratorias de las personas desplazadas por cuestiones ambientales. Estos muros fronterizos sirven para impedir o interceptar los movimientos de personas, lo que significa que muchas de ellas tendrán que enfrentar la violencia militarizada de los propios muros, o bien alargar las rutas para llegar a los posibles países de destino o acogida. Cuando se alarga el recorrido, se convierte el trayecto en más largo y peligroso y, por tanto, en más costoso, generando a su vez un mayor beneficio para las mafias que trafican con personas.

En consecuencia, el espacio fronterizo se convierte en escenario de violencia con el impacto que eso supone para los derechos humanos de las personas que son desplazadas por la fuerza de sus hogares por cuestiones ambientales o por otros motivos.

Una de las principales conclusiones que se extraen a partir de los datos publicados por el IRC es que to-

dos los países del mundo se verán, en mayor o menor medida, afectados por algún tipo de crisis climática, algo que lleva sucediendo de manera acelerada desde los años noventa. De la misma manera es destacable señalar la necesidad de reforzar los factores que engloban el Índice de Desarrollo Humano para aumentar la resiliencia ante las crisis que vendrán. También se debe apuntar a las responsabilidades de aquellos países más contaminantes cuya falta de previsión conduce a predicciones de un aumento de los desplazamientos forzados que puede superar los 200 millones de personas en 2050. Estos mismos países tienen un papel también relevante a la hora de, por un lado, establecer políticas de reconocimiento y acogida de las personas desplazadas por las crisis climáticas y, por otro, establecer políticas de gestión fronteriza que eliminen la violencia generada por los muros fronterizos. Estos muros están, a su vez, altamente militarizados, y han sido construidos por algunos de los países más contaminantes, aumentando la vulnerabilidad y la violencia sufrida por las personas desplazadas.

3.2 DEFENSORAS DEL MEDIO AMBIENTE Y RESPUESTA REPRESIVA Y MILITARIZADA DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS Y BRAZO PRIVADO

Anna Montull

A pesar de que la sensibilización en torno a la emergencia climática se está extendiendo cada vez más, la protección hacia aquellas personas que defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas sigue siendo una tarea pendiente. En las últimas décadas, la violencia contra las personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales (en adelante, DDHA) ha aumentado significativamente en paralelo a la creciente demanda de extracción y explotación de unos recursos naturales cada vez más escasos y ahogados por una crisis ambiental sin precedentes. En 2012, el informe *Una crisis escondida* de *Global Witness* mostraba, a través de un exhaustivo estudio, como las muertes en relación a la presión extractiva de las tierras estaban aumentando de manera dramática.³⁹ Aunque, como apunta Inclán, no estamos condenados a vivir el capitalismo como un resultado de la historia humana (Inclán, 2018), la lógica de mercado parece haber marcado este destino como única realidad posible.

Dentro de este paradigma, la economía mundial reproduce una imparable relación de causalidad en bucle según la cual cuantos menos recursos disponibles hay, más pugna por su control se desencadena y más respuesta represiva y militarizada ejerce contra aquellas que quieren velar por su protección. Los efectos de estas prácticas tienen una indiscutible dimensión global, pero actualmente quien está sintiendo por todos lados los impactos más notorios del cambio climático y del aumento de la explotación y control por los recursos, son sobre todo poblaciones concretas del Sur Global, quienes a la vez son las que menos responsabilidades históricas tienen sobre este escenario. Según Oliver Courtney, miembro de *Global Witness*, "existen pocos síntomas más rotundos y obvios de la crisis ambiental mundial que el dramático repunte de asesinatos de personas corrientes que defienden los derechos sobre la tierra o el medio ambiente".⁴⁰

39. Global Witness (2012): "Una crisis escondida". Disponible en: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/hidden-crisis/> Global Witness es un referente mundial en cuanto a investigación y campañas pioneras contra los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, así como contra las violaciones de los derechos humanos ambientales y los derechos humanos asociados a estos.

40. Aumenta drásticamente el número de asesinatos por motivos ambientales y de tierras al crecer la presión sobre los recursos del planeta [Comunicado de prensa]. Disponible en: <https://www.globalwitness.org/en/archive/estudio-aumenta-drasticamente-el-numero-de-asesinatos-por-motivos-ambientales-y-de-tierras/>

CONTEXTO Y COMUNIDAD INTERNACIONAL

Históricamente, las DDHA han recibido menos atención que otras defensoras de los DDHH, posiblemente porque los derechos que buscan proteger no están comprendidos de manera adecuada por el Derecho Internacional (Knox, 2017). En su momento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no incluyó explícitamente el Derecho Humano a un medio ambiente saludable porque la negociación y consenso de estos derechos se llevaron a cabo en un momento histórico en el que el movimiento ambientalista moderno aún no había surgido (Knox, 2018). Este hecho desvinculó durante décadas las defensoras del medio ambiente de la lucha por los Derechos Humanos, ya que las organizaciones por los DDHH consideraban que las DDHA defendían temas ajenos a los suyos. Por su parte, las organizaciones específicamente ambientalistas tampoco fueron conscientes de la relevancia de aparecer dentro de las normativas sobre Derechos Humanos ni de la importancia de las instituciones que velan para que se cumplan (Knox, 2017). Sin embargo, en los últimos años diversas organizaciones de la sociedad civil han comenzado a reconocer las DDHA dentro de su lucha y la Comunidad Internacional ha tomado cada vez más conciencia de los riesgos a los que están expuestas estas defensoras.

Naciones Unidas (ONU), a través de la labor de sus relatores, ha observado como las DDHA se encuentran entre los subgrupos de defensoras de Derechos Humanos más vulnerables y, dentro de las DDHA, ha destacado especialmente el riesgo al que están expuestas las comunidades indígenas y las minorías étnicas.⁴¹ En los últimos años, la organización ha traducido esta preocupación en acciones e investigaciones concretas. Por primera vez, el Consejo de Derechos Humanos creó en 2012, un mandato sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente y seleccionó un primer Experto Independiente para examinar las obligaciones contenidas en los Derechos Humanos en relación con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.⁴² Desde su nombramiento, el Relator realizó investigaciones, visitas sobre terreno, consultas regionales e informes con el fin de fortalecer la aplicación de la legislación de los Derechos Humanos en las cuestiones ambientales. En uno de sus informes, el Relator llamaba a la Comunidad Internacional a prestar una mayor atención a los conflictos sociales entre las comunidades locales y las empresas generados ante la creciente competen-

41. ONU, *Comunidades Indígenas entre las más vulnerables: Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas*. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/UNDRIManualForNHRIs_SP.pdf

42. Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SREnvironmentIndex.aspx>

cia por los recursos naturales (Knox, 2018). En 2018, el Consejo de Derechos Humanos aprobó los Principios de Derechos Humanos y Medio Ambiente con la voluntad de suplir el vacío existente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en esta materia.⁴³

El documento recopila la jurisdicción ya existente en ámbito nacional, regional e internacional sobre Derechos Humanos que incluyen cuestiones medioambientales y de protección a las DDHA (derecho a la vida ya la integridad física, a la salud, a no ser objeto de cargos falsos ni detención arbitraria, a la libertad de expresión y acceso a la información, a la libertad de reunión, la libertad de asociación, etc). En 2018 y dando un paso más, el Relator Especial junto con el responsable de la ONU para el Medio Ambiente emitieron una declaración instando a la ONU a reconocer el Derecho Humano a un medio ambiente saludable. Alegando que la interdependencia entre los Derechos Humanos y el medio ambiente se ha vuelto innegable, afirmaron: "creemos que ha llegado el momento histórico de que las Naciones Unidas reconozcan el Derecho Humano a un medio ambiente saludable a nivel global".⁴⁴ Por el momento, este derecho no ha sido incluido a nivel internacional, pero más de cien Estados ya han incluido el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible en sus constituciones o acuerdos regionales. Específicamente en materia de protección de las DDHA, en 2019 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó por unanimidad un proyecto de resolución para la protección de los DDHA.⁴⁵ El documento reconoce los altos riesgos que sufren estas defensoras, expone la responsabilidad de las empresas y hace un llamamiento a los Estados para que proporcionen un entorno seguro y propicio para que las DDHA puedan desarrollar su actividad con garantías y sin represalias. También en 2018, los países de América Latina y el Caribe manifestaron su apoyo al Acuerdo de Escazú, un tratado legalmente vinculante que se desarrolló en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).⁴⁶ Otros organismos regionales también han dado pasos en esta materia, pero aún no se ha normativizado a nivel global como se ha hecho con los derechos humanos hasta ahora reconocidos.

43. Informe 2016 del Relator, donde advierte sobre el peligro del conflicto entre corporaciones y defensoras. Disponible en: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/principios-marco-sobre-derechos-humanos-y-medio-ambiente/

44. Declaración conjunta del responsable de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Erik Solheim, y del Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, John H. Knox, instando a las Naciones Unidas a reconocer el derecho humano a un medio ambiente saludable (2018): <https://acnudh.org/es-hora-de-que-todos-reconozcamos-el-derecho-humano-a-un-medio-ambiente-saludable-dia-mundial-del-medio-ambiente/>

45. Resolución 40 / L.22 del CDH de Naciones Unidas. Disponible en: <https://undocs.org/es/A/HRC/40/L.22/Rev.1>

46. Front Line Defenders (2019): Análisis Global. Disponible en: https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/spanish_-_global_analysis_2019_web.pdf

La activación de la movilización internacional en este ámbito no habría sido posible sin el importante trabajo de investigación, mapeo y recopilación de datos de organizaciones como *Global Witness*, *Front Line Defenders* o Artículo 21, entre muchas otras. Sin embargo, ni la presión de la sociedad civil ni el eco en la Comunidad Internacional han logrado frenar los cada vez más virulentos episodios de violencia. Según el Análisis Global 2018 de *Front Line Defenders*, las defensoras que trabajan en temas de medio ambiente tienen tres veces más probabilidades de sufrir ataques en comparación con otras defensoras de los DDHH: del total de asesinatos de defensoras de los DDHH registrados a nivel mundial el 2018 (321 muertos), el 77% eran DDHA, en su mayoría vinculadas a conflictos derivados de la actividad de industrias extractivas y de macroproyectos que contaban con el apoyo de los Estados. Por su parte, *Global Witness* ha calculado que en 2018 hubo una media de más de tres asesinatos de DDHA a la semana. El mismo Foro Económico Mundial publicó un informe en 2017 en el que situaba la violencia perpetrada por las corporaciones contra las comunidades más vulnerables como uno de los diez principales riesgos mundiales.⁴⁷ El informe advertía que la disminución de la capacidad de gobernanza nacional, junto con el incremento de poder de las corporaciones multinacionales, representan una amenaza para la paz y la estabilidad mundial.

En este sentido, diversas investigaciones han comprobado como los agentes estatales están vinculados a las diversas formas de represión contra las DDHA, ya sea como cómplices o como participantes directos. Los diferentes informes anuales de *Global Witness*, por ejemplo, muestran cómo los agentes gubernamentales han estado implicados en actos de coacción y violencia contra DDHA en casi todos los Estados latinoamericanos. Así, los bandos en la guerra del expolio no responden tanto a la geografía política de los Estados sino a una geografía de poder (por clase, etnia, género, entre otros), poniendo de manifiesto cómo, a remolque de una reconfiguración global del orden estatal, los agentes perpetradores de las violencias se mezclan en zonas de indistinción entre gobierno y administración, legalidad e ilegalidad, brazo público y brazo privado, etc, en un proceso de mimesis delin cuencial y mimesis estatal (Inclán, 2018).

QUIÉNES SON DDHA

Las defensoras de los DDHA son individuos o grupos que "se esfuerzan por proteger y promover derechos

47. Foro Económico Mundial (2016). Riesgos Globales 2016. Citado en: <https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2018/in-defense-of-nature-women-at-the-forefront.html>

humanos relacionados con el medio ambiente".⁴⁸ Tienen en común, por tanto, que de manera directa o indirecta trabajan para proteger un medio ambiente del que dependen una gran cantidad de Derechos Humanos. Aunque puedan provenir de geografías, contextos y profesiones muy diversas, muchas de ellas son "personas normales y corrientes que viven en pequeñas aldeas, bosques o montañas remotas, que pueden incluso no ser conscientes de estar actuando como defensoras de los derechos humanos ambientales."⁴⁹ Estas personas forman parte de comunidades que muchas veces viven en situaciones de riesgo en medio de entornos aislados, contaminados y en proceso de degradación, a quienes se ha vetado del disfrute de muchos derechos debido a la explotación no sostenible de los recursos a las tierras que habitan.

Como ya hemos visto, hasta hace pocos años la figura de la DDHA se había mantenido fuera de foco. Su visibilización y la toma de conciencia de la peligrosidad que enfrentan estos grupos cada vez es mayor, pero la marginalización social y geográfica que muchos de ellos sufren dentro de sus propios países contribuye a perpetrar la violencia, el silencio y la impunidad. Como señala el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos: "Una de las causas sistémicas de los conflictos en torno a los Derechos Ambientales es el desequilibrio de poder entre los Estados, las empresas y las defensoras de los Derechos Humanos Ambientales".⁵⁰

Esta relación de poder corre el peligro de convertirse en aún más asimétrica si consideramos que el complejo estatal-privado tiene los instrumentos para practicar un racismo estructural y cultural que desprestigia y desempodera aún más a sus adversarios, legitimando su criminalización y la vulneración de sus derechos.

Los pueblos indígenas son los más afectados por la violencia ejercida contra las DDHA por varias razones: el hecho de que los recursos explotados estén en territorios que habitan; la falta de protección jurídica, ya que muchas comunidades indígenas no tienen el registro de propiedad de sus tierras, el reducido acceso a la justicia, el racismo y marginación institucional, etc. Todos estos factores facilitan la victoria del relato de los poderes y la disposición del marco necesario para criminalizarlos y para garantizar la impunidad

de sus atacantes. Los pueblos indígenas poseen más del 50% de las tierras del mundo por derechos ancestrales, pero sólo el 10% de estas son legalmente reconocidas, lo que permite decretarlas como ilegales en favor de los intereses económicos y facilitar procesos de criminalización o expulsiones forzadas.⁵¹ Según el Derecho Internacional, estos pueblos deben ser consultados cada vez que se quiere emprender una actividad económica en sus tierras: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas a las decisiones que les afectan. Concretamente, en el artículo 6, se especifica que las comunidades indígenas y tribales deben ser consultadas mediante procedimientos adecuados, de buena fe y a través de instituciones representativas, sobre las medidas que se propongan; y en el artículo 15, se exige a los gobiernos establecer procedimientos para consultar a los pueblos indígenas antes de emprender o autorizar cualquier actividad de prospección o explotación de recursos naturales que afecte a sus tierras.⁵² También la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) contempla el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones en aquellas materias que afecten a sus derechos, así como también reconoce el deber de los Estados a consultar y cooperar de buena fe con estos pueblos con tal de obtener su consentimiento libre antes de aplicar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles.⁵³ No obstante, como en 2019 recordaba Victoria Tauli-Corpuz –Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas – en la 18ª sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas: "las actividades extractivas dentro de las tierras y territorios de los pueblos indígenas llevadas a cabo sin la consulta o el consentimiento adecuados son la principal fuente de violaciones graves de sus derechos humanos, incluida la violencia, la criminalización y el desplazamiento forzado".⁵⁴

CAPAS DE REPRESIÓN Y VIOLENCIA

Las DDHA son víctimas de una violencia estructural, cultural y directa sistemática que, según han podido documentar Relatores de la ONU y varias organizaciones de la sociedad civil, es llevada a cabo tanto por

48. Naciones Unidas, Asamblea General (2016): Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Documento A/71/281, párrafo 7. Disponible en: <https://undocs.org/es/A/71/281>

49. Frost, M (2016). Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, UN Doc. UN Doc. A/71/281 par. 7 (3 de agosto de 2016). Disponible en: <https://undocs.org/es/A/71/281>

50. Naciones Unidas, Asamblea General (2016): Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Documento A/71/281. Disponible en: <https://undocs.org/es/A/71/281>

51. Global Witness (2019): Informe "¿Enemigos del Estado?". Disponible en: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/>

52. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0:NO:12100:P12100_ILO_CODE:C169

53. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Disponible en: https://www.un.org/development/desa/indigenouseoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_S_web.pdf

54. 18ª sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas (2019). Disponible en: <http://unsr.vtaulicorpuz.org/?p=2718>

actores e instrumentos públicos (agentes políticos, cuerpos de seguridad, leyes, tribunales) como privados (sicarios, bandas criminales, terratenientes), ambos brazos usualmente aliados directa o indirectamente, anulando así las garantías propias de un Estado de Derecho.

Los asesinatos son la máxima expresión de los ataques que sufren las DDHA, pero existe un amplio abanico de formas de represión no mortales que muchas veces quedan invisibilizadas y silenciadas por la dificultad de monitorearlas. En esta línea, el Relator Especial sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos ha observado que el asesinato de defensoras de los Derechos Humanos ambientales sólo es parte de la violencia generalizada a la que se enfrentan; las comunicaciones que ha recibido muestran que "las defensoras de los DDHA afrontan numerosas amenazas y violaciones, incluyendo ataques violentos y amenazas a sus familias, desapariciones forzadas, vigilancia ilícita, prohibiciones de viajar, chantaje, acoso sexual, acoso judicial y uso de la fuerza para disipar protestas pacíficas" (Knox, 2017). Otras fórmulas utilizadas son las campañas de desprestigio alimentadas por discursos racistas y discriminatorios que legitiman y normalizan prácticas de vigilancia y persecuciones ilegales, *hackeos*, órdenes de captura, procesos judiciales irregulares o criminalización a través de leyes antiterroristas.

América Latina es la región del mundo en la que se han documentado más violaciones de los derechos humanos y acciones represivas de todo tipo por parte de las instituciones estatales contra las DDHA –seguida de Asia, con Filipinas al frente–. La convulsión de la triple crisis política, socioeconómica y ambiental, cobijada por el modelo neoliberal extractivo, ha priorizado los intereses de los inversores extranjeros y de las élites nacionales, alimentando la corrupción y la impunidad. En los últimos años, en la mayor parte de países de América Latina se ha observado un giro hacia el autoritarismo acompañado de un incremento de la privatización de servicios públicos básicos, una flexibilización de las legislaciones ambientales y la creación de nuevas leyes para debilitar el activismo por los Derechos Humanos.⁵⁵

Capa 1 - La construcción del relato dominante

La seguridad nacional ha sido el gran paraguas que ha servido para legitimar medidas excepcionales y convertirlas en la norma. Haciendo uso de este marco narrativo, se está justificando la anulación de derechos y libertades y el uso de la fuerza. Según *Freedom House*,

55. *Front Line Defenders* (2019). Informe "Dispatches". Disponible en: <https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/dispatches-2019>

2018 fue el decimotercer año consecutivo en experimentar una reducción de las libertades a nivel global.⁵⁶ También el informe de CIVICUS apunta que ese mismo año la mayor parte de países estaban experimentando "serios problemas sistémicos en relación con el espacio cívico" (Civics, 2018). En este contexto, cada vez se está extendiendo más el uso de la retórica de la seguridad nacional como pretexto para criminalizar las DDHA. Cada vez se normalizan más los discursos del poder que las acusan de "antipatriotas", "enemigas del desarrollo", "mafiosas", "criminales" o "terroristas". Este relato de odio se utiliza para intentar reducir las bases de apoyo de las DDHA, ganar la opinión pública y poder así justificar los procesos de criminalización y prácticas propias del paradigma de la seguridad militar. En 2018, Vicky Tauli-Corpuz –Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU–, fue incluida en la lista de "terroristas" por el gobierno filipino por haber denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas por la administración.⁵⁷ Este caso concreto describe un agravio contra una figura pública y con influencia, pero la mayor parte de acusaciones se articulan contra grupos sociales vulnerables y minoritarios, apartados del poder, lo cual establece una gran barrera para difundir un contrarelativo fuerte. Como observa Inclán, "la semántica de la violencia no es impersonal, responde a relaciones de poder y repartos desiguales de las capacidades enunciativas" (Inclán, 2015: 21).

Dentro de esta lógica, los medios de comunicación convencionales o públicos sirven de altavoz del Estado y de los intereses económicos, mientras que cualquier disidencia periodística suele ser silenciada o condenada. Amnistía Internacional apunta que estos medios "estigmatizan estas actividades –las de las DDHA– para eliminar la práctica el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo en los sistemas de justicia estatales" (Amnistía internacional, 2015). Asimismo, ya en 2010 Reporteros sin Fronteras identificó la deforestación y la contaminación como temas de alto riesgo para ser tratados en los medios y reconoció como causa del problema la "convivencia entre los industriales (productos forestales, empresas mineras, etc) y las comunidades locales".⁵⁸ Se han recogido muchas experiencias de periodistas que, tras denunciar casos de violencia en el ámbito medioambiental, han sido amenazados de demanda por calumnia, censurados y castigados. Un ejemplo

56. Freedom House (2019). Informe "Democracy in Retreat". Disponible en: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/democracy-in-retreat>

57. Global Witness (2019). Informe "¿Enemigos del Estado?". Disponible en: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/>

58. Brossel V., Reporteros sin Fronteras (2010). Unas Investigaciones de Alto Riesgo: Desforestación y Contaminaciones, Informe de Investigación Sobre periodismo y Ambiente. Disponible en: <https://www.rsf-es.org/informes-investigaciones-de-alto-riesgo-deforestacion-y-contaminaciones/>

es el caso del cineasta franco-español José Huerta, el cual fue acusado de un delito de difamación porque un documental suyo mostraba los impactos ambientales de un proyecto austríaco de inversión turística de gran escala en Ecuador. De hecho, de 2013 a 2016 en el país ecuatoriano se impusieron 118 sanciones penales contra periodistas y medios, indicador de dudosas garantías de libertad de prensa.⁵⁹

Capa 2 - la criminalización

La represión del relato de las DDHA lleva a la legitimación de la represión de los cuerpos. Los gobiernos y corporaciones utilizan habitualmente la legislación, los tribunales, los sistemas judiciales y los medios de comunicación como instrumentos de opresión e intimidación contra las DDHA, y es que no pasa desapercibido que la violencia contra las defensoras no podría seguir impune sin un apoyo legal y judicial detrás para poderse llevar a cabo sin represalias. La criminalización puede tomar diferentes formas: calumnias y estigmatización pública, modificación o reinterpretación de leyes para ilegalizar actividades, imputación de cargos falsos, órdenes de captura, procesos judiciales irregulares, etc. De hecho, la fuerza que está tomando a nivel global la criminalización contra las DDHA llevó a que por primera vez *Global Witness* le dedicara un apartado específico en su informe de 2018, en el que identificaba el proceso en cinco etapas: campañas de desprestigio, cargos criminales, órdenes de captura, procesos con irregularidades y criminalización masiva.

El uso indebido y desproporcionado de la legislación antiterrorista se ha identificado como gran motivo de preocupación por parte de la sociedad civil y de observadores internacionales. Las DDHA son amenazadas de manera sistemática con leyes de Seguridad Nacional y Antiterroristas para implantarles el miedo y conseguir frenar su activismo (negándoles derechos como los de asociación, manifestación, libertad de expresión o acceso a la información y difusión). Por ejemplo, Chile, El Salvador y Perú han recibido fuertes críticas por el uso indebido de leyes antiterroristas aplicadas contra DDHA. En 2010 y como respuesta a condenas judiciales contra miembros de una comunidad Mapuche en Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el país en cuestión violaba varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre los cuales se encontraban los principios de legalidad, responsabilidad penal individual y presunción de inocencia, el derecho a la igualdad ante la ley y a

no sufrir discriminación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a un juicio imparcial. En 2014, la Corte obligó al gobierno chileno a indemnizar las víctimas mapuches por los daños causados. En El Salvador, el gobierno presentó cargos de terrorismo contra 14 personas por haber participado en una manifestación contra la privatización del sistema nacional de abastecimiento de agua, amparándose en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo de 2006. En el caso peruano, también las leyes antiterroristas promulgadas en 1992 han dado lugar a múltiples juicios injustos contra DDHA.⁶⁰

Los sistemas judiciales funcionan como arma de doble filo: se utilizan para acusar de criminales o terroristas a los grupos que interesan al poder estatal y brazo privado mientras permiten que los perpetradores de las violencias contra estos grupos anden libres y sin cargos. Ya en 2002, Amnistía Internacional denunciaba en un informe casos de cientos de presos políticos que habían sido acusados de traición y juzgados ante tribunales militares.⁶¹ Los casos son múltiples y en la actualidad siguen produciéndose. En cuanto a los pronósticos de futuro a corto plazo, *Global Witness* lamenta que:

a medida que entren en vigencia leyes draconianas introducidas en 2018 en distintas partes del mundo, el problema podría empeorar,

ya que

la tolerancia de las autoridades hacia la protesta pacífica se está deteriorando rápidamente [...] incluso en democracias supuestamente más consolidadas.

Capa 3 - la violencia directa

Hay múltiples formas de violencia directa que incluyen represalias a la integridad física de las DDHA, tales como agresiones, amenazas de muerte, violencia sexual o secuestro, entre otras. Éstas ocurren con mucha más frecuencia que los asesinatos, pero hacer su rastreo completo es difícil por los motivos ya expuestos anteriormente. Es importante resaltar que aparentemente la mayoría de víctimas asesinadas habían denunciado previamente amenazas y diversas formas de intimidación reiteradas, lo que demuestra la dejadez de las instituciones para poner las medidas de protección necesarias y, por lo tanto, la facilitación de las condiciones óptimas para que se sigan perpetrando asesinatos.

59. Article 21 (2016). Informe "Un verde Mortal. Amenazas contra las Defensoras y Defensores de los Derechos". Disponible en: https://www.article19.org/data/files/ESPANOL_Deadly_shade_of_green_A5_72pp_report_hires_PAGES_PDF.pdf

60. Artículo 21 (2016): Informe "Un verde Mortal. Amenazas contra las Defensoras y Defensores de los Derechos". Disponible en: https://www.article19.org/data/files/ESPANOL_Deadly_shade_of_green_A5_72pp_report_hires_PAGES_PDF.pdf
61. Amnistía Internacional (2002). Informe anual 2002. Disponible en: <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1000012002ENGLISH.pdf>

Según el informe "Deadly Environment" (Global Witness, 2013), de 2002 a 2013 se registraron 908 asesinatos a defensoras ambientales, principalmente en Latinoamérica y en Asia-Pacífico y en relación con disputas por la tala industrial, la minería y los derechos sobre la tierra. También en el caso de los asesinatos, aunque estén más monitoreados y se trate de una forma de violencia más clara, se calcula que las cifras reales son muy superiores. De nuevo, la falta de transparencia y voluntad política de las instituciones, la dificultad de acceso a la información, las matanzas en lugares aislados, las amenazas, etc. pueden ocasionar que muchas muertes no se lleguen a conocer.

Con respecto a los últimos años, en 2018 se asesinaron a una media de más de tres DDHA por semana que ejercían la lucha no violenta principalmente contra prácticas de la industria minera, explotación forestal y la agroindustria. En total, 164 defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinadas, con Filipinas al frente del ranking (30) seguida por Colombia (24), India (23) y Brasil (20). América Latina se mantuvo como región más mortífera, dato que se explica por la fuerte tradición activista por los DDHA que hay en el territorio. Por su parte, grupos indígenas fueron los que estuvieron en primera línea de los ataques, una variable que también se mantiene constante respecto a los años precedentes. Como ya se ha apuntado, este dato puede vincularse con la imposición por parte de gobierno y empresas de macro proyectos extractivos en zonas habitadas por poblaciones indígenas sin su consentimiento libre e informado. Analizando los asesinatos por sectores, el activismo derivado de la protesta contra la minería e industrias extractivas se situó a la cabeza (43), seguida de la agroindustria (21), los sistemas de agua y represas (17) y la explotación forestal (13). En cuanto a los perpetradores, se ha podido vincular a las fuerzas de seguridad del Estado al menos en 40 de los 164 asesinados, y a actores privados, bandas criminales y terratenientes en 40 casos más.⁶²

El año 2017, por su parte, fue el más mortífero de todos los años registrados, con 201 asesinatos perpetrados, es decir, una media de casi cuatro a la semana. Más de la mitad de estos asesinatos ocurrieron en sólo tres países: Brasil (23%), Colombia (18%) y Filipinas (14%), y América Latina aglutinó el 60% del total de asesinatos. La agroindustria fue el sector más sanginario, acumulando al menos 46 de los asesinados registrados. En cuanto al género de las víctimas, alrededor del 10% de muertes fueron cometidas contra mujeres, la mayoría indígenas, cifra reducida pero que está experimentando un crecimiento año tras año. Del total de muertes, las fuerzas de seguridad estatales

se pudieron vincular con 53 casos, mientras que los actores no estatales, con 90 casos.⁶³

Tabla 6. Asesinatos de DDHA vinculados a las fuerzas estatales

Año	Total asesinatos	Asesinatos vinculados a fuerzas estatales * que se hayan podido comprobar
2018	164	40
2017	201	53
2016	200	43

Realización propia a partir de los datos de los informes anuales de Global Witness.

Los datos muestran de forma contundente cómo los Estados no sólo participan en la violencia contra DDHA a través del consentimiento o práctica de formas de criminalización o agresión física, sino también a través de asesinatos. Este hecho es clave para entender la magnitud de la impunidad en este conflicto. La participación directa o indirecta del Estado lleva a que éste omita la judicialización y la condena de los perpetradores. En esta línea, el informe "Deadly Environment" recogió que de 2002 a 2013 sólo se juzgaron y condenaron 10 perpetradores del total de 908 asesinatos documentados, es decir, alrededor del 1% del total de asesinatos. Así, el 99% de responsables restantes quedaban impunes.⁶⁴

CASO DE ESTUDIO: BRASIL

Brasil es uno de los focos más importantes de represión y respuesta militarizada contra activistas ambientales, situándose durante años al frente del ranking de asesinatos de DDHA a nivel global. Sólo en este país se registraron 477 muertes entre 2002 y 2014, dato que no se puede desvincular de las intensivas actividades de explotación que se han practicado en el Amazonas. La expansión agrícola por los monocultivos industriales, la creación descontrolada de pastos para la ganadería, la minería, la explotación forestal industrial mayoritariamente ilegal y los macro proyectos de infraestructura (centrales hidroeléctricas, represas, oleoductos, etc.) son las grandes amenazas que afrontan la Amazonia brasileña y las comunidades que la habitan. Según un informe de *World Resources Institute*, Brasil perdió el 10% de sus bosques entre 2000 y 2017.⁶⁵ Por su parte,

62. Datos del informe anual de Global Witness 2019: https://www.globalwitness.org/documents/19900/Annual_Report_2019.pdf

63. Datos del informe anual de Global Witness 2018: https://www.globalwitness.org/documents/19720/2018_GW_Annual_report_Digital.pdf

64. Global Witness (2013). Informe "Deadly Environment. A rising death toll on our environmental frontiers is escaping International attention". Disponible en: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/deadly-environment/>

65. María José Peláez, "Los 5 países más peligrosos para ser defensor del medio ambiente". Sostenibilidad, Semana.com. Disponible en: <http://especiales.sostenibilidad.semana.com/informe-lideres-ambientales-global-witness/los-5-paises-mas-peligrosos.html>

Greenpeace denuncia que desde 1970 todo el Amazonas ha perdido una superficie forestal mayor que el equivalente a toda Francia, con la industria ganadera como responsable principal.⁶⁶

Durante los más de cuatro decenios de proyectos masivos de explotación, las multinacionales y los diferentes gobiernos han ejercido de manera reiterada la vulneración de los derechos de las comunidades que habitaban las tierras amazónicas. Amenazas de demanda por calumnia, detenciones arbitrarias con cargos falsos, desplazamientos forzados, ataques violentos o desapariciones forzadas son acciones violentas sistematizadas. En 2006, Hina Jilani –entonces Representante Especial del Secretariado General de la ONU sobre la cuestión de las defensoras de los DDHH– manifestó su preocupación por los frecuentes asesinatos, atentados contra la vida y amenazas contra las defensoras en Brasil.⁶⁷ Según sus observaciones, en la mayor parte de casos, las DDHA eran asesinadas por hombres armados a sueldo o milicias privadas que actuaban por encargo de terratenientes con poder. Casi diez años más tarde, en un informe de 2015, el Relator Especial de la ONU expuso su preocupación por el país brasileño en relación al uso de fuerza excesiva contra protestas pacíficas, interferencia con la libertad de expresión y de asociación y uso excesivo de la violencia y de detenciones arbitrarias en protestas pacíficas, entre otros (Frost, 2015). También expresaba preocupación por proyectos de ley sobre terrorismo que, en caso de adoptarse, contravendrían las leyes y normas internacionales de DDHH y podrían restringir el derecho de la libertad de reunión pacífica y la libertad de opinión y de expresión. En relación a determinados casos específicos, el Relator Especial expresaba su preocupación por el abuso de poder y autoridad ejercido por la policía para intimidar y disuadir a las víctimas de recurrir a la justicia.

En 2018 fue el primer año en que Brasil no se situó en la primera posición en cuanto a asesinatos de DDHA, pero las políticas y amenazas reiteradas del presidente Jair Bolsonaro contra el medio ambiente y las DDHA hace pensar que los asesinatos se podrían volver a disparar. Esta persecución se remonta a su momento como diputado federal, cuando declaró que quería clasificar el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) como organización terrorista. Un ejemplo trágico de las consecuencias de esta retórica fue el asesinato del miembro del MST Luis Ferreira da Costa durante una protesta pacífica. Bolsonaro tam-

bién afirmó que "pueden estar seguros de que si llego a la presidencia no habrá dinero para las ONGs. Esta gente inútil deberá ponerse a trabajar"⁶⁸ y prometió que no habría ni un centímetro más de tierra indígena protegida bajo su liderazgo. Efectivamente, en una de sus primeras decisiones como presidente, Bolsonaro sacó las competencias de demarcación y regulación de los territorios indígenas al Departamento de Asuntos Indígenas (FUNAI) para concedérselas al Ministerio de Agricultura.⁶⁹ Esta decisión política aún no se ha traducido en ley vinculante ya que el Partido Socialista Brasileño (PSB) presentó una impugnación al Supremo Tribunal Federal y éste todavía debe pronunciarse, pero en todo caso muestra una clara declaración de intenciones. Desde su toma de posesión, Bolsonaro ha detenido las ayudas a las ONGs que trabajaban por el medio ambiente y los derechos humanos y también ha prometido entregar las reservas naturales y zonas protegidas a proyectos de agricultura, minería e infraestructura, decisión que implicaría que el 13% del territorio nacional que pertenece a las comunidades nativas pasaría a manos de empresas extranjeras.⁷⁰ *Global Witness* señaló que esta declaración alentó a usurpadores de tierras armados a protagonizar una serie de invasiones en tierras indígenas.⁷¹

El presidente también ha criminalizado a las DDHA de manera pública en reiteradas ocasiones. Cuando tuvo lugar el devastador incendio en el Amazonas en 2018, Bolsonaro atribuyó el fuego a las DDHA y ONGs ambientalistas alegando un intento de dañar la reputación de su gobierno: "Puede haber una acción criminal de estos 'oenegeros' para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil, y esta es la guerra que nosotros enfrentamos".⁷²

En medio de la crisis sanitaria del COVID-19 de 2020, Bolsonaro emitió el Decreto de Garantía de Ley y Orden Público en el que ordenaba a las Fuerzas Armadas custodiar la Amazonia bajo pretexto de combatir las actividades de explotación ilegales de tala de árboles y minería. En uno de los artículos del Decreto específica que "las agencias federales y entidades públicas de

66. Greenpeace, Bosques Amazonas. Disponible en: <https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/bosques/amazonas/>

67. Jilani, H. Representant Especial del Secretariat General, Consell de Drets Humans de la ONU (2006). Informe sobre la situació de les defensores dels DDHH al Brasil. Doc: ONU A/HRC/4/37/Add.2, paràgraf.15. Disponible a: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/4/37/Add.2&referer=http://www.un.org/en/documents/index.html&Lang=5

68. Jean Kaiser, A. (17 de enero de 2019). "El gobierno de Bolsonaro declara la guerra a las ONG de medio ambiente". Eldiario.es. Disponible en: https://www.eldiario.es/theguardian/ministro-Medio-Ambiente-Brasil-ONG_0_858114719.html

69. Riesco Pérez, S (2 de enero de 2019): "Bolsonaro transfiere al Ministerio de Agricultura la demarcación de tierras indígenas". RTVE. Disponible a: <https://www.rtve.es/noticias/20190102/bolsonaro-transfiere-ministerio-agricultura-demarcacion-tierras-indigenas/1862440.shtml>

70. María José Peláez: "Los 5 países más peligrosos para ser defensor del medio ambiente". Sostenibilidad, Semana.com. Disponible en: <http://especiales.sostenibilidad.semana.com/informe-lideres-ambientales-global-witness/los-5-paises-mas-peligrosos.html>

71. Global Witness (2019): Informe "¿Enemigos del Estado?". Disponible en: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/>

72. EFE, Brasilia (22 de agosto de 2019). "La Amazonia está en llamas y Bolsonaro insinúa que la culpa es de las ONG". Eldiario.es. Disponible en: https://www.eldiario.es/internacional/Amazonia-llamas-Bolsonaro-insinua-ONG_0_934056666.html

protección ambiental [...] serán coordinadas por Comandos" de las fuerzas armadas.⁷³ En otras palabras, dio el poder y autoridad al ejército para dejar en posición de subordinación a las agencias ambientales de la región.⁷⁴ El decreto, inicialmente válido hasta junio de 2020, se ha prorrogado hasta julio y no es descartable que siga alargándose. Conociendo sus precedentes en materia medioambiental, esta decisión ha despertado muchas dudas sobre los propósitos reales, y más escuchando declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien informó en una reunión ministerial celebrada en abril que la pandemia era una oportunidad para relajar la legislación y "hacer pasar todo el ganado" –refiriéndose a derribar el máximo de leyes medioambientales posibles.

Los efectos del cambio climático son indisolubles del aumento de la violencia y la pérdida de derechos. La crisis ambiental ha generado una mayor pugna por el control de los recursos, que ha dado lugar a una crisis social movida por la tensión entre los intereses económicos y las defensoras de la tierra y el medio ambiente. Este escenario está acelerando giros hacia el autoritarismo, más corrupción y simbiosis entre Estados y corporaciones, recorte de derechos (como el derecho a la vida, a la libertad de expresión, entre otros), promulgación de leyes criminalizadoras para intimidar y silenciar el activismo medioambiental, impunidad por parte de los tribunales y más represión y violencia contra las defensoras.

La retórica de la seguridad empleada por los Estados y reproducida en los medios de comunicación se ha usado en su sentido más clásico para promover el relato del miedo y del terrorismo y justificar ante la opinión pública recortes de derechos y aplicación de medidas más restrictivas contra el enemigo, en este caso las DDHA. Patrones de criminalización repetidos se están utilizando de manera sistemática para disciplinar la protesta de las defensoras medioam-

bientales. Degradación pública, amenazas, aplicación indebida de leyes antiterroristas, listas negras o detenciones con falsos cargos son algunas de las formas de criminalización en la que participaron los Estados. Asimismo, también se ha podido vincular directamente las fuerzas de seguridad estatales con episodios de violencia física y asesinatos contra defensoras. Por su parte, el poder judicial ha mostrado su parcialidad en la aplicación de la justicia a favor del Estado y corporaciones como patrón general: ha empleado el instrumento judicial para criminalizar las DDHA mientras que ha ignorado condenar las perpetradores de violaciones de los Derechos Humanos contra estas defensoras. Apología de la impunidad y falta del Estado de Derecho.

Las DDHA y, en especial, las comunidades indígenas, son de las defensoras identificadas como más vulnerables dentro del activismo por los DDHH. La enorme asimetría de poder entre estas defensoras y la institución y corporaciones es otro aspecto clave para entender la perpetuación del relato dominante que legitima la violencia sobre este colectivo.

Combatir las causas estructurales de este conflicto implicaría, en primer lugar, la toma de conciencia por parte de los Estados de los riesgos e impactos sociales que está causando la emergencia climática y las dinámicas económicas se han derivado como consecuencia –intensificación de la competitividad frente a unos recursos naturales limitados. Este reconocimiento debería traducirse en romper con la rueda económica que se ha reproducido hasta ahora y adoptar leyes de protección medioambiental con garantías a nivel nacional, regional e internacional.

Hasta que no se apruebe el Derecho Humano a un medio ambiente saludable, se puede reivindicar el uso de otros derechos que ya existen y que pueden proteger a las defensoras. Sin embargo, la tendencia global hacia la vulneración de derechos y libertades, empeorada por la actual triple crisis (ambiental, económica y social), ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer o crear nuevos mecanismos de seguimiento y protección que garanticen la seguridad del medio ambiente a la vez que la de las DDHA en un enfoque de seguridad humana que ponga las personas en el centro de la ecuación.

73. Rincón, A (9 de mayo de 2020). "Critican a Bolsonaro por poner a militares a coordinar agencias ambientales en la Amazonía". France24. Disponible a: <https://www.france24.com/es/20200509-cr%C3%ADticas-jair-bolsonaro-enviar-ej%C3%A9rcito-amazon%C3%ADa-brasil>

74. Alessi, G. (1 de junio de 2020) "Brasil moviliza al Ejército para intentar contener la deforestación en la Amazonía". El País. Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2020-06-01/brasil-moviliza-al-ejercito-para-intentar-contener-la-deforestacion-en-la-amazonia.html>



4. LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LA PAZ AMBIENTAL Y EL NECESARIO TRASVASE DE FONDOS DEL SISTEMA MILITAR A LA SEGURIDAD HUMANA

4.1 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y MEDIO AMBIENTE

Pere Ortega

Las causas del cambio climático son el resultado del conjunto de las actividades humanas sobre la biosfera, entre las cuales destaca de manera especial las emisiones de carbono a la atmósfera por la quema desahogada de combustibles fósiles (petróleo carbón y gas). Unos combustibles finitos y no renovables, lo cual ha dado lugar a una pugna entre potencias y estados por su posesión y control. Unos recursos fósiles imprescindibles para el modelo de desarrollo hoy vigente en el mundo y que han generado conflictos, cuando no guerras, entre quienes compiten por su posesión. Un control por los recursos que se extiende a otros muchos minerales todos necesarios para mantener el actual modelo de las grandes economías y que de igual manera dan lugar a conflictos y guerras.

Así, detrás del control y extracción del petróleo, gas, diamantes, oro, maderas preciosas, coltán y otros minerales escasos, en los países empobrecidos, hay conflictos que producen mucho sufrimiento. De ahí que se haya generalizado la denominación de la "maldición de los recursos" (Wenar, 2017). Es la paradoja de la abundancia para aquellos territorios que contienen recursos no renovables pero que provocan

conflictos violentos para las comunidades que las habitan. Ahí están los ejemplos de Sudán del Sur, el delta del Níger en Nigeria, Congo, Irak, Libia, Guinea Ecuatorial, Angola y de tantos otros territorios en Latinoamérica, África Subsahariana o Asia meridional donde muchas comunidades son expropiadas, expulsadas y sus hábitats contaminados por las compañías extractivas que contaminan tierras y las aguas de ríos que a su vez provocan sequías y el empobrecimiento de las tierras cultivables. Conflictos por los recursos que provocan mucha violencia y que en ocasiones acaban en guerras que, relacionados con causas políticas, en todos los casos producen un grave deterioro del medio ambiente tanto a nivel local como global. Pues el medio ambiente no conoce fronteras y cualquier contaminación acaba afectando a la totalidad de la biosfera. De ahí su relación directa con el cambio climático que hoy es la principal preocupación de la comunidad internacional.

Así, entre las causas del calentamiento global del planeta y el consecuente cambio climático, también están las guerras por los recursos, y detrás de los conflictos armados que ese afán de control origina, el gasto militar para mantener ejércitos, adquirir enormes cantidades de armamentos, su utilización en maniobras militares, ensayos y pruebas de armamentos, la construcción de instalaciones e infraestructuras (ver artículo en esta publicación de Bohigas y Fortuny), con un impacto muy superior a muchas de las actividades industriales y humanas.

A estos efectos, es bueno conocer algunos estudios llevados a cabo sobre la relación entre fuerzas ar-

mas y medio ambiente, pues si bien hay abundante literatura académica en relación con la seguridad y la paz, hay menos en relación con ejércitos y conflictos armados. Entre los centros especializados que han prestado mayor atención y que hayan publicado estudios destaca el *Worldwatch Institute*,⁷⁵ en especial su anuario *La situación del mundo*,⁷⁶ donde se analizan la interrelación entre los aspectos de la economía militar y el medio ambiente (Renner, *Worldwatch Institute*, 1993 y posteriores). Otros Centros que han aportado estudios sobre las actividades de los ejércitos y su impacto sobre el medio ambiente y sus efectos en el cambio climático, por su especificidad se deben mencionar las publicaciones del *Transnational Institute*,⁷⁷ el SIPRI⁷⁸ y *Institute for Economics and Peace*⁷⁹ y su anuario *Global Peace Index*.⁸⁰

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ MEDIOAMBIENTAL

Después de que Johan Galtung (1969) iluminara la investigación sobre la paz introduciendo la diferenciación entre paz positiva y negativa, considerando que la negativa no ofrece alternativas, mientras que la positiva ayuda a la construcción de la paz. Para evitar el enfoque de paz negativa en el que el medio ambiente y el cambio climático se confrontan con la violencia (ya descrito en el apartado anterior), ahora se aborda una visión desde un enfoque de construcción de paz positiva, que Galtung alineaba junto a violencia estructural ligándola a justicia y desarrollo, entendida ésta como satisfacción de las necesidades básicas. Para combatir el cambio climático desde las aportaciones de la solidaridad medioambiental, la justicia social, el desarrollo, la seguridad humana, la cooperación internacional, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos; cualquier tipo de actuación se debe llevar a cabo desde una perspectiva global pues el cambio climático afecta a toda la humanidad por igual, aunque sus efectos sean mucho más dañinos para los países del Sur global, los empobrecidos, que los países enriquecidos, al tener menos recursos para combatirlo.

Hay que señalar que la globalización medioambiental tiene en el nuevo concepto del Antropoceno, la propuesta que interrelaciona de manera indivisible la unión dinámica entre humanidad y naturaleza. Pues es la actividad humana la que está generando graves cambios medioambientales, lo cual debería animar a desarrollar estudios en los que el enfoque de la investigación por la paz vaya destinado a afrontar los conflictos ambientales.

La paz medioambiental debe contraponerse al conflicto medioambiental con el objetivo de ofrecer protección a la naturaleza y armonizar las tensiones entre política, seguridad y desarrollo económico para poder satisfacer las necesidades básicas de una comunidad sin destrucción de su hábitat. Una propuesta que pretende dar respuesta al desafío del cambio climático mediante la transformación del conflicto por medios pacíficos.

La paz medioambiental se complementa con la paz sostenible bajo el precepto de proteger al medio ambiente de amenazas, en el sentido de que las agresiones que infringen los humanos a la naturaleza producen conflictos violentos tanto a la naturaleza como a los humanos. Conflictos, todos ellos, que no pueden tratarse al margen de sus consecuencias sobre la naturaleza. Así, la paz medioambiental se enfrenta al gran reto de los conflictos medioambientales y está destinada a proteger la naturaleza considerando el planeta Tierra como un sólo sistema que aúna humanidad y naturaleza en el sentido apuntado de la nueva era en que nos encontramos inmersos, el Antropoceno.

Una paz medioambiental que compromete especialmente a los países enriquecidos del Norte global por ser los mayores causantes del deterioro medioambiental debido a su modelo de desarrollo insostenible. A pesar de que la mayoría de ellos viven, supuestamente, en paz política, sin guerras en sus territorios (paz negativa), pero en cambio son los causantes de las mayores emisiones de carbono a la atmósfera y por tanto los responsables de los conflictos violentos que genera el cambio climático, que a su vez golpea con mayor énfasis a las poblaciones de los países empobrecidos (Mac Ginty, 2013). Una paz medioambiental compleja, pues no se pueden poner en el mismo nivel a todos los habitantes del planeta, pues las responsabilidades en el cambio climático no son las mismas para una comunidad empobrecida que una enriquecida (ver artículo de Pere Brunet en esta publicación).

La paz tiene una concepción global y holística, como sostiene la investigación por la paz (Gandhi, Galtung, Boulding, Lederach, Fisas, Martínez Guzmán...) y en ese sentido, tiene que abarcar diversos ámbitos para ser una paz positiva (Tabla 7). Tiene que abordar el desarrollo humano para acabar con la pobreza; la seguridad humana (PNUD 1994) para reducir cualquier tipo de amenazas; la justicia social e implementación de los derechos humanos como valores universales; la transformación del conflicto violento; la gobernanza política para proporcionar cuidado a la población; la justicia transicional para reparar a las víctimas en el postconflicto; políticas de género para enfrentarse

75. <http://www.worldwatch.org/>

76. Worldwacht Institute publica el anuario *La situación del mundo*, en español editado en España por FUHEM

77. <https://www.tni.org/en>

78. <https://www.sipri.org/>

79. <http://economicsandpeace.org/>

80. <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf>

al patriarcado y avanzar en la igualdad y diversidad; la cooperación internacional para la resolución o transformación de los conflictos; por último, añadir lo que aquí se propone: la preservación de la biosfera. Así, la investigación por la paz, desde la llegada de la emergencia climática, debe incluir, de manera ineludible la cuestión medioambiental, y como en el resto de las paces, también incluir el principio fundamental de la no violencia en el sentido holístico de transformación social: no hacer daño a la naturaleza, tanto en el aspecto físico (violencia directa), como en la estructural y la cultural, las otras dos violencias que justifican la violencia directa y que afectan al medio ambiente, considerado éste en el sentido de que humanos y biosfera formamos un todo indivisible.

Tabla 7. Construcción de Paz

Transformación del conflicto
Gobernanza
Desarrollo humano
Justicia social
Derechos humanos
Políticas de género
Seguridad humana
Justicia transicional
Cooperación internacional
Preservar el medio ambiente

Elaboración propia

En este sentido, hay que alegrarse que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se incluyera por primera vez un objetivo, el 16, destinado a la Paz: *Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas* en el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles (Naciones Unidas, Asamblea General, 2015). Aunque se debería haber introducido en ese enunciado también el concepto de seguridad, y hay que lamentarlo, pues señalaría que paz y seguridad, aunque no iguales, son aspectos complementarios en la construcción de la paz. Como tampoco se ha introducido el desarme, algo que es ineludible para conseguir un mundo más pacífico, pues el armamentismo es el resultado del enorme gasto militar mundial que favorece la aparición de guerras. Pero, aun así, la inclusión del objetivo 16 en los ODS pone en la agenda internacional la interrelación entre construcción de paz y el resto de los objetivos: desarrollo, gobernanza, derechos humanos, justicia, cooperación internacional y medio ambiente.

Sobre la cuestión de la seguridad hay que aclarar una cuestión de relevancia, las más de las veces no tenida en cuenta. La seguridad no tiene el mismo sentido para la ciudadanía de las sociedades del Norte global que para la ciudadanía de los países empobrecidos y del Sur global. La seguridad, tal como es entendida en

los países enriquecidos, tiene un sentido etnocéntrico de preservar lo propio frente a las amenazas provenientes de otros ámbitos, la mayoría de las veces venidas del exterior de la propia sociedad. Una seguridad no entendida como cuidado de las necesidades básicas de las personas tal como propuso Naciones Unidas en 1994 en su informe del PNUD.

LA MISTIFICACIÓN DE LA PAZ NEGATIVA

Cuando hablamos de construcción de paz en relación con los conflictos armados, en el ámbito del activismo pacifista y antimilitarista se pone énfasis en el papel que juega en ellos el comercio de armamentos y su producción, el gasto militar de los Estados, el militarismo y belicismo que subyace en el interior de los ejércitos como motor de los conflictos armados. Y en ese sentido, se proponen actuaciones para poner fin a lo que se consideran causas de los conflictos. Estas causas son objeto de estudio en la investigación por la paz en lo que se denomina paz negativa. Pues ésta, según Galtung y el *Peace Research Institute* de Oslo (PRIO),⁸¹ Instituto por él fundado, destaca los aspectos negativos que los Estados dedican a preparar la paz para disuadir posibles peligros y amenazas, pero no aportan aspectos positivos para su prevención, resolución o transformación.

En ese sentido, la aportación de Galtung invita a la reflexión de no caer en el error de considerar que son las fuerzas armadas, el gasto militar, la industria militar y el comercio de armas la causa de los conflictos armados o de la cuestión aquí tratada, el cambio climático. La investigación por la paz debe ser rigurosa y aunque se considere que las fuerzas armadas y el gasto militar pueden ejercer influencia en el desarrollo de conflictos, e influir de manera notable sobre el medio ambiente, no son sus causas determinantes. Si se analizan las causas de las guerras o se recurre a los investigadores que se han dedicado a analizarlas, se observará que las causas que las motivan son multicausales donde prevalecen dos grandes motivos: el lucro y los agravios (*Department of Peace and Conflict Upssala University*,⁸² Fisas, 1998, Ortega, 2018). Y entre los agravios afloran siempre las causas políticas, como son el acceso y control del poder; las cuestiones territoriales, de fronteras, independencia o autonomía de una comunidad; las cuestiones históricas por conflictos no resueltos; violaciones de los derechos humanos; o cuestiones ambientales. Por el lado del lucro, aparecen las cuestiones económicas que pueden estar motivadas por el control de recursos naturales; la corrupción de las élites; o un reparto desigual de la riqueza.

81. <https://www.prio.org/>

82. <https://www.pcr.uu.se/>

En ambos casos, lucro y agravios, nunca es el gasto militar, ni la industria militar, ni los ejércitos, ni tampoco el comercio de armas los causantes de provocar conflictos y guerras. Sino que las causas son por cuestiones políticas o económicas, y son éstas las que pueden provocar el incremento del gasto militar y de las fuerzas armadas. Si se observan las grandes guerras y para no remontarse a las guerras del Peloponeso, las que han tenido lugar en tiempos recientes, todas ellas no fueron motivadas por cuestiones relacionadas con la economía de guerra, sino que lo fueron por el control del poder político o para apoderarse de recursos naturales. Ahí están la primera y segunda guerras mundiales, la inmensa mayoría de las guerras periféricas en que se enfrentaron la URSS y EEUU, todas relacionadas por el control de la hegemonía mundial, y más recientemente las de la exYugoslavia, Congo, Chechenia, Afganistán, Irak, Libia, Siria o Yemen. Y es entonces, cuándo los gobiernos se preparan para llevar a cabo intervenciones militares, ya sean defensivas u ofensivas, las causas que provocan el aumento del gasto militar y la adquisición de armamentos y no al revés.

Otra cosa es que el complejo militar industrial en defensa de sus intereses corporativos (empresariales y militares) pueda influir sobre el poder político y provocar un gasto militar excesivo, lo cual puede abrir el camino a que algunos conflictos se resuelvan mediante el uso de la fuerza militar (Ortega, 2018), como así ha ocurrido en EEUU, y abran el camino a intervenciones militares y conflictos armados (Melman, 1972). Pero esa es una premisa que influye en el sentido que aboga por una solución militar por encima de soluciones políticas y diplomáticas, pero nunca es la razón determinante, pues seguro que serán más relevantes las cuestiones políticas o por el control de los recursos las que conducirán a la intervención militar.

Eso no niega que una excesiva adquisición de armas y acumulación de poder militar no pueda impulsar una carrera de armamentos entre países rivales y acrecentar el peligro de conflicto armado, pero esa rivalidad siempre viene motivada por las causas ya indicadas, agravios y cuestiones económicas. Y tampoco invalida el hecho de que los ejércitos y la producción de armamentos no sean un factor de alta magnitud en el deterioro del medio ambiente y que las emisiones de carbono a la atmósfera sean de un nivel muy superior al de otros estamentos y que su contribución al cambio climático sea cualitativamente muy significativa. Pero no cuantitativamente, pues no igualarán a las emisiones de carbono del tráfico marítimo, aéreo o rodado.

Para esclarecer las diferencias entre paz negativa y paz positiva en los ámbitos que rodean a todo el ciclo

económico militar y de las fuerzas armadas se ha elaborado la Tabla 8, donde se contraponen los aspectos de estudio para la investigación para la paz desde los ámbitos de paz negativa y paz positiva. Esto no debe interpretarse como que no se debe continuar con los estudios sobre la paz negativa, ni que los activistas no continúen con sus campañas de denuncia del militarismo, sino que pretende animar a que, tanto la investigación por la paz como los movimientos sociales, incorporen en sus trabajos y en sus actividades los aspectos de la paz positiva como elementos indispensables para la construcción de un mundo en Paz.

Tabla 8. Hacer las paces

Paz negativa	Paz positiva
Ejércitos	Fuerzas de paz
Gasto militar	Gasto social
Industria militar	Conversión industria
I+D militar	I+D ciencia
Comercio de armas	Posición Común UE
Banca armada	Banca ética
Conflicto	Transformación del conflicto
Conflictos armados	Conferencias de paz
Antimilitarismo	Desarme
Militarismo	Poder civil
Belicismo	Pacifismo
Violencia	Noviolencia
Autoritarismo	Desobediencia civil
Patriarcado	Visión de género
Seguridad	Políticas de cuidado
Inseguridad	Seguridad humana
OTAN	Naciones Unidas

Elaboración propia

Argumentar esta tabla en cada uno de sus términos, contraponiendo la diferencia entre paz negativa y paz positiva desborda el ámbito de este trabajo, pues necesitaría de una exposición, pero que en otra ocasión será abordada para dar cumplimiento a la necesidad de esclarecer los aspectos que rodean el trabajo de los movimientos sociales antimilitaristas y pacifistas.

PAZ MEDIOAMBIENTAL O BARBARIE

Mientras continúe prevaleciendo el capitalismo como sistema económico el cambio climático será irreversible y el colapso planetario irremediable. Esta aseveración puede parecer exagerada, pues también el capitalismo puede tener escrúpulos ambientalistas y algunos de sus miembros, sean corporaciones o estados que las representan, reaccionar y enmendar su afán de acumulación de capital y reducir las plusvalías que obtienen hasta un nivel aceptable en sus emisiones de carbono a la atmósfera o en la explotación de recursos no renovables de la corteza terrestre, en

especial los combustibles fósiles, sin que produzcan un excesivo deterioro de la biosfera.

¿Es esto posible? En sociedades más democráticas sin duda, pero en la sociedad capitalista actual no parece posible. Pues, aunque algunos capitalistas con conciencia ambientalista lo hagan, seguro que habrá otros muchos que no lo harán, y más en un mundo en el que actúan intereses tan contrapuestos hasta el extremo que se enfrentan en guerras económicas y cuando éstas no son suficientes, de las otras, mediante el uso de la fuerza militar. Quizás habrá corporaciones que obedezcan a los intereses nacionales de sus Estados y hagan caso de sus gobiernos, pero la mayoría y las más potentes no lo harán, pues son transnacionales y sus intereses no son nacionales sino planetarios, y se dedican a mercantilizar y explotar todo lo extraíble de la naturaleza, tierra, mar y personas. Con lo cual, el colapso parece inevitable, pues el afán de lucro es intrínseco a su naturaleza de acumulación de riqueza (capital). Como bien indicó Marx "siempre habrá un honesto panadero dispuesto a adulterar la harina del pan para apoderarse un honesto céntimo de más".

Las emisiones de carbono a la atmósfera se han acelerado desde la llegada del sistema de vida implantado por el capitalismo en el que prima un desarrollo y un consumo descontrolado. Para llevarlos a cabo se necesita del expolio continuo de recursos no renovables que, en su explotación y conversión en manufacturas emiten gases que producen el calentamiento de la atmósfera y el efecto invernadero, además de producir otro deterioro no menor, el agotamiento de recursos no renovables. Hechos que van acompañados de un trasiego incesante de millones de personas que se trasladan de un lado a otro sin otro objetivo que vagabundear por todos los continentes consumiendo energías provenientes de los combustibles fósiles, Expolio de la que son responsables no sólo las corporaciones extractivas e industriales, de servicios y financieras, también la pesca intensiva que esquilma los mares, las explotaciones agropecuarias con una agricultura y ganadería intensivas que utilizan fertilizantes y productos químicos muy agresivos con el medio ambiente.

Unas y otras producen el adelgazamiento o desaparición de glaciares, polos, el aumento del nivel de los mares, la desertización de múltiples territorios, la pérdida de biodiversidad, la aparición de nuevos virus, el retroceso de las tierras fértiles, la escasez de agua potable y grandes trastornos del clima que comportan devastadoras catástrofes naturales con sequías, huracanes, incendios y el aumento del nivel del mar.

Una multiplicidad de situaciones que producirán migraciones masivas de personas, graves conflictos,

algunos de los cuales desembocarán en conflictos armados y guerras. ¿Cómo afrontará el capitalismo y los estados sustentados en este sistema los retos de los conflictos descritos? Tal vez con aquello que algunos han denominado como ecofascismo (Sempere, 2019). Una combinación de autoritarismo y represión para preservar un nivel de bienestar suficiente para sus poblaciones, aunque desde luego desigual, con niveles diferentes entre las elites y las clases populares.

En esta situación se encuentra la humanidad y para hacer frente a las consecuencias de la hecatombe que se aproxima, los Estados enriquecidos se preparan con un fortalecimiento de sus fronteras, pues prevén la llegada de millones de empobrecidos que llamarán a las puertas del mundo superdesarrollado. Así lo indican las estrategias de seguridad y defensa de estos países donde se alerta del peligro del cambio climático por las consecuencias que acarrearán, pandemias, conflictos armados y migraciones masivas. Y ante ello, ¿cómo actuarán? Observemos Europa. La UE, en la que colabora España, mantiene la Operación *Sophia* con una fragata y 259 militares bajo el supuesto de perseguir las redes de tráfico de seres humanos y el rescate de emigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo desde la costa africana, cuando la realidad es que está llevando a cabo una operación militar de control de los refugiados. O la Guardia Civil española que también colabora en cuatro operaciones de control de emigrantes en el Mediterráneo: las misiones Hera, Indalo, Tritón y Poseidón.

Además, la UE tiene Frontex, la agencia para el control de fronteras con un presupuesto de 333 millones de euros en 2019 y provista con material militar para rechazar la llegada de migrantes. Una agencia que desde 2010 ha efectuado hasta 400 vuelos de deportación *en caliente* de emigrantes (Ruiz, 2019). Una UE que además paga a los gobiernos de Turquía, Libia y Marruecos para que impidan el paso de migrantes hacia Europa.

Por otro lado, está la OTAN que mantiene misiones militares patrullando en el Mediterráneo para la lucha supuestamente contra el yihadismo, una la denominada *Sea Guardian*, y una segunda con el nombre de *Fuerzas Armadas Permanentes*, ambas de carácter bélico con fragatas, submarinos, patrulleros y aviones, pero que a la vez ejercen un control de las migraciones provenientes de los países del Sur global.

Obsérvese, de qué manera, seguridad y defensa se aúnan en una preocupante securitización donde se mezcla lo militar y lo policial y que tiene como objetivo blindar las fronteras europeas para impedir la llegada de migrantes, especialmente en el mar Mediterráneo; a la vez que se dispone de una fuerza militar para

proyectarla hacia el exterior en aquellos asuntos que describe el Estrategia Europea de Seguridad (EES)⁸³ de 2003: seguridad energética; cambio climático; catástrofes naturales; crisis humanitarias; pandemias; migraciones masivas. Cuestiones estas de la EES, que también recoge la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 de España.⁸⁴ Todos ellos derivados de la crisis de la biosfera cuyos efectos ya se hacen notar en todos los países del Sur global. Ciertamente la EES describe otras amenazas como la proliferación de armas de destrucción masiva; la ciberseguridad; el terrorismo; y el crimen organizado. Frente a las cuales también se pretende dar una respuesta de carácter militar cuando no parece que ninguna de ellas tenga solución por ese camino (cuestión que aquí no se aborda).

Una combinación de securitización, autoritarismo y militarismo que dan lugar a lo que se ha venido en denominar como ecofascismo pues va acompañado del aumento del recorte de libertades e intolerancia hacia los diferentes, que en Occidente son los migrantes, y que puede convertirse como norma de gobierno en muchos países controlados por unas oligarquías que ostentan el poder real. De hecho, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se ha acelerado de manera amenazante en muchos países la llegada al poder de gobiernos de derecha extrema con un fuerte componente populista, nacionalista y xenófobo como representan las llegadas a la presidencia de Bolsonaro en Brasil o Duterte en Filipinas. Gobiernos autoritarios que también han llegado a Europa gobernando en Italia y Austria (hoy ya no), pero sí en Polonia, Bulgaria y Hungría, y que están presentes en los parlamentos de Francia, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda, Italia, Austria, Eslovenia, República Checa y España.

Unos gobiernos autoritarios con visos ecofascistas que necesitan de un militarismo cada vez más beligerante para mantener los privilegios de las élites que hoy gobiernan el capitalismo global. De ahí el reinicio del gasto militar mundial después de superar la crisis de 2008, y que a partir de 2016 ha vuelto a incrementarse y en 2019 ha alcanzado la escalofriante cifra de 1,917 billones de dólares, un 3,7% superior a 2018, de los que 732 mil millones de dólares corresponden a Estados Unidos (el 38% del total), con enormes recursos destinados a adquirir armamentos, en especial, por parte de todos los países industrializados. Una industria militar con una producción en el mundo 420.000 millones de dólares en 2018, de los cuales,

95.000 millones de dólares van a la exportación (SI-PRI, 2019). En España, el gobierno de Pedro Sánchez, en su corto período de gobierno provisional de 2019 adquirió el compromiso de poner en marcha diez programas de armamentos entre 2019 y 2032 por un importe de 13.356 millones de euros (Ortega, 2020).

Para revertir la crisis actual y el colapso medio ambiental que se avecina habrá que volver a los discursos solidarios capaces de liderar una transición energética hacia una sociedad postcarbono y poder avanzar hacia sociedades más democráticas y eco-socialistas sustentadas en los conceptos de libertad, igualdad, fraternidad, austeridad en el consumo y respeto con la naturaleza para poder así salvaguardar la biosfera y la especie humana.

Unos valores que están presentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas y que los estados se han comprometido en convertir en realidad en el año 2030. Diecisiete objetivos donde se enumeran algunos de los retos más importantes que tiene la humanidad para construir un mundo donde la justicia social, el desarrollo y la supervivencia del planeta estén garantizadas. Unos ODS que si se convierten en realidad son el mejor camino para conseguir la paz, pues ésta, es un bien de segunda generación que sólo alcanzaremos si antes no se consiguen todos esos otros objetivos de primera generación que hagan posible la Paz con mayúsculas.

Aunque, cierto es, que los ODS no contemplan el desarme, pues las potencias militares y muchos estados, no hay que engañarse, se hubieran negado a refrendar, Un trabajo que deben asumir los constructores de paz para que esté presente en la Agenda de los estados, pues sin desarme y todo el resto de los objetivos que van aparejados a él: reducción del gasto militar, ejércitos, industria militar, armamentos, comercio de armas, no será posible alcanzar la erradicación de la guerra. Si la humanidad ha conseguido la prohibición en muchos países de la esclavitud, de la pena de muerte, la tortura o la declaración de los Derechos Humanos entre otros muchos logros, se debe aspirar a prohibir la guerra y hacer posible la Paz perpetua kantiana.

4.2 EL BÚNKER EN LLAMAS. PAZ Y DESARME EN LA LUCHA POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA

Quique Sánchez Ochoa

Evitar la guerra y el caos climático son, en el sentido más literal, la misma causa.
(Naomi Klein, 2017: 204)

Este apartado tratará de hacer evidente que cualquier propuesta de transición ecológica que pretenda evitar

83. El Consejo Europeo adoptó la Estrategia Europea de Seguridad: Una Europa segura para un mundo mejor en Bruselas el 12 de diciembre de 2003 <https://www.consilium.europa.eu/media/30808/qc7809568esc.pdf> Consultado el 14/02/2019

84. Estrategia Española de Seguridad 2017 https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf Consultado el 14/02/2019

los efectos más extremos del cambio climático y el consiguiente colapso eco-social debe necesariamente incorporar elementos del discurso pacifista y abogar por procesos exhaustivos de desarme y desmilitarización. Se argumentará, por tanto, que resulta esencial incluir en la lucha por la justicia climática una perspectiva de paz que ponga en cuestión el poder militar y que plantee alternativas basadas en criterios de seguridad humana, común y sostenible.

Desde un análisis de la relación entre el militarismo, el armamentismo y la emergencia climática, ya ampliamente explorado en apartados previos, se planteará que la desmilitarización y el desarme defendidos por el movimiento pacifista deben considerarse también un requisito en la lucha contra el cambio climático, principalmente por cinco motivos.

El primero tiene que ver con el propio funcionamiento de las sociedades industriales capitalistas, pues se puede argumentar que limitar el poder militar de las grandes potencias va directamente en detrimento de las prácticas depredadoras de las grandes corporaciones extractivistas, muy a menudo posibilitadas por el *hard power*; en segundo lugar, se defenderá que reducir capacidades y actividad militar significa atajar los considerables impactos de la guerra y sus preparativos sobre el medio ambiente; en el tercer epígrafe, se planteará una defensa del desarme basada en la firme oposición a las armas nucleares, cuyo mera existencia supone la otra gran amenaza a la vida en este planeta; en cuarto lugar, se darán argumentos para poner en cuestión la preponderancia de lo militar en la gestión de nuestra defensa y seguridad, lo que además puede contribuir a deslegitimar la respuesta militarizada y securitaria a la crisis climática, y al mismo tiempo favorecer relaciones multilaterales más cooperativas y justas. Por último, y a modo de concusión, se explorará cómo dismantelar y dejar sin fondos la maquinaria de guerra supondría liberar una gran cantidad de recursos públicos y privados que podrían perfectamente ser utilizados para impulsar una transición ecológica y construir sociedades y economías más justas, sostenibles y pacíficas.

SYSTEM CHANGE NOT CLIMATE CHANGE

“Cambio de sistema, no cambio climático” se ha convertido en una proclama habitual en las protestas por la justicia climática que vienen sucediéndose a escala global desde finales de 2018, en gran parte protagonizadas por niñas/os y jóvenes de todo el mundo. Este movimiento conecta con acierto en este slogan al sistema capitalista, cimentado en el crecimiento ilimitado, el consumismo y el extractivismo, con el acelerado colapso medioambiental que vivimos. Utilizan por tanto un discurso impugnatorio del modelo

y la lógica capitalista, y es en este sentido en el que consideramos fundamental la perspectiva crítica que aportan los movimientos por la paz y el desarme al denunciar las tendencias militaristas y armamentistas inherentes al sistema.

En línea con este argumento, Nick Buxton se hace eco en su artículo *Climate change, capitalism and the military*⁸⁵ de una metáfora muy ilustrativa acuñada por el economista liberal Thomas L. Friedman. Este autor explicaba en 1999⁸⁶ que “la mano invisible del mercado nunca funcionaría sin un puño invisible”, es decir, que el (mal llamado) capitalismo de libre mercado no puede subsistir sin el poder militar, el uso de la fuerza o la amenaza de esta. “McDonalds no florecería sin McDonnell Douglas, fabricante del F-15” y las empresas estadounidenses no gozarían de ‘un mundo seguro’ en el que llevar a cabo su actividad “si no fuese por el ejército, la fuerza aérea, la armada y los marines”. Este puño, que no es en realidad invisible, pero que sí que es constante y convenientemente soslayado, sostiene y apuntala el *business as usual* que las jóvenes activistas climáticas ponen en cuestión, garantizando y salvaguardando el acceso a recursos materiales en todo el mundo (y particularmente en el Sur Global) por parte de las grandes corporaciones transnacionales (véase también el de Pere Brunet en esta misma publicación), por lo que, tal y como hace Thomas Friedman, debe considerarse un pilar fundamental del actual sistema económico.

En este sentido es muy esclarecedor el análisis de Naomi Klein (2007 y 2017), que ilustra cómo aquellos que se benefician de la actual distribución de poder y riqueza dependen y confían en el sector militar y de seguridad para mantener y expandir su posición de privilegio, incluso a la hora de hacer frente a emergencias que ellos mismos han contribuido enormemente a generar, como es el caso del cambio climático. Desde la consideración de que la crisis es una característica intrínseca de este modelo económico, al que denomina capitalismo del desastre, Klein argumenta que para que un sistema tan destructivo e injusto subsista es esencial una creciente militarización y securitización. A los niveles cada vez más elevados de desigualdad (entre países y dentro de ellos), los gobiernos responden con crecientes niveles de violencia y coerción tanto a nivel interno como en sus fronteras y más allá de ellas. Esto encaja con la previsión de otro Friedman, Milton en este caso, uno de los principales ideólogos del capitalismo neoliberal, que promulgó que la defensa y la seguridad (ejército y policía) son dos de las pocas funciones que debe tener un gobierno (por otro lado,

85. <https://www.tni.org/en/article/climate-change-capitalism-and-the-military>

86. <https://www.nytimes.com/1999/03/28/magazine/a-manifesto-for-the-fast-world.html>

reducido a su mínima expresión), para proteger "nuestras libertades" de "enemigos internos⁸⁷ y externos" (Klein, 2007:17). En línea con esto, Christian Parenti (en Buxton y Hayes, 2016:50) entiende que en los últimos cuarenta años en los que la doctrina neoliberal se ha convertido en la hegemónica, al mismo tiempo que "se han debilitado o eliminado las funciones de protección, regulación y redistribución" de los Estados, dando rienda suelta a la acumulación de riqueza y poder en unas pocas manos, "se han sobredimensionado las capacidades represivas y militares", en lo que él llama una "convergencia catastrófica" entre neoliberalismo, militarismo y cambio climático.

Esta lógica neoliberal impregna además el ciclo económico militar (Calvo y Pozo, 2015), con una industria armamentista que por un lado se beneficia de la desregulación, la privatización y el libre mercado, pero que al mismo tiempo goza de una posición de privilegio en las políticas públicas y presupuestos del Estado, por su carácter de industria "estratégica", tal y como ocurre con las grandes petroleras. Así, muchas empresas de "defensa y seguridad" actúan como transnacionales pero bajo el ala de gobiernos, que adquieren la mayor parte de su producción, autorizan sus ventas a otros países (a menudo saltándose criterios legales, morales y humanitarios), las financian a través de créditos o participación accionarial y encubren gran parte de su actividad por motivos de "seguridad nacional".

El rol primordial que juega el poder militar en el estado actual de las cosas, como sostén del *business as usual*, así como los impactos en el medioambiente propios de su actividad, constatan de forma casi literal esa guerra entre el capitalismo y el clima que Klein relata con precisión (2017), y que la ecofeminista Yayo Herrero describe como una "guerra contra la vida".⁸⁸

No obstante, los vínculos entre la crisis climática y el poder militar, apenas reciben atención de la opinión pública, tal y como explica Buxton en su artículo de 2018, es sin duda un avance considerable que "cada vez más gente conecte los puntos entre nuestro sistema económico y la destrucción ecológica", pero es una "omisión sorprendente" que no se establezcan conexiones "entre asuntos medioambientales y militarismo y seguridad". Y lo es aún más si tenemos en cuenta hasta qué punto han aumentado su poder e influencia en las últimas décadas el sector militar y de seguridad.

Esta omisión no es desde luego sorprendente en el discurso oficial sobre defensa y seguridad, en gran

parte articulado y condicionado por un complejo militar-industrial bien imbricado en el sistema político y económico. Pero sí es alarmante, por el contrario, que la conexión entre lo militar y la emergencia climática no aparezca en el diagnóstico ni en las demandas de quienes luchan contra el cambio climático y en las propuestas de transición ecológica que pretenden evitar el colapso medioambiental y social.

De los nuevos movimientos de protesta contra el cambio climático destacan por su rápido crecimiento e impacto dos grupos: *Fridays For Future* (FFF)⁸⁹ y *Extinction Rebellion* (XR).⁹⁰ El primero de ellos surge en agosto de 2018 a raíz de la huelga escolar iniciada por Greta Thunberg en Suecia y está formado y liderado por estudiantes de todo el mundo. Su objetivo es superar la crisis climática, proteger a todos los seres vivos y crear una sociedad que esté en armonía con el medioambiente. FFF aporta también un componente de justicia intergeneracional, pues defiende que esta generación, que no está dispuesta a actuar para frenar el cambio climático, está privando a las futuras de la posibilidad de disfrutar de un medio ambiente sano. El segundo grupo de protesta, *Extinction Rebellion*, surge en Reino Unido en octubre de 2018 y se declara en rebeldía frente a los políticos que "nos han fallado", para con ello poder provocar un cambio radical que prevenga una extinción masiva y minimice el riesgo de colapso social. Para denunciar la falta de acción frente a la crisis climática, ambos movimientos utilizan formas de protesta no violentas y pacíficas: el primero poniendo énfasis en las huelgas de estudiantes cada viernes, y el segundo en acciones disruptivas y creativas de desobediencia civil. A pesar de este componente de pacifismo y no violencia es sus formas de protesta, es no obstante casi imposible encontrar en su argumentario alguna referencia a la guerra, a lo militar o al armamento en relación con la destrucción medioambiental que provocan y posibilitan. Como pilar central del sistema que pretenden cambiar, es por tanto esencial que estos grupos de protesta tengan en cuenta el poder militar en el diagnóstico que hacen del status quo, y consideren su necesario desmantelamiento en la construcción de propuestas alternativas para sociedades más sostenibles y justas.

Precisamente para llenar este vacío, en 2019 se forma en Reino Unido *Extinction Rebellion Peace*,⁹¹ una coalición de 14 organizaciones que trabajan por la paz y el desarme dedicada a incorporar esa perspectiva crítica con el militarismo y el armamentismo aún ausente en el debate sobre el cambio climático. Su principal objetivo es "hacer explícitos los vínculos entre el militarismo y la emergencia climática". Este subgrupo dentro

87. En este sentido, ilustra muy bien esta tendencia la situación actual en los Estados Unidos respecto a la violencia policial contra la población afroamericana, cuyas protestas han sido además reprimidas con el apoyo de efectivos y equipamientos militares.

88. <https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31220/coronavirus-decrecimiento-tesis-ecologica-agroecologia-yayo-herrero.htm>

89. <https://fridaysforfuture.org/take-action/social-media/>

90. <https://rebellion.earth/>

91. <https://xrpeace.org/>

de *Extinction Rebellion*, aun siendo una experiencia todavía reciente y limitada, es sin duda un precedente esperanzador para el tipo de convergencia y sinergias que este artículo defiende.

Si, por el contrario, no se consigue incorporar aspectos de desmilitarización y desarme en la discusión pública ni en la agenda política, nos veremos sin duda abocados a repetir fracasos como los del Protocolo de Kioto o los Acuerdos de París, que no incluyeron las emisiones de los ejércitos en los compromisos de cada país, o como el *Green New Deal*, propuesto por sectores de la izquierda estadounidense, que omite los niveles de gasto militar del país (más de 730.000 millones de dólares en 2019 según las estimaciones de SIPRI), aun cuando liberar esos recursos públicos parece la única forma de financiar una transición justa a energías renovables y a un modelo económico sostenible.

GUERRAS POR PETRÓLEO, GUERRAS CON PETRÓLEO

Energy is the lifeblood of our warfighting capabilities.
General David Petraeus

La relación entre los combustibles fósiles y el poder militar es compleja, pero a todas luces muy estrecha. Si tenemos en cuenta que el suministro energético es una prioridad absoluta para cualquier Estado y que la gran mayoría de países confía en los combustibles fósiles como principal fuente de energía, es fácil comprender cómo este recurso puede ser y es objeto de disputas y alianzas político-militares, marcando decisivamente las relaciones internacionales y el uso que los gobiernos dan a sus capacidades para el *soft* y el *hard power*. La adicción a los combustibles fósiles del sistema capitalista, especialmente al petróleo, ha marcado el destino de regiones como Asia Occidental que, pese a acaparar gran parte de las reservas de crudo mundiales (o precisamente por ello), está sumida en una tremenda inestabilidad desde hace décadas, con conflictos armados que se perpetúan y se suceden uno tras otro. Las injerencias políticas y las intervenciones militares de los EEUU y otras grandes potencias en la región no pueden explicarse sin la preponderancia en el panorama internacional y dentro del sistema económico actual de este combustible fósil, cuya combustión es la principal fuente de emisiones de CO₂ que provocan el cambio climático. La guerra o la amenaza de esta es utilizada para garantizar el acceso y suministro de unos recursos fósiles que la comunidad científica en su práctica totalidad nos conmina a dejar bajo tierra. Esta dependencia del petróleo explica además alianzas políticas, económicas y militares como la que existe entre los

EEUU (y otros países occidentales) y Arabia Saudí, que sería inconcebible de no ser por las enormes reservas de crudo con que cuenta este régimen autoritario. Esta relación tan estrecha ha supuesto de facto carta blanca e impunidad para un gobierno involucrado en graves violaciones de derechos humanos y en crímenes de guerra, que ha visto sus aspiraciones militares en la región posibilitadas por las cuantiosas ventas de armamento estadounidense y europeo que se vienen sucediendo desde hace décadas. De hecho, tras el asesinato del periodista Jamal Kashoggi por orden del príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salman, la Casa Blanca despejó cualquier posible duda sobre las motivaciones de esta alianza al emitir un comunicado del Presidente Trump⁹² en apoyo al régimen saudí que fundamentaba este respaldo en los contratos cerrados para la venta de armas por valor de 110.000 millones de dólares y en su buen entendimiento "para mantener los precios del petróleo a niveles razonables". La relación entre combustibles fósiles y guerra se convierte en este caso en un intercambio tácito de petróleo por armas y apoyo diplomático y militar, cuyos efectos son fácilmente identificables en la Guerra del Yemen, el mayor desastre humanitario del siglo XXI, en el que la coalición liderada por Arabia Saudí bombardea de forma sistemática objetivos civiles.

En relación a los precios del petróleo, vale la pena incorporar el análisis que hace Michael T. Klare en *Sangre y Petróleo* (2006), que identifica una correlación entre los precios del petróleo y las guerras, en lo que es otro efecto perverso de este binomio: cuando estallan conflictos armados en países con activos petrolíferos importantes, el precio del barril de crudo en los mercados internacionales normalmente sube de forma considerable, lo que beneficia a las grandes empresas petroleras. Esto puede suponer un incentivo más para que las grandes potencias sigan apostando por la vía militar en la esfera internacional, alimentando y perpetuando conflictos armados en zonas de interés estratégico que benefician no solo al complejo militar-industrial de sus países, sino también a sus grandes corporaciones petroleras.

El despliegue de esta maquinaria de guerra para, o bien ejercer o bien proyectar, poder sobre otros países y para asegurar el suministro y transporte de combustibles fósiles, supone un desahogado consumo de petróleo, con su consiguiente huella ecológica. Un estudio de *The Costs of War* de 2019⁹³ sitúa al Departamento de Estado (DoD por sus siglas en inglés) de los EEUU como el mayor consumidor institucional

92. <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-standing-saudi-arabia/>

93. <https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2019/Pentagon%20Fuel%20Use%2C%20Climate%20Change%20and%20the%20Costs%20of%20War%20Final.pdf>

de petróleo del mundo, habiendo emitido 1.200 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero desde el inicio de la llamada "Guerra contra el Terror" en 2001. Esto equivale al consumo anual de 257 millones de coches, el doble de los que circulan en los EEUU en este momento. Según estos cálculos, si el Pentágono fuera un país, ocuparía el puesto número 55 en el ranking mundial, siendo su consumo medio anual superior al de países como Portugal o Suecia. De acuerdo con la autora de este informe, Netta Crawford,⁹⁴ la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero las producen las instalaciones y el combustible de armas y vehículos de guerra. Respecto a las primeras, cabe tener en cuenta que los EEUU cuentan con más de 800 bases en todo el mundo⁹⁵ y 560.000 edificios operados por el DoD. Por su parte, el elevado consumo energético que requieren vehículos y sistemas de armas militares, muy ineficientes en comparación con la tecnología civil por sus funciones específicas de combate (peso, blindaje, velocidad, etc.), hace de las operaciones militares otra fuente de emisiones de gran magnitud. Este informe no incluye, no obstante, las emisiones propias de la industria militar estadounidense, que Crawford estima entorno al 15% del total del país norteamericano, ni los incendios que tienen lugar durante los conflictos armados, en especial aquellos causados de forma intencional contra la infraestructura petrolera, como en refinerías o pozos, que pueden arder durante meses. Tampoco se incluye en este cálculo el coste de la reconstrucción de un país que, en particular con la producción de cemento, supone unas emisiones de dióxido de carbono considerables.

Del combustible que utiliza el ejército estadounidense en operaciones militares, una cuarta está destinada a la *US Central Command*, desplegada en el Golfo Pérsico precisamente para proteger el transporte de crudo desde la región. Esto es sin duda ilustrativo de cómo funciona ese ciclo vicioso, por el que la maquinaria de guerra que asegura el acceso y suministro de petróleo requiere y consume cantidades ingentes de éste.

El caso de los EEUU es, por su poderío militar sin parangón, el más emblemático a la hora de medir la huella ecológica de la actividad militar, pero sería desde luego interesante extender este tipo de análisis a otros países con capacidades militares avanzadas. En este sentido, Stuart Parkinson, de *Scientists for Global Responsibility*, hace una estimación de las emisiones de CO₂ de los ejércitos de todo el mundo, que cree que podrían estar entre el 5 y el 6% del total.

94. <https://theconversation.com/the-defense-department-is-worried-about-climate-change-and-also-a-huge-carbon-emitter-118017>

95. <https://www.basenation.us/>

LA OTRA GRAN AMENAZA EXISTENCIAL

El calentamiento global tardará entre 100 y 150 años en hacer el planeta inhabitable para los humanos si no hacemos nada al respecto. Las armas nucleares pueden hacer el mundo inhabitable en 45-90 minutos.

John Hallam, activista antinuclear⁹⁶

Quizás el vínculo más evidente y trabajado entre la lucha pacifista y la ecologista ha girado históricamente en torno a las armas nucleares. Los motivos son evidentes: la destrucción generada por este tipo de armamento va mucho más allá de los impactos de la guerra convencional, provocando una devastación humana y medioambiental que perdura por generaciones y amenazando la mera existencia de vida en este planeta. De hecho, una de las organizaciones ecologistas más reconocidas en el mundo (que también es pacifista) es Greenpeace, que en sus orígenes se dedicó de forma incansable a tratar de sabotear pruebas nucleares en diferentes rincones del mundo, fruto de una conciencia tan ambientalista como pacifista.

Tal y como analizan de Fortuny y Bohigas en un artículo de 2019,⁹⁷ diversos estudios científicos han demostrado que

"la detonación de menos del 1% del arsenal nuclear mundial provocaría (aparte de las víctimas humanas inmediatas y los destrozos materiales) un cambio sustancial del clima global no restringido a la zona de explosión, sino que afectaría todo el planeta. La enorme cantidad de humo y hollín producida por la explosión en una zona urbana y poblada reduciría la radiación solar en la superficie terrestre y, por tanto, también la evaporación. Bajarían la temperatura y pluviosidad y, como consecuencia, disminuiría la producción agrícola de todo el planeta y podría poner más de 2.000 millones de personas en situación de riesgo alimentario"

Por su capacidad destructiva sin parangón, tanto a nivel humano como medioambiental, las armas nucleares son, sin lugar a dudas, una razón de peso para aunar fuerzas entre movimientos sociales y exigir de forma conjunta su total eliminación, como condición sine qua non para poder construir sociedades sostenibles. En este sentido, sería un desarrollo muy esperanzador si a la encomiable campaña de incidencia y presión iniciada por el movimiento pacifista que ha desembocado en la ratificación del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares⁹⁸ se sumaran las voces jóvenes de quienes exigen justicia climática, denun-

96. <https://www.echo.net.au/2019/09/international-day-total-elimination-nuclear-weapons/>

97. <http://centredelas.org/actualitat/panorama-actual-y-perspectiva-de-futuro-de-las-armas-nucleares/?lang=es>

98. <http://centredelas.org/premsa/mes-a-prop-de-la-fi-de-lamenaca-de-las-armes-nuclears-el-tractat-sobre-la-prohibicio-de-las-armes-nuclears-asseleix-les-50-ratificacions-necessaries-per-a-la-seva-entrada-en-vigor/?lang=es>

ciendo otra forma de irresponsabilidad por parte de quienes ostentan el poder, que igualmente pone en riesgo la vida en la Tierra.

La justificación política para la existencia de más de 14 mil bombas nucleares, suficientes para hacer explotar el planeta varias veces, se fundamenta en un paradigma de seguridad basado en la disuasión y en la amenaza de destrucción mutua asegurada. De hecho, algunos de los rasgos del discurso, doctrina y clase política que ahora mismo prevalecen, conectan bien la causa antinuclear/pacifista con la ecologista: una confianza insana en el poder que la tecnología otorga, acompañada por una omisión deliberada de nuestra interdependencia y ecoddependencia, que impulsan políticas del borde del abismo. Estas actitudes están habitualmente acompañadas de una masculinidad tóxica muy reconocible, que exacerba aún más (o quizás está en el germen de) políticas basadas en la competición, el uso de la fuerza y la amenaza de esta y la toma de riesgos, todo en un momento de graves emergencias que requieren precisamente de lo contrario: políticas de cooperación, diálogo, multilateralismo y cuidados.

Para ejemplificar esta actitud respecto a la naturaleza, el poder y la capacidad destructiva, puede vernos un episodio del que informó *The Guardian*⁹⁹ en 2019, según el cual el entonces presidente Donald Trump habría preguntado repetidas veces a sus asesores por la posibilidad de lanzar bombas nucleares a los huracanes, con el fin de evitar su avance hacia las costas estadounidenses una vez se han formado en el Atlántico frente a las costas de África.

LA SOLUCIÓN MILITAR

Disponemos de satélites, drones y algoritmos para ayudarnos a medir y conectar cada dimensión de los desastres venideros, pero no podemos reunir la voluntad política para tratar de prevenirlos. Estamos cartografiando la vulnerabilidad, pero no para ayudar a los vulnerables, sino para buscar oportunidades para el complejo industrial del desastre. Te presento la nueva distopía que, igual que la anterior, aísla a los ricos de la amenaza de los pobres.

(Ben Hayes, en Buxton y Hayes 2016: 90)

Tal y como hemos ido argumentando, la aportación del sector militar a la degradación medioambiental es considerable y debe por tanto contarse entre las causas del cambio climático. No obstante, el sector militar ha optado por centrarse en la gestión de las consecuencias del caos climático y por considerarse a sí mismo parte de la solución y no del problema.

99. <https://www.theguardian.com/us-news/2019/aug/26/donald-trump-suggests-nuking-hurricanes-to-stop-them-hitting-america-report>

Las estrategias y doctrinas de "defensa y seguridad" de la mayor parte de los países occidentales reconocen la magnitud de los impactos que la crisis climática puede tener, y consideran al cambio climático como un multiplicador de amenazas, que necesariamente nos lleva a una mayor inestabilidad e inseguridad. En este sentido, los analistas militares son conscientes de que la escasez y la competición por determinados recursos (agua, combustibles, minerales, tierras de cultivo), sumadas a desastres naturales cada vez más extremos y más frecuentes que provocarán migraciones masivas, llevarán a una mayor conflictividad y a situaciones límite que, según ellos, requerirán de capacidades militares para mantener el orden, en el sentido más literal de esta expresión. Dejando de lado cualquier posibilidad de cambios estructurales que traten de evitar o mitigar los peores efectos del cambio climático, el poder militar ha optado por enfocarse en cómo hacer frente y posicionarse dentro los escenarios distópicos que se nos presentan. Por descontado, esta aproximación no se hace desde una perspectiva humanitaria, según la cual el ejército podría adoptar tareas de rescate o protección civil (algo que pretenden evitar activamente), sino más bien de adaptación, con el sector militar apuntalando el status quo, aumentando su ámbito de influencia y aprovechando las nuevas oportunidades que pueda brindar un escenario catastrófico (como por ejemplo en el Ártico).

Desde un punto de vista del ecologismo, pueden sin dudar resultar positivas las políticas y medidas tomadas por los ejércitos más punteros para hacer frente al cambio climático, como reducir su consumo energético e incorporar energías renovables a su actividad. Pero estas propuestas no deben llevarnos a engaño. En palabras de David Sirota (Buxton y Hayes, 2017: 208), pensar que "el Pentágono puede de alguna manera continuar con la destructiva política medioambiental de guerra permanente mientras a la vez protege los recursos energéticos es una idea tan ilusoria como que una compañía petrolera diga que su objetivo es ayudar a reducir las emisiones de carbono extrayendo más petróleo".

Este "reverdecimiento" o *greenwashing* del ejército puede explicarse, según Mark Akkerman (Buxton y Hayes, 2017: 198), por cuatro motivos. El primero y principal, tiene que ver con lo analizado en el segundo epígrafe: la escasez energética, sumada a las dificultades que supone el suministro y transporte de hidrocarburos, a menudo sujetos a ataques,¹⁰⁰ animan a los ejércitos a reducir su dependencia y su vulnerabilidad en este sentido, buscando alternativas energéticas y disponiendo medidas de eficiencia y menor

100. <https://www.forbes.com/2009/11/12/fuel-military-afghanistan-iraq-business-energy-military.html#788c31ec4562>

consumo. Esto incluye una apuesta por la energía eólica y solar, pero también por alternativas al petróleo también controvertidas como los biofuegos o la energía nuclear. En segundo lugar, el ejército trata de proteger sus bienes e infraestructuras ante algunos de los efectos extremos del cambio climático, como pueden ser huracanes, inundaciones u olas de calor, que ya han causado estragos en instalaciones militares en todo el mundo. El tercer motivo por el que se ha incorporado un análisis de la crisis climática desde lo militar tiene que ver con la identificación de posibles futuras amenazas que puedan estar ocasionadas por la inestabilidad climática, "desde desastres humanitarios crecientes al posible incremento de conflictos, migraciones y disturbios a los que el ejército considera que deberá responder". En cuarto y último lugar, Akkerman entiende que el interés del sector militar en el cambio climático tiene que ver con los intereses económicos propios del complejo militar-industrial, que ha identificado las grandes oportunidades que presenta el creciente mercado de la seguridad ambiental.

Así pues, existe una desconexión muy notoria y conveniente entre, por un lado, lo que el poder militar está haciendo y se está preparando para hacer ante la situación de emergencia climática (dentro del rol que se atribuye a sí mismo como garante de nuestra seguridad) y, por el otro, las responsabilidades que tiene sobre los altos niveles de inseguridad que vivimos.

Además, hacer del cambio climático un problema de seguridad permite cambiar de categoría a quienes sufren las peores consecuencias del cambio climático, que pasan de ser víctimas, supervivientes, titulares de derechos, migrantes o refugiadas, a ser considerados una amenaza a la seguridad. Esto supone de facto, además del mantenimiento por la fuerza de las estructuras globales de expolio, explotación y extractivismo, la imposición de un reparto desigual e injusto de las cargas del cambio climático, haciendo que paguen el mayor precio y sufran las peores consecuencias quienes menos responsabilidad tienen en el calentamiento global.¹⁰¹ El complejo militar-industrial juega aquí un rol clave, con crecientes capacidades, competencias y posibilidades de negocio en lo relativo al control y la vigilancia de unas fronteras cada vez más militarizadas (Ruiz, Akkerman y Brunet, 2020) para hacer frente a unas migraciones que las crisis ambientales no dejarán de alimentar.

El modelo de sociedad que se impulsa con esto, cada vez más cercano a la peor de las distopías, sólo puede establecerse y sostenerse mediante el uso de la fuerza, la coerción y la amenaza. Necesita del poder mili-

tar, ese "puño invisible" del sistema capitalista, para proteger a quienes acumulan cada vez más riqueza, influencia y privilegios, que pasan a vivir en islas de prosperidad, en zonas rojas y verdes (Klein: 2017) o, en los escenarios más catastróficos, en búnkers. En su artículo "Survival of the Richest",¹⁰² Douglas Rus-koff apunta a una visión similar del colapso entre los multimillonarios: no tienen ninguna intención de "evitar la calamidad", aceptan el "escenario más oscuro" y tratan de disponer de su poder, dinero y tecnología para aislarse del resto de la humanidad.

Este es, por tanto, otro aspecto de la militarización y el armamentismo a tener en cuenta por quienes luchan por la justicia climática y por eludir los escenarios más extremos de colapso ecosocial, pudiendo ser una tarea compartida entre ecologistas y pacifistas evitar la respuesta militarizada y securitaria a la crisis climática.

LA OPORTUNIDAD

El mundo gastó en el año 2019, según estimaciones del SIPRI, 1,92 billones de dólares en ejércitos y armamento, volviendo a los niveles del final de la Guerra Fría. Dos tercios de este gasto lo acaparan sólo 7 países, y los EEUU acumulan un 38% del total. Estos altísimos niveles de gasto militar se justifican principalmente en la percepción de amenaza, la desconfianza entre países y la obsesión por disuadir y proyectar poderío militar en el escenario internacional, destacando en esta dinámica los miembros de la OTAN (que acumulan el 56% del gasto militar total), China y Rusia, así como aquellos países envueltos en disputas regionales (como India, Arabia Saudí o Turquía). Estas capacidades militares, en un momento de graves emergencias globales (no solo el cambio climático, también la pandemia de la COVID-19, migraciones, crisis humanitarias como la de Yemen...) suponen un despilfarro de recursos públicos que no sólo no protegen a las poblaciones en el sentido tradicional en el que pretenden hacerlo, sino que aumentan la conflictividad y tensión entre países y provocan otras formas de inseguridad al sustraer financiación de sectores e instituciones que proveen verdadera seguridad desde la cobertura de las necesidades humanas y en línea con paradigmas alternativos de seguridad común y humana.¹⁰³ Si nos referimos a la emergencia climática, seguir alimentando la maquinaria de guerra no solo exacerba y contribuye a la destrucción medioambiental, sino que supone un derroche manifiesto de unos recursos que serían enormemente útiles para financiar una transición urgente hacia sociedades y economías sostenibles que eviten los escenarios más extremos del cambio climático y

101. <https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/04/climate-change-economic-inequality-growing/>

102. <https://onezero.medium.com/survival-of-the-richest-9ef6cddd0cc1>

103. <https://demilitarize.org/resources/gdams-healthcare-not-warfare-infographic/>

sostengan a los países y sectores sociales más afectados por el caos climático.

Para ejemplificar de algún modo el coste de oportunidad de seguir construyendo poder militar en un momento de emergencia climática, nos es útil el cálculo realizado por la *Global Commission on Adaptation*,¹⁰⁴ que en 2019 estimaba que el coste de preparar a los países más vulnerables al cambio climático y mitigar los impactos de un clima descontrolado (subida del nivel del mar, condiciones meteorológicas extremas, inundaciones...), costaría 1,8 billones de dólares en 10 años. Esta cantidad es exactamente la misma que dedicamos al gasto militar en todo el mundo solo en el año 2018.

Es sencillo seguir ahondando en estas comparativas: el *Green Climate Fund*, también pensado para mitigar los efectos del cambio climático en países en vías de desarrollo, estipula una cantidad de unos 100.000 millones al año, 10 veces menos del gasto militar agregado anual de la OTAN. Las NNUU, por su parte, estiman que lograr los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 costaría entre 3 y 5 billones de dólares al año, lo que podría financiarse si el mundo dejara de gastar en sus capacidades militares por entre 2 y 3 años.

Esto pone en evidencia, precisamente, que nuestra incapacidad para hacer frente a los problemas globales de nuestra era no es por falta de recursos ni capacidades, sino de voluntad política, algo que se ha convertido en una de las principales denuncias de los grupos de protesta por el clima. Es por tanto una cuestión de prioridades mal establecidas y de políticas erradas, y esto nos plantea una razón más para luchar por la paz y el desarme: proponer otros modelos de seguridad, que pongan a las personas y al planeta en el centro, liberaría una enorme cantidad de recursos, públicos y privados, humanos y materiales, además de sentar las bases para una cooperación más honesta y comprometida entre países, basada en principios de equidad, justicia y sostenibilidad. También permitiría implementar y dotar de recursos a mecanismos y organizaciones multilaterales efectivas basadas en la seguridad común (como podrían ser unas NNUU refundadas), lo que sin duda facilitaría también concertar los esfuerzos necesarios para hacer frente al cambio climático, hasta la fecha siempre infructuosos y sistemáticamente sabotados por los países más poderosos.

A nivel de cada Estado, sobre todo en países del Norte, grandes reducciones de gasto militar implicarían necesariamente replantear la industria de defensa y

seguridad que, teniendo normalmente en el gobierno de cada país su principal cliente, debería replantear su actividad para poder seguir existiendo. En este sentido nos puede resultar inspiradora la propuesta de la campaña británica contra el comercio de armas (CAAT por sus siglas en inglés), que propone una conversión industrial desde la producción de armas a la de energías renovables (*Arms to renewables*¹⁰⁵), entendiéndose que la alta cualificación de los empleados y los sistemas productivos de alta tecnología de la industria militar son perfectamente adaptables al tipo de trabajo y a los medios de producción del sector de energías renovables. De este modo, y contando, por supuesto, con el impulso y el apoyo de las administraciones públicas, se podría evitar la pérdida de empleos, que es el argumento principal que utilizan tanto industria militar como gobiernos para justificar la fabricación y venta de armamento.

Así pues, podemos también entender que esta “convergencia catastrófica” entre militarismo, neoliberalismo y cambio climático de la que habla Parenti, o “caso épico de mal *timing*” en palabras de Klein (2017), ahora aún más exacerbados por la pandemia del coronavirus (también relacionada con la crisis ambiental), nos presenta una oportunidad, un momento *Kairós*, para construir desde la crisis otro tipo de mundo.

Para ello resulta imprescindible presionar a aquellos/as en el poder, a gobiernos y empresas, tal y como están haciendo los distintos movimientos sociales y con notorio impacto las activistas climáticas, pero sin perder de vista la urgencia y necesidad de aunar luchas y causas, ya que

“muchas de las crisis a las que nos enfrentamos son síntomas de la misma enfermedad subyacente: una lógica basada en la dominación que trata a muchas personas e incluso a la propia Tierra como si fueran desechables (y teniendo en cuenta que) divisiones y compartimentaciones –la vacilación a la hora de identificar los sistemas a los que nos enfrentamos– nos están arrebatando todo nuestro potencial y han logrado convencer a demasiadas personas de que las soluciones duraderas siempre estarán fuera de nuestro alcance. Nuestro objetivo, lejos de ser modesto, (es) intentar trazar el esquema del mundo que no queremos, sí, pero también del que anhelamos. (Klein 2017: 266)

A modo de conclusión, consideramos que nuestras posibilidades de frenar el cambio climático y poner fin a las múltiples violencias sistémicas que los diversos movimientos sociales denuncian, son indirectamente proporcionales al creciente poder militar y a las lógicas securitarias y armamentistas. Adaptando otro

104. <https://www.bbc.com/news/science-environment-49635546>

105. <https://caat.org.uk/alternatives/arms-to-renewables/>

slogan habitual en las protestas climáticas, podríamos decir que, simplemente, no nos podemos permitir seguir preparando la guerra mientras nuestra casa está en llamas.

Ante situaciones dramáticas como la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, gobiernos, industrias y ciudadanía aunaron recursos y capacidades en los llamados "esfuerzos de guerra", que unieron a sectores

públicos y privados y a grande parte de la sociedad civil para hacer frente a una amenaza que consideraban existencial. Ante la emergencia climática es necesaria una acción conjunta similar, unos "esfuerzos de paz" que, con criterios de justicia, sostenibilidad y seguridad humana, en esta ocasión pongan a nuestras sociedades y economías al servicio del planeta y de las generaciones futuras.



CONCLUSIONES

En los diferentes apartados de este trabajo se ha intentado mostrar que el sistema capitalista que está causando el calentamiento global y la crisis medioambiental necesita de la organización militar para mantenerse y crecer. Hemos visto también que esta misma organización militar contribuye a la crisis medioambiental; y que, además, se ha constatado que este sistema prevé el uso del poder militar para hacer frente a los conflictos derivados de la crisis (lucha por los recursos escasos, movimientos poblacionales por causas climáticas...), aunque difícilmente un mismo agente puede ser parte esencial de las causas y de la solución.

El sistema militar es necesario para mantener el modelo de explotación de recursos no renovables que son la causa del calentamiento global y la crisis climática. Y es por ello que la lucha por reducir los impactos de la crisis ambiental y las propuestas para la transición ecológica deben comportar inevitablemente el desarme y la reducción del gasto militar mundial, pasando de la actual seguridad militarizada, que se basa en el uso de la fuerza, a la seguridad humana.

Por otra parte, la tarea de preparar a los países más vulnerables al cambio climático para reducir los impactos de un clima descontrolado (subida del nivel del mar, condiciones meteorológicas extremas, inundaciones, pandemias, etc.), tendría un coste anual de 0,18 billones de dólares, equivalentes al 10% del gasto militar mundial. Por lo tanto, incluso una leve reducción de este gasto permitiría poner en marcha

programas muy potentes para mitigar a nivel mundial la crisis climática.

Para revertir la crisis actual y el colapso medioambiental que se acerca será necesario volver a los discursos solidarios capaces de liderar una transición energética hacia una sociedad post-carbono. Debemos avanzar hacia sociedades más democráticas y eco-socialistas, sustentadas en los conceptos de libertad, igualdad, fraternidad, consumo responsable y respeto a la naturaleza, para poder así salvaguardar la biosfera y la especie humana. El sistema económico actual ha explotado los recursos naturales sin tener en cuenta su limitación. Pero la nueva sociedad futura no puede continuar estando basada en un crecimiento indefinido como hasta ahora.

Y es que, al igual que la seguridad a largo plazo no puede existir sin justicia social, en un contexto de transformación del clima la seguridad será imposible sin una justicia climática. Hay que poner la seguridad de las personas en el centro, como alternativa a la noción tradicional centrada en la seguridad de los Estados, con el objetivo de ir más allá de las amenazas y estrategias de tipo militar.

La paz medioambiental está destinada a proteger la naturaleza considerando el planeta Tierra como un solo sistema que une humanidad y naturaleza. Y la paz medioambiental pretende dar respuesta al desafío de la crisis climática y ambiental mediante la solución de este conflicto global y planetario por medios pacíficos. Es una paz positiva centrada en las personas, en sus derechos y en la justicia social. Es

una paz que lleva a actuar con conciencia global y de especie, porque los grandes problemas del siglo XXI son planetarios, no entienden de fronteras, y afectan a todas las personas. Y, además, los países más contaminantes deben tener un papel relevante a la hora de establecer soluciones a la crisis ambiental, así como políticas de reconocimiento y acogida de las personas desplazadas por las crisis climáticas, eliminando la violencia que generan los muros fronterizos.

El gráfico 7 intenta resumir, en base a lo explicado en los diferentes apartados, la situación actual, mostrando también la necesaria evolución hacia un sistema basado en la seguridad humana, el equilibrio ecológico, la justicia global y la paz ambiental:

El techo ecológico de la humanidad en el planeta, indicado por el círculo oscuro en el diagrama, se encuentra actualmente sobrepasado por un sistema militarista que no entiende ni de límites ni de dignidad de las personas ni de restricciones ecológicas y planetarias. Es el sistema que ha creado la crisis humanitaria y ambiental, y que, situándose fuera de este círculo del techo ecológico, defiende el discurso y el mito del crecimiento ilimitado. Es el sistema basado en la seguridad nacional y la securitización, el del complejo militar-industrial, el que mantiene la depredación de recursos, el que incrementa el gasto militar, el que mantiene la actividad militar y genera la mayor parte de emisiones de gases de efecto invernadero. Es el sistema basado en esquemas patriarcales y supremacistas que vulneran los derechos de la

gran mayoría de personas del planeta y es el máximo responsable de la crisis climática y ambiental y de muchos conflictos armados en países del Sur Global. La alternativa pasa por "entrar dentro del círculo", poniendo el énfasis en el cuidado de las personas y el planeta con un enfoque de seguridad humana y justicia global, a fin de encontrar soluciones a los grandes problemas actuales, todos globales: calentamiento, pandemias, desigualdades, injusticia, desertificación, escasez de recursos, falta de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y la constatación es que el sistema de poder militarizado que ha traspasado ampliamente los límites del techo ecológico mientras ha ido esparciendo violencia y conflictos armados, es imposible que pueda ser parte de la solución que nos vuelva a entrar en el círculo, porque ésta incluye políticas de acogida y cuidado de las personas.

La llamada seguridad nacional se basa en la defensa de los intereses, demasiadas veces inconfesables, de unos pocos: las élites. Es una seguridad que necesita romper los límites del techo ecológico y de la dignidad y los derechos de las personas, con falsos discursos de crecimiento ilimitado. Su herramienta, imprescindible, es el poder militar. Por otra parte, el impacto de la guerra y de la preparación para la guerra tiene evidentes consecuencias medioambientales, aunque se encuentren poco documentadas. Teniendo en cuenta los efectos que las respuestas militares a la crisis medioambiental podrían tener en el sentido de empeorarla, es urgente investigar en profundidad el papel del sector militar desde un enfoque de paz.



Por todo ello, las acciones por el clima y el medio ambiente deben incluir en su discurso la responsabilidad del sector militar.

En este sentido, entendemos que:

- Hay que superar el actual modelo patriarcal, capitalista, colonialista y militarista que ha conseguido destruir el entorno y la vida de la gente, empezando a pensar en términos de equilibrio ecológico y de derechos de todas las personas, en términos de paz positiva y de cuidado y en términos de reducción del gasto militar mundial.
- Hay que evitar que, en el discurso político sobre seguridad, el paradigma de la seguridad humana quede subordinado al imaginario geopolítico y geo-económico convencional, donde la preservación de un orden basado en los Estados-nación y la defensa de los intereses de ciertas élites políticas y económicas se convierten en los objetivos prioritarios. Del mismo modo que la seguridad a largo plazo no puede existir sin justicia social, en un contexto de crisis ambiental, la seguridad humana será imposible sin una justicia climática que pase por reconocer y asumir responsabilidades, distribuyendo los costos del cambio climático. Porque la seguridad no tiene el mismo sentido para la ciudadanía de las sociedades del Norte global que para la ciudadanía de los países empobrecidos del Sur global. Tal como se entiende en los países enriquecidos, la seguridad tiene el sentido etnocéntrico de preservar lo que entienden que les es propio frente a las amenazas provenientes de otros ámbitos, la mayoría de las veces provenientes del exterior de la propia sociedad. Pero esta es una supuesta seguridad que no puede resolver los problemas sistémicos de la crisis ambiental y que no pone como objetivo el cuidado y las necesidades básicas de las personas.¹⁰⁶
- Las propuestas para una transición ecológica que pretendan evitar los efectos más extremos de la crisis ambiental y el consiguiente colapso ecosocial deben incorporar necesariamente un estudio riguroso del actual gasto militar y de las prioridades para redistribuir los gastos presupuestarios de los países, con el fin de pasar de enfoques basados en el concepto de seguridad nacional militar a un enfoque basado en las necesidades y los derechos sociales de todas las personas. Los análisis sobre la crisis climática y ambiental deben incorporar forzosamente el estudio de la seguridad nacional

106. La llamada seguridad nacional se basa en la defensa de los intereses, demasiadas veces inconfesables, de unos pocos, las élites. La seguridad humana tiene como objetivo las necesidades básicas de las personas, tal como propuso Naciones Unidas en 1994 en su informe de PNUD.

militarizada, el gasto militar y la producción y comercio de armas.

- La solución a la crisis ambiental pasa por tanto por procesos exhaustivos de desmilitarización y desarme internacionales. Ya lo dijeron la mayoría de premios Nobel de ciencias y 1.700 científicos hace 28 años:¹⁰⁷ los recursos dedicados a la preparación y conducción de la guerra serán muy necesarios para solucionar la crisis ambiental, y deberían ser desviados hacia estos nuevos retos. Hay que estar alerta, haciendo una lectura crítica de la realidad y pensando en alternativas posibles de transformación y mitigación de riesgos que reduzcan vulnerabilidades e incrementen la capacidad de resiliencia de los territorios.
- Esta solución a la crisis ambiental debe respetar los límites y el equilibrio ecológicos. Hay que construir el futuro desde el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, haciendo de la vulnerabilidad una fuerza y de los cuidados una necesidad. Habrá enfocar la gobernanza, tanto global como todos niveles, la seguridad humana con una visión ecológica, de paz y ecofeminista.
- Los países más contaminantes deben tener un papel relevante a la hora de establecer políticas de reconocimiento y acogida de las personas desplazadas por la crisis ambiental; por otra parte, deben establecer políticas de gestión fronteriza que eliminen la violencia generada por los muros fronterizos. No es aceptable que el espacio fronterizo se convierta en escenario de violencia, con el impacto que ello supone para los derechos humanos de las personas que son desplazadas por la fuerza de su casa por razones ambientales o por otros motivos. Por otra parte, todas las personas defensoras de derechos humanos ambientales tienen derecho a disfrutar de los derechos a la vida y la integridad física.
- Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel esencial para forzar un cambio de sistema

107. En noviembre de 1992, alrededor de 1.700 científicos del mundo, incluida la mayoría de los premios Nobel de ciencias vivos en ese momento, advirtieron a la humanidad. Dijeron que las actividades humanas causan daños que a menudo son irreversibles al medio ambiente ya los recursos críticos, y que muchas de nuestras prácticas actuales ponen en grave riesgo el futuro que deseamos para la sociedad humana y la realidad vegetal y animal, por lo que pueden acabar alterando el mundo vivo. Explicaron que era muy urgente hacer cambios fundamentales para evitar la colisión a la que nos dirigíamos. Afirmaron que las naciones desarrolladas son los contaminantes más grandes del mundo actual y declararon que "el éxito en este esfuerzo mundial requerirá una gran reducción de la violencia y la guerra. Los recursos dedicados ahora a la preparación y conducción de la guerra, que ascienden a más de un billón de dólares anuales, serán muy necesarios en las nuevas tareas y deberían ser desviados hacia estos nuevos retos". Disponible en: <https://www.ucl.ac.uk/ucsf/ucsf-press/1992-world-scientists-warning-humanity> (última consulta, 10 de noviembre de 2020).

que intente resolver la crisis ambiental, dado que no están ligadas a los intereses dominantes. Tal como dijeron el año 2017 un total de 15.372 científicos de 184 países,¹⁰⁸ el activismo de estas entidades es necesario para conseguir que los políticos se vean obligados a actuar haciendo lo que hay que hacer para resolver la actual crisis ambiental.

La actual crisis ambiental requiere un cambio total de paradigma, desmilitarizando y en el que se aprovechen los recursos destinados a las estructuras militares, abordando, con una nueva perspectiva, opuesta al modelo neoliberal y capitalista, que entendemos que debe ser antimilitarista, feminista y ecosocial.

108. El año 2017, la revista científica *Bioscience* publicó el artículo con más autores de toda la historia. Fue firmado por 15.372 científicos de 184 países. Con la fuerza de estas 15 mil firmas, el artículo analiza la tendencia alarmante de los indicadores que han estado estudiando y señala que los humanos han ignorado las primeras advertencias de los científicos (ver nota 1). Los autores publican un segundo aviso a la humanidad, diciendo que, con nuestro consumo desproporcionado y con nuestro loco crecimiento demográfico, no somos sostenibles y ponemos en peligro nuestro futuro. Y dicen que hay muchos esfuerzos generados por "organizaciones que provienen de la gente", que se necesitan para superar "la actual terca oposición a los cambios" y hacer que los líderes políticos "se vean obligados a hacer lo que hay que hacer", según evidencia científica. Porque, durante estos 25 años, la experiencia nos ha demostrado que empresarios y políticos influyentes se mueven sobre la base de los beneficios y el dinero, sin tener en cuenta las necesidades reales de las personas. Disponible en: <https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229> (última consulta, 10 de noviembre de 2020).

BIBLIOGRAFÍA

- Abragam, Anatole y otros (1997): "World Scientists Warning to Humanity", *Union of Concerned Scientists*, disponible en <https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2017/11/World%20Scientists%27%20Warning%20to%20Humanity%201992.pdf>, fecha de consulta el 4 de mayo del 2020.
- ACNUR (2020a): "25 millones de desplazamientos internos por desastres naturales en 2019", disponible en <https://eacnur.org/es/desplazados-climaticos>, fecha de consulta 10 de junio de 2020.
- ACNUR (2020b): "Cambio climático y desplazamiento por desastres", disponible en <https://www.acnur.org/cambio-climatico-y-desplazamiento-por-desastres.html>, fecha de consulta 24 de junio de 2020.
- Amnistía Internacional (2015): "Informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo", disponible en: <https://www.amnesty.org/es/documents/document/?indexNumber=pol10%2f0001%2f2015&i>, fecha de consulta el 20 de noviembre del 2020.
- Arias, Guillermo (2017): "Los muros del mundo: 21 fronteras históricas", *El País*, disponible en https://elpais.com/elpais/2017/02/27/album/1488207932_438823.html#foto_gal_2, fecha de consulta 4 de julio de 2020.
- Barnett, J. y W.N. Adger (2007): "Climate change, human security and violent conflict. ", *Political Geography*, 26, pp. 639-655.
- BBC (2018): "Rohingya crisis: Military build-up on Myanmar border with Bangladesh", disponible en <https://www.bbc.com/news/world-asia-43248015>, fecha de consulta 3 de julio de 2020
- BBC (2019): "Cambio climático: los gráficos animados que muestran los 15 países que más CO2 emitieron en los últimos 20 años", disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50811389>, fecha de consulta 17 de junio de 2020.
- Boulding, Kenneth, (1992): *Las tres caras del poder*, Barcelona, Paidós.
- Biger, Gideon (2013): "Walls, fences and international borders" *Studia z Geografii Politycznej i Historycznej*, (2), pp: 87-108.
- Bildirici, M. E. (2017): "The causal link among militarization, economic growth, CO2 emission, and energy consumption", *Environmental Science and Pollution Research*, 24(5), 4625-4636, fecha de consulta el 20 de noviembre del 2020.
- Brown, Oli (2008): "Migración y cambio climático", disponible en https://publications.iom.int/bookstore/free/MRS-31_SP.pdf, fecha de consulta 9 de junio de 2020.
- Buhaug, H. (2015): "Climate-conflict research: Some reflections on the way forward", *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, Vol. 6 (3), pp. 269-275.
- Buxton, Nick i Hayes, Ben, (2017): *Cambio climático*, S.A. Madrid, FUHEM.
- Buxton, Nick and Ben Hayes (2016): "The Secure and the Dispossessed", *Pluto Press*, Transnational Institute, Amsterdam, disponible en <https://www.fuhem.es/2017/06/09/cambio-climatico-s-a/>, fecha de consulta el 28 de mayo del 2020.
- Calvo Rufanges, J. (2015): "El ciclo económico militar", en Calvo Rufanges, Jordi y Pozo Marín, Alejandro (Eds.), *Diccionario de la guerra, la paz y el desarme: 100 entradas para analizar los conflictos armados, la paz y la seguridad*. Barcelona: Icaria.

- Calvo Rufanges, J. (2015): "Militarización", en: Calvo Rufanges, Jordi y Pozo Marín, Alejandro, *Diccionario de la guerra, la paz y el desarme: 100 entradas para analizar los conflictos armados, la paz y la seguridad*. Barcelona: Icaria.
- Calvo Rufanges, Jordi (coord.) (2016): *Mentes militarizadas: Cómo nos educan para asumir la guerra y la violencia*. Barcelona: Icaria.
- Civicus (2018): "Democracia para todos: más allá de una crisis de imaginación", disponible a: <https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/reimagining-democracy/democracy-for-all-es.pdf>, fecha de consulta el 19 de noviembre del 2020.
- Clark, B., & Jorgenson, A. K. (2012): "The Treadmill of Destruction and the Environmental Impacts of Militaries", *Sociology Compass*, 7, 557-569.
- Clark, B., Jorgenson, A. K. y Kentor, J. (2010): "Militarization and Energy Consumption A Test of Treadmill of Destruction Theory in Comparative Perspective", *International Journal of Sociology*, 40(2), pp. 23-43.
- Comisión mundial sobre medio ambiente y desarrollo (CMMAD) (1987): "Nuestro futuro común". *Naciones Unidas*, disponible en: <https://undocs.org/es/A/42/427>, fecha de consulta el 27 de marzo del 2020.
- Crawford, Neta C. (2019): "Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War", *Watson Institute, Brown University*, disponible en: <https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2019/Pentagon%20Fuel%20Use,%20Climate%20Change%20and%20the%20Costs%20of%20War%20Final.pdf> Consultado el 10 de octubre de 2020.
- Dalby, S. (2015): "Climate geopolitics: Securing the global economy", *International Politics*. Vol. 52 (4), pp. 426-444.
- Das, Shaswati (2017): "India plans tech-backed border fencing to prevent infiltration, boost security", *Livemint*, disponible en <https://www.livemint.com/Politics/QbVM6oYnv3PGI1ACQPBrWI/India-plans-techbacked-border-fencing-to-prevent-infiltrati.html>, fecha de consulta 2 de julio de 2020.
- David Trilling (2010): "Astana Fencing Off Kyrgyzstan", *Eurasianet*, Disponible en <https://eurasianet.org/astana-fencing-off-kyrgyzstan>, fecha de consulta 28 de junio de 2020.
- Davitti, Daria (2018): "Biopolitical Borders and the State of Exception in the European Migration "Crisis"", *European Journal of International Law*, 29, 4, pp: 1173-1196.
- Department of Defense (2014): "Quadriennial Defense Review", Washington, DC: US Department of Defense, disponible en: <https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/quadrennial/QDR2014.pdf?ver=2014-08-24-144246-293>, fecha de consulta el 7 de abril del 2020.
- De Vries, Wendela (2019): "Fossil Wars, arms trade and climate justice", *Stop Wapenhandel, Amsterdam*, disponible en: <https://stopwapenhandel.org/sites/stopwapenhandel.org/files//Fossil%20wars%20-%20engels.pdf> Consultado el 6 de octubre de 2020.
- Deudney, D. (1990): "The case against linking environmental degradation and national security" *Millenium - Journal of International Studies*, Vol. 19 (3), pp. 461-476.
- Dubois, Alfonso (2005): "Índice de Desarrollo Humano (IDH)" en Pérez de Armiño, Karlos, *Diccionario de acción humanitaria y Cooperación al desarrollo*, disponible en <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/125>, fecha de consulta 15 de junio de 2020.
- Egea, Carmen y Suescún, Javier Iván (2011): "Los desplazados ambientales, más allá del cambio climático. un debate abierto", *Cuadernos Geográficos*, (49), pp. 201-215.

- Emmers, Ralf (2013): "Securitization", en: Collins, Alan, *Contemporary Security Studies*. Oxford, *Oxford University Press*, pp.131-143.
- European Union External Action Service (2016): "Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy", disponible en: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1>, fecha de consulta el 9 de abril del 2020.
- European Commission Joint Research Center (2020): "Global Crisis Severity Index 2020", disponible en: <https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/Global-Crisis-Severity-Index>, fecha de consulta el 6 de abril del 2020.
- European Commission Joint Research Center (2020): "Epidemic Risk Index 2020", disponible en: <https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index> Fecha de consulta el 6 de abril del 2020.
- Escola de Cultura de Pau (2020): "Alerta 2020! Informe sobre conflictes, drets humans i cultura de pau". Barcelona: Icaria. Disponible en: <https://escolapau.uab.cat/alerta-informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-y-construccion-de-paz/>, fecha de consulta el 10 de mayo del 2020.
- Ferdinando, Lisa (2015): "Coalition Cripples ISIL Oil Distribution", DOD News. US Department of Defense. Nov. 18, 2015, disponible en <https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/630352/oir-spokesman-coalition-cripples-isil-oil-distribution/>, fecha de consulta 4 de marzo de 2020.
- Fort, Jessica; and Straub, Philipp (2019): "The United States and European military's impact on climate change" *IPB Information Paper*, November 2019, disponible en <http://www.ipb.org/yesterdays-news/ipb-information-paper-the-carbon-boot-print/>, fecha de consulta 4 de marzo de 2020.
- Fisas, Vicenç, (1998): *Cultura de paz y gestión de conflictos*, Barcelona, Icaria.
- Frost, M (2015): "Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos", UN Doc. A/HRC/28/63/Add.1.
- Gardner, Frank (2013): "Saudis build 1,000-mile Yemen border fence", *BBC*, disponible en <https://www.infobae.com/2015/01/15/1620975-arabia-saudita-levanta-un-muro-1000-km-su-frontera-irak-aislarse-del-isis/>, fecha de consulta 30 de junio de 2020.
- Galtung, Johan, (2003): "Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización", Guernika, Bakeaz-Guernica Gogoratz.
- Galtung, Johan, (1969): "Violence, Peace and Peace Research", *Oslo, Journal of Peace Research*.
- Gemenne, François (2011): "Why the numbers don't add up: A review of estimates and predictions of people displaced by environmental changes", *Global Environmental Change*, 21 (1), pp. 41–49.
- Germanwatch (2019): "Índice de Riesgo Climático Global 2019 ¿Quiénes sufren más con los eventos climáticos extremos?", disponible en <https://www.germanwatch.org/en/16046>, fecha de consulta 10 de junio de 2020.
- Germanwatch (2020): "Índice de Riesgo Climático Global 2020 ¿Quiénes sufren más con los eventos climáticos extremos?", disponible en <https://www.germanwatch.org/en/17307>, fecha de consulta 10 de junio de 2020.
- Germanwatch (2020): *Global Climate Risk Index 2020*, disponible en: <https://www.germanwatch.org/en/17307>, fecha de consulta el 6 de junio del 2020.
- Gandhi, Mohandas (2003): "Mi vida es mi mensaje", Santander, Sal Terrae.

- Gandhi, Mohandas, (1949): "Nonviolence in Peace and War", dos volúmenes, Ahmadabad, Navajivan.
- Givens, J. E. (2014): "Global Climate Change Negotiations, the Treadmill of Destruction, and World Society", An Analysis of Kyoto Protocol Ratification" *International Journal of Sociology*, 44(2), pp. 7-36, fecha de consulta del 20 de noviembre del 2020.
- Global Witness (2013): "Deadly Environment. A rising death toll on our environmental frontiers is escaping International attention", disponible en: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/deadly-environment/> Fecha de consulta del 19 de noviembre del 2020.
- Gobierno de España (2011): "Estrategia Española de Seguridad. Una responsabilidad de todos". *Gobierno de España*, disponible en: <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/c06cac0047612e998806cb6dc6329423/EstrategiaEspañolaDeSeguridad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c06cac0047612e998806cb6dc6329423>, fecha de consulta el 7 de abril del 2020.
- Gobierno de España (2017): "Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido de todos y para todos", *Gobierno de España*, disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidenciadelgobierno/Documents/2017-1824_Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN_doble_pag.pdf, fecha de consulta el 7 de abril del 2020.
- Gould, K. A. (2007): "The Ecological Costs of Militarization", *Peace Review: A Journal of Social Justice*, 19, pp. 331-334.
- Gul, Ayaz (2018): "Pakistan's Fencing of Afghan Border Remains Source of Mutual Tensions", *VOA*, disponible en <https://www.voanews.com/a/pakistan-s-fencing-of-afghan-border-remains-source-of-mutual-tensions/4614787.html>, fecha de consulta 30 de junio de 2020.
- Gurfinkiel, Michel (2017): "Border Walls Are All the Rage Worldwide Because They Work", *Middle East Forum*, disponible en <https://www.meforum.org/7002/border-walls-are-all-the-rage-worldwide>, fecha de consulta 3 de julio de 2020.
- Hameed, Saif; y Evans, Dominic (2015): "Islamic State torches oil field near Tikrit as militia advance", *Reuters*, 5 de marzo de 2015, disponible en <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-idUSKBN0M10Z420150305>, fecha de consulta 3 de marzo de 2020.
- Hooks, G., & Smith, C. L. (2005): "Treadmills of production and destruction. *Organization & Environment*", 18(1), pp. 19-37, fecha de consulta del 19 de noviembre del 2020.
- Hulme, M. (2011): "Reducing the future to climate: A story of climate determinism and reductionism", *Osiris*. Vol. 26 (1), pp. 245-266.
- Hickel, Jason (2016): "Engineering a Better World", *Royal Academy of Engineering*, UK, p. 20-21, disponible en <http://www.raeng.org.uk/publications/other/engineering-a-better-world-brochure>, fecha de consulta el 8 de mayo del 2020.
- Inclán, D. (2018): "L'estat del temps: un present sense passat", Conferència al Macba, Barcelona, disponible en: <https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/lestat-temps-present-sense-passat>, fecha de consulta el 20 de noviembre del 2020.
- Inclán, D. (2015): "Abyecciones: violencia y capitalismo en el siglo XXI", *Nómadas* 43, 1 de agosto del 2015.
- Institute for Economics & Peace (2020): "Global Peace Index 2020: Measuring Peace in a Complex World", Sydney, Juny 2020, disponible en: <http://visionofhumanity.org/reports>, fecha de consulta el 8 de abril del 2020.
- Ionesco, Diana, Mokhnacheva, Daria, Gemenne, François (2017): "The Atlas of environmental migration", *Nueva York*. Routledge.

- IPCC (2014): "Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change" en Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.). Geneva, Switzerland, fecha de consulta del 20 de noviembre del 2020.
- IPCC (2012): "Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation" Cambridge University Press.
- Jean Guerrero, Leo Castañeda (2017): "Decades-Long Struggle To Secure US-Mexico Border", *America's Wall*, disponible en <https://www.kpbs.org/news/2017/nov/13/americas-wall/>, fecha de consulta del 19 de noviembre del 2020.
- Jones, Reece y Corey Johnson (2016): "Border militarisation and the re-articulation of sovereignty", *Transactions of the Institute of British Geographers*, 41, 2, pp. 187–200.
- Jones, Reece y otros. (2017): "Interventions on the state of sovereignty at the border", *Political Geography*, Elsevier Ltd, 59, pp. 1–10.
- Jorgenson, A. K., Clark, B., & Givens, J. E. (2012): "The Environmental Impacts of Militarization in Comparative Perspective: An Overlooked Relationship", *Nature and Culture*, 7(3), pp. 314–337
Fecha de consulta el 20 de noviembre del 2020.
- Jorgenson, A. K., Clark, B., & Kentor, J. (2010): "Militarization and the Environment: A Panel Study of Carbon Dioxide Emissions and the Ecological Footprints of Nations", 1970–2000. *Global Environmental Politics*, 10(1), pp. 7–29.
- Kaplan, R. D. (2000): *La anarquía que viene*. Madrid: Ediciones B.
- Keyes, Elisabeth (2017): "Environmental Refugees? Rethinking What 's in a Name What's in a Name? ", 44 N.C. J. Int'l L, pp. 1–26.
- Klare, Michael T, (2006): "Sangre y petróleo", Barcelona, Uranio.
- Klare, Michael T, (2003): "Guerras por los recursos", Barcelona, Uranio.
- Klein, Naomi (2007): "La doctrina del shock", Paidós Ed, Barcelona. Traducción del original inglés: "The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism", Knopf Canada Ed. Versión en catalán: "La doctrina del xoc. L'ascens del capitalisme del desastre", Ed. Empúries, 2007.
- Klein, Naomi (2017): *Decir No, no basta*. Paidós Ed., Barcelona.
- Knox, J. (2018): "Principios Marco sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente", disponible en: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/principios-marco-sobre-derechos-humanos-y-medio-ambiente/anguage=es, fecha de consulta del 20 de noviembre del 2020.
- Knight, Danielle (1998): "CLIMATE: U.S. Exempts Military from Kyoto Treaty", *Inter Press Service*, May 20, 1998. Disponible en <http://www.ipsnews.net/1998/05/climate-us-exempts-military-from-kyoto-treaty/>, fecha de consulta 3 de marzo de 2020.
- Léonard, Sarah (2010): "EU border security and migration into the European Union: FRONTEX and securitisation through practices", *European Security*. Taylor & Francis, 19(2), pp. 231–254.
- Lederach, John Paul, (2010): *Transformació de conflictes. Petit manual d'ús*, Barcelona, Icària.
- Lederach, John Paul, (1995): "Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Culture", *Syracuse University Press*. Nueva York.

- Livingstone, D. (2015): "The climate of war: Violence, warfare, and climatic reductionism" *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*. Vol. (6) 5, pp. 437-444.
- Mach, K. J. y otros (2019): "Climate as a risk factor for armed conflict", *Nature*. Vol. 571, pp. 193-197.
- Mac Ginty, Roger (2013): "Introduction, Abingdon, Routledge Handbook of Peacebuilding".
- Majeed, Abdul (2017): "Los muros del mundo: 21 fronteras históricas", *El País*, disponible en https://elpais.com/elpais/2017/02/27/album/1488207932_438823.html#foto_gal_2, fecha de consulta 2 de julio de 2020.
- Martínez Guzmán, Vicent, (2009): *Filosofía para hacer las paces*, Barcelona, Icaria.
- Marx, Karl, i Engels, Friedrich, (1976), "El Capital", Barcelona, Grijalbo.
- Marin-Ferrer, M., Vernaccini, y L. i Poljansek, K. (2017): "Index for Risk Management" *Concept and Methodology Report-Version 2017*, disponible en: <https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index>. Fecha de consulta el 12 de junio de 2020.
- McLeman, Robert y Gemenne, François (2018): "Environmental migration research: evolution and current state of the science", en: McLeman y Gemenne (eds.), *Routledge Handbook of Environmental Displacement and Migration*, Nueva York, Routledge, pp. 3-17.
- McLeman, Robert y Smit, Barry (2006): "Migration as an adaptation to climate change", *Climatic Change*, 76(1-2), pp. 31-53.
- Melman, Seymour, (1972): "El capitalismo del Pentágono. La economía política de la guerra", Mèxic, Segle XXI.
- Melman, Selman, (1985): "The Permanent War Economy: American Capitalism in Declini", *Simon and Schuster ed.* Nueva York.
- Meulewaeter, Chloé (2017): "Peace, war and ecology: Is the military an issue for climate change?", en G. Pataki (Ed.), *12th Conferencia de la European Society for Ecological Economics*. Budapest, Hungary.
- Meulewaeter, Chloé y Brunet, Pere (2020): "Military Spending and Climate Change", en *Military Spending and Global (in)Security: Militarising conflicts, climate change and people's lives*. Routledge. Londres.
- Mossaddeq, Nafeez y otros (2016): "Un estado de excepción permanente: contingencias civiles, gestión del riesgo y derechos humanos" en: Buxton, Nick y Hayes, Ben (eds.), *Cambio climático S.A*, Madrid, Fuhem Ecosocial, pp: 123-150.
- Muller, Benjamin, J. (2009): "Borders, Risks, Exclusions", 3, 1, pp: 67-78.
- Mutimer, David (2013): "Critical Security Studies: A Schismatic History", en: Collins, Alan. *Contemporary Security Studies*, Oxford, Oxford University Press, pp. 68-85.
- Naciones Unidas (2020): "Historic UN Human Rights case opens door to climate change asylum claims", disponible en <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25482&LangID=E>, fecha de consulta 15 de junio de 2020.
- Naciones Unidas, (1994): "Informe de Desarrollo Humano", Nueva York, PNUD.
- Neslen, Arthur (2015): "Pentagon to lose emissions exemption under Paris climate deal". *The Guardian*, 14 de diciembre de 2015, disponible en <https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/14/pentagon-to-lose-emissions-exemption-under-paris-climate-deal>, fecha de consulta 3 de marzo de 2020.

- Nkala, Oskar (2015): "Tunisia, Egypt Boost Libyan Border Security", *Defense News*, <https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2015/07/26/tunisia-egypt-boost-libyan-border-security/>, fecha de consulta 30 de junio de 2020.
- Nkala, Oskar (2018): "Tunisia getting \$20 million sensor package for border security", *Defence Web*, Disponible en http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=50895:tunisia-getting-20-million-sensor-package-for-border-security&catid=87:border-security&Itemid=188, fecha de consulta 15 de junio de 2020.
- Noack, Rick (2014): "These 14 walls continue to separate the world", *The Washington Post*, disponible en https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/11/these-14-walls-continue-to-separate-the-world/?utm_term=.d1de0df76f18, fecha de consulta 3 de julio de 2020.
- Organización Mundial de las Migraciones (2020): "Términos fundamentales sobre migración", disponible en <https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion>, fecha de consulta 5 de junio de 2020.
- Ortega, Pere (2015a): "Gasto militar", en Calvo Rufanges, Jordi y Pozo Marín, Alejandro (Eds.), *Diccionario de la guerra, la paz y el desarme*. Icaria, Barcelona.
- Ortega, Pere (2015b): "I+D militar", en Calvo Rufanges, Jordi y Pozo Marín, Alejandro (Eds.), *Diccionario de la guerra, la paz y el desarme*. Icaria, Barcelona.
- Ortega, Pere (2015c): "Industria militar", en Calvo Rufanges, Jordi y Pozo Marín, Alejandro (Eds.), *Diccionario de la guerra, la paz y el desarme*. Icaria, Barcelona.
- Ortega, Pere (2020): "Crítica a la razón del presupuesto militar (años 2019-2020)", *Centre Delàs d'Estudis per la Pau*, Barcelona.
- Ortega, Pere (2018): *La economía (de guerra)*. Icaria, Barcelona,
- OTAN (2010): "Strategic Concept: Active Engagement, Modern Defence", disponible en: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82705.htm, fecha de consulta 9 de abril de 2020.
- Parkinson, S. (2020): *The Environmental Impacts of the UK Military Sector*.
- Perlo-Freeman, Sam (2020): "Fighting the Wrong Battles. How obsession with military power diverts resources from the climate crisis", Campaign Against the Arms Trade (CAAT), disponible en: <https://caat.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/fighting-the-wrong-battles-feb2020.pdf>, fecha de consulta 5 de marzo de 2020.
- Piven, Ben (2014): "Walls of the world aim to keep unwanted foreigners out, hold prosperity in", *Aljazeera*, disponible en <http://america.aljazeera.com/articles/2015/9/5/walls-world-keep-foreigners-out.html>, fecha de consulta 20 de junio de 2020.
- Prichard, Ian (2014): "Arms to Renewables. Work for the future", Campaign Against the Arms Trade (CAAT), disponible en: <https://caat.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/arms-to-renewables-background-briefing.pdf>, fecha de consulta 10 de abril de 2020.
- President of the United States (2015): "National Security Strategy", disponible en https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf Fecha de consulta 8 de abril de 2020.
- Renner, Michael, (1993): "Armamento y Seguridad. Dimensiones económicas y ambientales", La Cataracta-Bakeaz. Madrid.

- Ruiz Benedicto, Ainhoa (2019): "Custodiar la Fortalesa. El paper de Frontex en la militarització i securització dels fluxos migratoris a la Unió Europea" Centre Delàs d'Estudis per la Pau, disponible en: <http://www.centredelas.org/ca/custodiarlafortalesa>, fecha de consulta el 6 de abril de 2020.
- Ruiz Ainhoa, Brunet, Pere (2018): "Levantando muros, políticas del miedo y securización en la Unión Europea", disponible en <http://centredelas.org/publicacions/levantandomuros/?lang=es>, fecha de consulta 3 de junio de 2020.
- Rifkin, Jeremy (2019): *El Green New Deal global*. Ediciones Paidós. Barcelona.
- Ripple, William J., Wolf, Christopher y otros (2017): "World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice", en *Bioscience*, 67, 12, 1026–1028, disponible en <https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229>, fecha de consulta el 1 de abril del 2020.
- Saddiki, Said (2017): *World of Walls: The Structure, Roles and Effectiveness of Separation Barriers*. Cambridge, UK, Open Book Publishers.
- Scanlan, Oliver (2018). "A Tale of Two Puzzles: Accounting for military and climate change expenditures", Oxford Research Group, <https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=adfeac52-02fd-4b85-bcd3-3c729ecbc727>, fecha de consulta 3 de marzo de 2020.
- Sempere, Joaquím, (2019): "Las cenizas de Prometeo. Transición energética y socialismo", Barcelona, Pasado y Presente.
- Selby, J. y otros (2017): "Climate change and the Syrian civil war revisited" *Political Geography*. Vol. 60, pp. 232-244.
- Sheehan, Michael (2013): "Military Security", en: Collins, Alan, *Contemporary Security Studies*. Oxford, Oxford University Press, pp: 148-159.
- Singer, J. D., & Keating, J. (1999): "Military preparedness, weapon systems and the biosphere : A preliminary impact statement" *New Political Science*, 21(3), 37-41.
- Swain, Ashok i Öjendal, Joakim, (2018): "Environment Conflict and Peacebuilding", Abingdon, Routledge.
- TeleSur (2015): "Arabia Saudita construye muro en frontera con Irak", disponible en <https://www.telesurtv.net/news/Arabia-Saudita-construye-muro-en-frontera-con-Irak-20150115-0058.html>, fecha de consulta 30 de junio de 2020.
- Tian, Nan, Kuimova, Alexandra, Lopes da Silva, Diego y otros (2020): Trends in World Military Expenditure, 2019. *SIPRI Fact Sheet*. April 2020.
- Vallet, Élisabeth y David, Charles (2012): "Introduction: The (Re)Building of the Wall in International Relations", *Journal of Borderlands Studies*, 27(2), pp. 111–119.
- Vitali, Stefania y otros (2011): "The network of global corporate control". A: PLoS ONE, Vol. 6: disponible en <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0025995>, fecha de consulta el 8 de junio del 2020.
- Wenar, Leif, (2017): *Petróleo de sangre*, Madrid, Armaenia.
- Williams, Jill M. (2016): "The safety/security nexus and the humanitarianisation of border enforcement", *Geographical Journal*, 182, 1, pp.27–37.
- Worldwacht Institute, (2016): "El estado del mundo", Madrid, FUHEM.

INFORME Núm. 37

Banca Armada en España 2019

Jordi Calvo Rufanges

Marzo de 2019

INFORME Núm. 38

Violència, seguretat i construcció de pau a les ciutats

Tica Font, Pere Ortega

Julio de 2019

INFORME Núm. 39

Nuevas armas contra la ética y las personas.

Drones armados y drones autónomos

Joaquín Rodríguez, Xavi Mojal, Tica Font,

Pere Brunet

Noviembre de 2019

INFORME Núm. 40

Custodiar la fortaleza. El papel de FRONTEX en la militarización y securitización de los flujos migratorios en la Unión Europea

Ainhoa Ruiz Benedicto

Noviembre de 2019

INFORME Núm. 41

Aculturación y purplewashing en el ejército español. Un estudio sobre las mujeres símbolo

María de Lluç Bagur, Elisenda Ribes

Diciembre de 2019

INFORME Núm. 42

La industria militar y de seguridad de fronteras en Cataluña

Nora Miralles, Pere Ortega

Enero de 2020

INFORME Núm. 43

Crítica a la razón del presupuesto militar (años 2019 y 2020). Pese a la crisis del COVID-19, prosigue el desatino armamentista

Pere Ortega

Mayo de 2020

INFORME Núm. 44

Oriente Medio y Asia, mercados lucrativos para las armas españolas. Análisis del comercio de armas 2018 y 2019

Tica Font, Eduardo Melero, Edgard Vega

Junio de 2020

INFORME Núm. 45

Aseguradoras y fondos de pensiones que financian empresas de armas. Actualización de la Banca Armada en España 2020

Jordi Calvo, Eduardo Aragón

Septiembre de 2020

INFORME Núm. 46

Mundo amurallado. Hacia el apartheid global

Ainhoa Ruiz Benedicto, Mark Akkerman, Pere Brunet

Noviembre de 2020

Con el apoyo de:

